

# *Poder Judicial de la Nación*

N° 70 /2023 Rosario, 23 de octubre de 2023.

## **VISTOS:**

Los autos caratulados “TOSINI, Fabián y otros s/ infracción a la ley 24.769”, número FRO 18564/2017/TO2 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 de esta ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

## **ANTECEDENTES:**

### **1.- Datos de los acusados:**

a) FABIÁN EDGARDO TOSINI, DNI N° 18.437.219, argentino, nacido el 01/07/1967 en Rosario, provincia de Santa Fe, hijo de Edgardo Lorenzo y de Myriam Noemí Albanesi, asistido técnicamente por el Dr. Walter Stramazzo;

b) ANA PAULA SAPPA, DNI N.º 37.686.492, argentina, nacida el 26/07/1994 en Rosario, provincia de Santa Fe, hija de Carlos Alberto y de Ana María D'Agostino, con la asistencia letrada del Dr. Leopoldo Montiel;

c) OMAR ANTONIO PAZZI, DNI 14.928.453, argentino, nacido el 24/06/1962, en la ciudad de Serodino, provincia de Santa Fe, hijo de Miguel Antonio Pazzi y de Viscoitaliano Gladys Dominga, con la representación letrada del Dr. Carlos Torres e Souza;

d) HERNÁN GUSTAVO PROTTI, DNI N° 25.322.401, argentino, nacido el 02/04/1976 en Rosario, provincia de Santa Fe, hijo de Miguel Argentino Protti y de María Teresa Coniglio, con la asistencia técnica del Dr. Luis Armando Va Ricucci;

### **2.- Inicio y trámite de la causa:**

Esta causa se trata de una elevación parcial dentro de los autos “LIPORACI, Marcelo Fabián y otros s/ infracción a la ley 24.769” expte. 18564/2017/TO1. La causa reseñada tuvo su tramitación y juzgamiento por ante este Tribunal Oral, con otra composición unipersonal.

Se destaca que comparten su investigación, y su trámite resulta idéntico en varios puntos, si bien, se distingue en lo concerniente a los imputados requeridos a juicio en la presente parcialidad, especialmente luego de las elevaciones a juicio de las primeras parcialidades, como antes se mencionó.

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



La causa tuvo su inicio como consecuencia de la denuncia efectuada por la Dirección Regional Rosario de la AFIP-DGI ante la Fiscalía Federal n° 3 de Rosario en fecha 31/03/2017 en la que el Fisco refirió a la existencia de un grupo organizado de personas dedicado a la creación de usinas de facturación electrónicas apócrifas a gran escala, para su posterior comercialización a usuarios del mercado, quienes la utilizarían para disminuir la base imponible de diversos tributos. Además, dio cuenta de la detección de maniobras de constitución de empresas ficticias o pantallas para esconder o simular negocios, que utilizaban los servicios “trámite web” para realizar operaciones tales como cambios de domicilios, modificación de integrantes de sociedades, presentaciones de declaraciones juradas, pagos y emisión de comprobantes electrónicos en línea, totalmente apócrifos.

En la denuncia se indicó que esa organización tenía como objetivo crear firmas ficticias y comercializar comprobantes electrónicos apócrifos, los que incorporados en los registros de compras por parte de los usuarios, generaban en dichas empresas un crédito de I.V.A. que le permitían reducir las bases del cálculo de dicho impuesto; y que en el período comprendido entre enero de 2015 a diciembre del año siguiente, se detectaron 19 usinas, sólo en relación al I.V.A., con un crédito fiscal de \$247.315.951, mediante la emisión electrónica de 28.795 comprobantes por un monto neto de \$1.204.276.275, usados por 3.419 usuarios –personas humanas o jurídicas- ubicados en distintas provincias. Refirió que los organizadores serían profesionales y contaría con asesores que intervenían en el armado de verdaderas empresas ficticias a fin de obtener su inscripción en el organismo con la única finalidad de crear una red de venta de facturas electrónicas a los usuarios de las mismas, para que puedan concretar la evasión de los impuestos al valor agregado y, consecuentemente al impuesto a las ganancias.

En ese contexto, se individualizó a los contadores María Cristina Ottaviano y Eduardo José Cayetano Furini, al escribano Fabián Edgardo Tosini y Sandra María del Luján Rotoloni, Marcelo Luis Miranda, Isis Miranda y Lelio Omar Serafini, detallando pormenorizadamente las vinculaciones entre ellos (ver fs. 4/44 de los autos principales).



## *Poder Judicial de la Nación*

Inmediatamente, el Fiscal General, Dr. Federico Reynares Solari, requirió la instrucción y le solicitó al Juez de turno una serie de medidas, tales como intervenciones telefónicas y de correos electrónicos de los sujetos denunciados por el organismo recaudador, como así también la realización de tareas de campo por parte de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de Rosario de Gendarmería Nacional Argentina con el fin de determinar y recabar todo tipo de información atinente a la existencia y el funcionamiento de las distintas empresas fiscalizadas en sus respectivos domicilios (ver fs. 45/61 vta.). Dicho pedido fue despachado favorablemente por parte del Juzgado Federal n° 3 de Rosario, mediante auto del 24/04/2017, luego de que el Dr. Marcelo Bailaque se declarare incompetente en razón del turno.

En concreto, el Juez a cargo de la instrucción hizo lugar a los pedidos por parte del Fiscal General, disponiendo la intervención telefónica de los abonados n° 0341-156223465, 034153984193, 03462- 15667859 y 0341-15349151, delegando en dicho Ministerio Público la dirección de la investigación, en los términos del art. 196 del C.P.P.N. (fs. 63 y 64/65).

Las medidas antes referidas, junto con algunas otras complementarias, arrojaron información relevante para el desarrollo de la pesquisa y la comprobación de hechos incluidos en la denuncia que diera origen a la presente causa (ver al respecto los informes agregados a fs. 128/129, 149/150, 157/158, 162/202, 234/235, 276/294, 365/367, 394/413, 483/492, 543/545, 570/58, 583/613 y 733/744).

Con esos antecedentes, concretamente con el resultado de las escuchas telefónicas, los informes acompañados por la AFIP-DGI y las tareas de campo efectuadas por Gendarmería Nacional Argentina, en fecha 3 y 4 de julio de 2017 los Fiscales Federales, Dres. Mario Gambacorta y Marcelo Degiovanni, pidieron las detenciones de María Cristina Ottaviano, Adrián Marcelo Zeballos, Ricardo Astudillo, Lelio Omar Serafini, Marcelo Liporaci y Jorge Centeno, a la par de solicitar el allanamiento a 32 domicilios con el fin de secuestrar documentación contable o extracontable, registros y/o elementos vinculados a las personas humanas y jurídicas investigadas, como así también los teléfonos celulares

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



y demás elementos electrónicos (cfr. fs. 683/724 vta. y 742). Dichos domicilios fueron:

1. Pasaje Melian 5754 de Rosario, el que sería habitado por Marcos Rete y María Belén Canterino y frecuentado por Marcelo Miranda Cairo (v. fs. 4 del legajo del abonado nro. 341-3491451, fs. 88/89 de autos).
2. Mendoza 621, piso 7, dpto. 1 de Rosario: domicilio desde el cual se habrían emitido facturas a nombre de las presuntas “usinas”: Albarracin Alberto David, Borda Carlos Dario, Zarren S.A., Bruson S.A, Compañía De Grandolio José Alberto, Ercole Silvia Nora y Transporte y Distribución S.A. (cfr. fs. Cd acompañado a fs. 44 y Cuerpos de IP)
3. San Nicolás 2396 de Rosario, el que sería habitado por Nélida Palma (v. fs. 95 y 196) y desde el cual se habrían emitido facturas de Wilichowski Cristian Alberto y Compañía de Transporte y Distribución S.A. (cfr. CD acompañado a fs. 44 y Cpos. de IP)
4. 9 de Julio Nro. 982 piso 5, dpto. “B” de Rosario donde funcionaría el estudio contable de María Cristina Ottaviano (cfr. fs. 168 de autos y fs. 68 del legajo de la misma y Cpo. de IP)
5. 9 de Julio Nro. 982 piso 2, dpto. “A” de Rosario: domicilio donde habitaría María Cristina Ottaviano junto a su madre
6. Paraguay 239 Piso 1 de Rosario donde podría habitar y/o ser frecuentado por Marcelo Luis Miranda Cairo (fs. 99, 214 y 401 de autos; fs. 13/14 del legajo de intervenciones telefónicas del nombrado).
7. José Hernández nro. 1756 de la localidad de Granadero Baigorria donde habitaría Carlos Alberto Retamar (v. fs. 77 y 175).
8. Poeta Fontanarrosa nro. 330 Dpto. 1 de Rosario donde habitaría Alberto David Albarracin (fs. 478 y 184)
9. Don Bosco nro. 196 bis de Rosario, el que sería habitado por Lelio Omar Serafini (fs. 103, 402) y desde el cual se habrían emitido facturas a nombre de Núñez Karina Marisel, entre otros.
10. Don Bosco n° 194 bis de Rosario, domicilio donde habitaría Oliveros Nora, quien sería madre de Lelio Serafini y titular del servicio de internet, y en cuyo domicilio podrían encontrarle elementos vinculados al ilícito investigado.



*Poder Judicial de la Nación*

11. Iriondo 2226/2228 de Rosario, el primero fue el domicilio sindicado como aquella donde la cual se emitieron facturas presuntamente apócrifas y la segunda es la sindicada por al preventora como el domicilio de Marcelo Fabián Liporaci, siendo ésta la indicada por el nombrado como correspondiente a su domicilio en diversas escuchas telefónicas.
12. Dorrego 2166 de Zavalla, el que sería frecuentado por Marcelo Liporaci y habitado por Guillermina Sgariglia.
13. San Luis 1950, depto. 1 de Rosario, donde residiría José Alberto Grandolio.
14. Santa Fe n° 2447, depto. 2 de Rosario, donde habitaría Ricardo José Rodríguez.
15. Muñoz n° 364 de Rosario, donde habitaría Lucía Leticia Moncalieri.
16. Pasaje Ñanduti 1245 de Rosario, donde habitaría Karina Mariesel Núñez,
17. Vera Mujica n° 2348, depto. 6 de Rosario, habitado por Silvia Nora Ercole
18. Italia 118 de Villa Gobernador Gálvez, habitado por Musto Sabrina Luciana
19. Carrega 3570 de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, donde habitaría Carlos Darío Borda.
20. Santa Fe nro. 1219 piso 7 Dpto. "D" de Rosario, domicilio desde el cual se habrían emitido facturas a nombre de Domach S.A., Aguirre Fernando Emilio y María Belén Canterino.
21. Alvear nro. 1721 de San Nicolás donde habitaría el llamado Fernando Emilio Aguirre (fs. 91 y 397/398)
22. Santiago 807 piso 10 dpto "c" de Rosario donde podría habitar Rubén Darío Meli (fs. 198)
23. Oroño 1187, piso 8, depto. G de Rosario, donde viviría Néstor Rubén Tesorero.
24. Av. Libertad n° 158, piso 7 de Rosario, habitado por Ricardo Astudillo.
25. Pellegrini 20, depto. 1 PB de Rosario, donde funcionaría la oficina de Jorge Centeno.
26. Gorriti 343 de Rosario, domicilio donde habitaría Jorge Centeno.
27. Córdoba 645, piso 7, depto. 7 de Rosario, donde funcionaría una de las oficinas donde podrían trabajar Ricardo Astudillo, Adrián Zeballos, Nair García, Hernán Rocca y (a) Loly.



28. Juan Pablo II nro. 208 bis de Rosario, que sería otro de los domicilios habitados por Marcelo Liporaci y al que el mismo en la escuchas podría hacer referencia como “la casa” (fs. 610/611)
29. Bv. Argentino nro. 7778 de Rosario donde residiría el contador Eduardo Furini (cfr. fs. 606/607 de autos).
30. Pasaje Storni n° 701, E.P, posible oficina 3 de Rosario, donde funcionaría la escribanía del Dr. Fabián Tosini.
31. Pellegrini 1434, piso 2, dept. 5 de Rosario, donde funcionaría el estudio contable del C.P.N. Eduardo Furini;
32. Giachino n° 780 de la localidad de Luis Palacios, provincia de Santa Fe, donde podría habitar y/o frecuentar el llamado Adrián Marcelo Zeballos.

Mediante resolución del 04/07/2017, el Juez actuante resolvió favorablemente el pedido del Ministerio Público Fiscal, considerando que las actuaciones que plasmaron las tareas llevadas a cabo hasta ese momento, resultaban suficientes para presumir -en los términos del art. 224 y ss. del C.P.P.N.- que los domicilios investigados estaban vinculados a la actividad de la organización criminal, disponiéndose el secuestro de documentación contable y extracontable, soportes informáticos y cualquier otro elemento de interés (fs. 745/753). En dicha resolución, también se ordenó la detención de María Cristina Ottaviano, Adrián Marcelo Zeballos, Ricardo Astudillo, Lelio Omar Serafini, Marcelo Liporaci y Jorge Centeno. Además, el Juez se expidió de manera favorable al pedido de intervenciones telefónicas peticionado por la Fiscalía (ver resolución del 05/07/2017 a fs. 861/862 vta.).

Los allanamientos se llevaron a cabo el día 05/07/2017, y tuvieron como resultado el secuestro de documentación, como así también la detención de las personas mencionadas precedentemente, a excepción de Adrián Marcelo Zeballos, quien compareció espontáneamente al Juzgado.

Los resultados se plasmaron en sus respectivas actas que fueron agregadas a fs. 874/875, 883/887, 895/898, 908/911, 919/922 vta., 934/935 vta., 942/943, 949/950, 958/963, 975/977, 988/989, 1000/1001 vta., 1009/1010, 1017/1020, 1027/1028, 1040/1042, 1049/1051, 1060/1061, 1067 y vta., 1076 y vta., 1083/1084 vta., 1099/1102, 1125 y vta., 1139/1141, 1152/1153



## *Poder Judicial de la Nación*

vta., 1164/1166, 1174/1176, 1187/1188, 1195/1197, 1204/1205, 1304/1305, 1460/1461 vta., 1478/1479 vta. y 1575 y vta. de autos.

Al día siguiente, el Juez a cargo de la instrucción les recibió declaración indagatoria a los detenidos; oportunidad en la que les especificó una base fáctica: “Integrar... un grupo organizado que se dedicaría a la creación de empresas, así como a la comercialización de documentación presuntamente apócrifa (comprobantes electrónicos y manuales) emitidos por aquellas, susceptible de brindar sustento a contribuyentes que deciden emplear tal mecanismo y logística para evadir impuestos siendo que al ser utilizadas dichas facturaciones apócrifas por los contribuyentes mediante la incorporación a sus registros de compras podrían generar un crédito fiscal y/o gastos ficticios y de esa manera disminuir los saldos de impuestos que correspondían ingresar tanto en IVA como en ganancias con el consiguiente perjuicio fiscal, generando un crédito fiscal impugnado aproximado de doscientos cuarenta y siete millones trescientos quince mil novecientos cincuenta y un pesos, mediante la emisión de 28.795 comprobantes electrónicos apócrifos, por un monto neto aproximado de un mil doscientos cuatro millones doscientos setenta y seis mil doscientos setenta y cinco pesos, y siendo las “usinas” utilizadas para la emisión de comprobantes apócrifos: Bruson S.A., Zarren S.A., Retamar Carlos Alberto, Albarracín Alberto David, Grandolio José Alberto, Domach S.A., Rodríguez Ricardo José, Moncalieri Lucia Leticia, Núñez Karina Marisel, Giacinti Italo José, Ercole Silvia Nora, Musto Sabrina Luciana, Borda Carlos Darío, Wilichowski Cristian Alberto, Canterino María Belén, Antúnez José María, Rete Marcos Matías, Aguirre Fernando Emilio, Bio Sense S.R.L, Intermedios Y Publicidad S.R.L, Quirotex Instrumental S.R.L, Clementina S.R.L, Iglesia Jardiel Emir, Meli Rubén Darío, Compañía De Transporte Y Distribución S.A., Baccuo S.A, Carguen S.A, Car Car Carnica Porteña S.R.L, Lier S.A, Neumodon, Ereña, De Cárdena, Ercoles, Licousi, Minchioqui, Miranda, Shirona, Vildasola Luis, Vildasola René, Villar Natalia, Transporte Y Carrier, Medrano, Aguirre, Goldo, Sobran, Arena, Compañía Argentina, Mym, Erbig, Adma, Hidrotec, Cantero, Rearte, Maidana, Ezequiel Vélez, Infra, Artero Y Abuelo Domingo, Agropecuaria Don José, Almijo, Totaro, Moya Y Argengroup, Lacor, Infranova, Ortigoza, Franweb, Rio Paraná, Tw Logística, Empresa Emerys Y Transweb.



En la misma oportunidad, también se les indicó cuál sería la estructura de la organización y las conductas que los encartados habrían desarrollado en calidad de miembros integrantes. En este sentido, se les indicó que dicha organización estaría constituida por dos subgrupos, 1) teniendo como organizadores a Lelio Omar Serafini, encargado de la realización de trámites bancarios y ante el organismo fiscalizador, tendientes a la inscripción de las personas humanas y jurídicas que, ulteriormente, serán utilizadas como usinas de facturación apócrifa, Marcelo Liporaci, titular de “usinas” y emisor de facturación apócrifa y Miguel Jorge Centeno, titular de “usinas” y que utiliza en su propio provecho las usinas de titularidad de Liporaci, y 2) Ricardo Astudillo, coordinador y administrador de los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios tanto para la creación de dichas empresas como para la comercialización de las facturas por ellas emitidas, Cristina Ottaviano quien lleva la contabilidad del negocio ilegal brindando asesoramiento contable e impositivo en virtud de su profesión y Adrián Marcelo Zeballos encargado de la gestión operativa (ver fs. 1232/1233, 1234/1235, 1236/1237, 1238/1241, 1254/1255 y 1317/1319).

Asimismo, se les atribuyó que dicha organización, también estaría integrada por otras personas. Entre ellos Marcelo Miranda Cairo, quien sería titular del servicio de internet desde el cual surgieron los “IP” empleados para realizar trámites web relativos a las presuntas usinas, como así también intervenir en la comercialización de facturas apócrifas. Además, tendría a su cargo la constitución y realización de trámites inherentes a las empresas cuestionadas y realizaría trámites bancarios, pudiendo incluso resultar testafarro de cuentas bancarias correspondientes a Ricardo Astudillo y Marcos Rete, quien sería una de las “usinas” investigadas y esposo de María Belén Canterino (otra presunta usina), adicionalmente, socio de Domach S.A., Bruson S.A., Intermedios Y Publicidad S.R.L., Quirotex S.R.L.

Se especificó en ese momento que Fabián Tosini, en su condición de escribano, intervendría en la constitución de sociedades ficticias, constatando domicilios de presuntas usinas a requerimiento del reseñado Miranda Cairo; Eduardo Furini, quien habría certificado el inventario por aporte de moneda extranjera de la presunta usina Bio Sense S.R.L entre otras, intercambiaría factu-





## *Poder Judicial de la Nación*

ras con los integrantes del grupo, como posible titular de alguna usina; en tanto Guillermina Sgariglia, quien sería titular del servicio de internet desde el cual operaron "IP" utilizados para la emisión de facturas apócrifas, prestaría colaboración a quien sería su esposo Marcelo Liporaci emitiendo facturas y recibiendo pedidos; Néstor Tesorero sería intermediario en la comercialización de facturas presuntamente apócrifas, y podría "reclutar" personas a los fines de su inscripción ante el organismo fiscalizador; Matías Centeno uno de los ejecutores de las ordenes de su padre, Jorge Centeno, en lo que hace a la preparación de pedidos de facturación apócrifa, Hernán Racca y Nair García serían "empleados" y ejecutores de las instrucciones de Astudillo, Zeballos y Ottaviano, confeccionando tickets y facturas manuales; Melisa Cardozo, titular de sus propias "usinas" y quien confeccionaría comprobantes "manuales" por encargo de Astudillo, y Fabián Mele, Miotti, Ariel Ledesma, Matías Leiva, Iván Dobboletta, Miguel Sbaissero y Mario Vignati quienes actuarían como vendedores e intermediarios en la comercialización de los comprobantes presuntamente apócrifos (ver también ampliaciones de dichas declaraciones indagatorias obrantes a fs. 1519/1520, 1521/1522, 1523/1524, 1525/1526, 1527/1528, 1603/1604).

Con posterioridad, también a instancias de la fiscalía, se produjo la detención de Marcos Rete, Atilio Miotti, Fabián Edgardo Tosini, y Guillermina Sgariglia (ver fs. 1331), a quienes se les recibió declaración indagatoria por los mismos hechos indicados en la imputación anteriormente descripta (ver fs. 1342/1344, 1345/1347, 1348/1350 y 1433/1435 respectivamente).

Por otro lado, en fecha 13/07/2017 compareció espontáneamente ante la sede del Juzgado Federal Nro. 3, Nair Juana García, (ver audiencia indagatoria de fs. 1430/1432). Hernán Racca, Ana Paula Sappa e Iván Enzo Dobboletta fueron indagados por los mismos hechos en fecha 28 de julio de ese mismo año (ver actas de fs. 1624/1626, 1629/1631 y 1632/1634 respectivamente).

El 3 de agosto de 2017, el Juez instructor dictó el procesamiento de Lelio Omar Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Jorge Miguel Centeno, Ricardo Cayetano Astudillo, María Cristina Ottaviano, Adrián Marcelo Zeballos, Guillermina Sgariglia, Marcos Matías Rete, Nair Juana García y Atilio Miotti,



como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y penado en el art. 15 inc. "c" de la ley 24.769 (mod. por la ley 25.874), y en calidad de organizadores respecto de los seis primeros, conforme lo previsto en la última parte de dicho artículo. En ese pronunciamiento, dispuso además, la falta de mérito de Fabián Tosini (ver fs. 1725/1787).

Una semana más tarde, en fecha 10/08/2017, el Juez también dispuso el procesamiento de Hernán Racca e Iván Enzo Dobboletta, como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el art. 15 inc. "c" de la ley 24769 (mod. por la ley 25.874) y se dispuso la falta de mérito respecto de Ana Paula Sappa (ver fs. 1898/1909 vta.).

Recurridos dichos procesamientos, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó las resoluciones, pero revocó únicamente lo relativo a las faltas de mérito de Fabián Tosini y Ana Paula Sappa (ver acuerdo de fecha 29/12/2017 agregado a fs. 2549/2579). Dicha resolución quedó firme (v. Resolución Registro nro. 338/18 de la Cámara Federal de Casación Penal).

Siguiendo el trámite de la causa, en fecha 31/08/2017 se recibió declaración indagatoria a Eduardo Furini y Marcelo Miranda Cairo (v. fs. 1991/1994 y 1995/1997); y una semana más tarde se hizo lo propio con Melisa Cardozo, Matías Centeno, Mario Oscar Vignati, Fabián Guillermo Mele y Darío Rubén Migliorelli (ver fs. 2018/2020 vta., 2022/2024 vta., 2025/2027 vta., 2029/2031 vta. y 2034/2036 vta.). Mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2017, el Juez los procesó como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el art. 5 inc. "c" de la ley 24. 769 (mod. por la ley 25.874), con excepción de Eduardo Furini y Mario Oscar Vignati, sobre quienes se dispuso la falta de mérito (ver fs. 2083/2107 vta.).

Los procesamientos adquirieron firmeza (v. Acuerdo de fecha 26/11/2018 de la Cámara Federal de Apelaciones) y en cuanto a la falta de mérito de Furini, la Fiscalía Federal interpuso recurso de revocatoria, el cual fue receptado por el Juez instructor, y el referido fue recibido en declaración indagatoria el día 10/05/2018 (ver fs. 2392 y vta.). En fecha 22/04/2018, Furini resultó procesado como coautor del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15, inc. "a" y "c" de la ley 24.796) (fs. 2396/2404).



## *Poder Judicial de la Nación*

Mediante decreto del 1/08/2018, se tuvo por constituida a la AFIP- DGI como parte querellante, que propuso la realización de medidas de prueba (fs. 2419), al igual que la Fiscalía Federal (fs. 2423/2424), todo lo cual fue receptado mediante decreto de fs. 2428.

Consecuentemente, en fecha 31/08/2018, la Fiscal Federal, Dra. Adriana Saccone, requirió la elevación parcial de la causa a juicio respecto de Lelio Omar Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Miguel Jorge Centeno Ricardo Cayetano Astudillo, María Cristina Ottaviano, Adrián Marcelo Zeballos, Marcos Matías Rete, María Guillermina Sgariglia, Nair Juana García, Hernán Racca, Atilio José Miotti, Iván Enzo Dobboletta y Eduardo José Cayetano Furini, por entender que sus conductas encuadraban en la figura de asociación ilícita tributaria prevista y penada en el art. 15 inc. c de la ley 24769, en carácter de co-autores, revistiendo Serafini, Liporaci, Centeno, Astudillo, Ottaviano y Zeballos la calidad de organizadores de dicha asociación en los términos del citado artículo, in fine; siendo también aplicable respecto de María Cristina Ottaviano y Eduardo José Cayetano Furini la previsión del art. 15 inc. a de la ley 24.769 en razón de sus profesiones de contadores públicos nacionales y los hechos oportunamente atribuidos. (fs. 2743/2816).

Asimismo, un mes más tarde, el Juez instructor, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito de Fabián Tosini y Ana Paula Sappa, procesó a los nombrados como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el art. 15 inc. "c" de la ley 24.769, a la vez que dispuso nuevamente la falta de mérito de Mario Oscar Vignati (ver resolución de fecha 03/10/2018 obrante a fs. 2985/2995 vta.).

El día 05/10/2018 se le recibió indagatoria a Miguel Ángel Sbaiero, a quien también se lo integró en la asociación ilícita tributaria (fs. 2999/3002).

Por su parte, el día 17/10/2018, los Dres. Giunta y García de la Torre, querellantes en autos en representación de la AFIP-DGI, formularon requerimiento de elevación a juicio parcial respecto de los imputados: Lelio Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Miguel Jorge Centeno, Ricardo Cayetano Astudillo, María Cristina Ottaviano, Adrián Marcelo Zeballos, Marcos Matías Rete, Ma-



ría Guillermina Sgariglia, Nair Juana García, Hernán Racca, Atilio José Miotti, Iván Enzo Dobboletta, Eduardo José Cayetano Furini, Melisa Gisela Cardozo y Fabián Guillermo Mele, calificando sus conductas en el delito de asociación ilícita tributaria, tipificado en el art. 15 inc. "c" de la ley 24.769, en calidad de coautores. A su vez, respecto de los seis primeros, con la agravante prevista en la última parte del mismo apartado, por considerarlos organizadores de la asociación referida (ver fs. 3092/3152).

En fecha 31/10/2018, la Fiscal Federal, Dra. Adriana Saccone, requirió la elevación a juicio respecto de Melisa Gisela Cardozo y Fabián Guillermo Mele, a quienes consideró coautores del delito de asociación ilícita tributaria, en calidad de coautores (fs. 3220/3231 vta.).

El día 23 de noviembre de 2018, el Juez a cargo de la instrucción clausuró la etapa instructoria y elevó parcialmente las actuaciones a este Tribunal, respecto de Lelio Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Miguel Jorge Centeno, Ricardo Cayetano Astudillo, María Cristina Ottaviano, Adrián Marcelo Zeballos, Marcos Matías Rete, María Guillermina Sgariglia, Nair Juana García, Hernán Racca, Atilio José Miotti, Iván Enzo Dobboletta, Eduardo José Cayetano Furini, Melisa Gisela Cardozo y Fabián Guillermo Mele (fs. 3455/3457).

En fecha 12/12/2018 la Querella solicitó la elevación a juicio respecto de Marcelo Luis Miranda Cairo, Matías Ezequiel Centeno y Darío Raúl Migliorelli, como coautores del delito de asociación ilícita tributaria prevista en el art. 15, inc. "c" de la ley 24769 (fs. 3486/3498); y tres días más tarde, el Ministerio Público Fiscal hizo lo propio con esos mismos imputados (fs. 3514/3524 vta.).

Luego de la consecuente clausura de la instrucción, dichas parcialidades fueron recibidas por este Tribunal Oral en fechas 28/12/2018 y 25/2/2019.

El 2/1/2019 se le recibió declaración indagatoria a Néstor Rubén Tesorero, quien resultó procesado con prisión preventiva por el delito previsto en el art. 15 inc. "c" de la ley 24.769 (fs. 3618/3627, confirmada por Acuerdo de fecha 14/05/2019 de la Sala A CFAR). Fue requerido a juicio por los



## *Poder Judicial de la Nación*

acusadores público y privado, y se elevó a juicio al Tribunal Oral 3 (v. actuaciones de fs. 4259/4265, 4231/4237 y 4017).

Tras los actos procesales pertinentes, se celebró el juicio oral en relación a las parcialidades elevadas a ese momento, el que inició el día 9/04/2021 y se extendió hasta el 1/09/2021, fecha de lectura del veredicto, que llevó el número 44/2021, todo bajo el trámite unipersonal del Dr. Osvaldo Alberto Facciano.

En tanto, la etapa de instrucción continuó para la parcialidad que ahora convocó su juzgamiento. Así, el 23/09/2019 se le recibió indagatoria a Ariel Carlos Ledesma, resolviéndose su situación procesal mediante auto de fecha 26/09/2019, por la que el Juez de Instrucción dispuso su procesamiento sin prisión preventiva. En fecha 28/10/2019 se dispuso el procesamiento de Mario Oscar Vignati (resolución confirmada por la CFAR).

El 27/11/2020 se le recibió indagatoria a Pablo Daniel Velázquez, Hernán Gustavo Protti, en orden a la atribución del hecho que también le había sido imputado al resto de los consortes procesales. Lo mismo aconteció en fecha 30/11/2020 en relación a Bruno Oscar Ramón Ferrari, Blas Oscar Pravisani, Oscar Antonio Pazzi, Jesús María País. Gladis Isabel Vallejos fue llamada a brindar declaración indagatoria el 15/12/2020, en tanto el 29/06/2021 fue llamado a declarar Germán Andrés Litardo. Finalmente, en fecha 29/06/2021 compareció Carlos Alberto Pogolotti a los fines de ser indagado. A todos ellos se les achacó integrar la organización ilícita tributaria antes referida.

Mediante resolución de fecha 26 de julio de 2021 se ordenaron los procesamientos de Hernán Gustavo Protti, Carlos Alberto Pogolotti, Gladis Isabel Vallejos, Pablo Daniel Velázquez, Bruno Oscar Ramón Ferrari, Blas Oscar Pravisani, Omar Antonio Pazzi, Jesús María País y Germán Andrés Litado como coautores del delito de asociación ilícita tributaria previsto penado y penado en el art. 15 inc. c) de la Ley 24.769.

El 02/05/2022, la parte querellante requirió la elevación a juicio en relación a Fabián Eduardo Tosini, Ana Paula Sappa, Mario Oscar Vignati, Miguel Ángel Sbaseiro, y Ariel Carlos Ledesma en calidad de coautores del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c de la ley 24.769, actual art. 15



inc. c del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430-), y en relación al primero de los nombrados también resultaría aplicable la previsión del art. 15 inc. a) del art. 24.769, actual art. 15 inc. a del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430- en razón de su profesión de escribano público y los hechos atribuidos (v. fs. 91/106 de la elevación /TO4).

Seguidamente, el 05/05/2022, la Fiscalía Federal amplió su requerimiento de elevación a juicio por los imputados mencionados en el párrafo anterior y por la misma calificación que el representante de la AFIP (fs. fs. 107/141 de la elevación /TO4).

Por auto del 20/05/2022, el Juez Federal clausuró parcialmente la etapa instructoria a su respecto y por los hechos por los que fueron indagados y procesados (fs. 123/124 del expte. 18564/2017/TO4).

No obstante ello, tanto la acusadora particular, como el representante del Ministerio Público requirieron la elevación a juicio de Hernán Gustavo Protti, Carlos Alberto Pogolotti, Gladis Isabel Vallejos, Pablo Daniel Velázquez, Bruno Oscar Ramón Ferrari, Blas Oscar Pravisani, Omar Antonio Pazzi, Jesús María País y Germán Andrés Litardo en calidad de coautores del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c de la ley 24.769, actual art. 15 inc. c del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430-) (v. fs. 124/141 y 142/164 de la elevación /TO4).

La clausura de la instrucción por dichos imputados y en orden a tales hechos, fue dispuesta por auto de fecha 17/08/2022 (v. fs. 168/169 de la presente parcialidad).

Todo lo cual redundó en que la recepción de la causa en este Tribunal se produjera el día 12/09/2022. Citadas las partes a juicio, ofrecieron prueba, la que se proveyó mediante decreto del 16/03/2023 y 29/03/2023. En dicho proveído se fijó fecha para la celebración de la audiencia de debate oral, para el día 2 de agosto de 2023 a las 9.30 hs, como así también se dispuso la celebración de la audiencia prevista en la Acordada 1/12 de la CFCP, la que se concretó el día 6 de julio de 2023.



## *Poder Judicial de la Nación*

En fecha 21/03/2023 se dictó el sobreseimiento de Bruno Oscar Ramón Ferrari, con motivo de su deceso, lo que fue acreditado en autos (v. certificado de defunción agregado a fs. 265)

A fs. 288 los Dres. Stramazzo y Peirone realizaron una petición de previo y especial pronunciamiento y subsidiariamente solicitaron la suspensión del juicio a prueba en relación de su asistido, Fabián Tosini, acompañando copia de la presentación realizada en este último sentido durante la etapa de instrucción. Corrida la vista pertinente, la parte querellante se opuso a la suspensión del juicio a prueba, en tanto la Fiscalía General entendió que al momento no era procedente, en función de la pena en expectativa, sin perjuicio de que no había impedimentos en cuanto a la procedencia del beneficio solicitado en el caso de que luego de producido el debate y conocidas las pruebas, ello fuera analizado nuevamente.

Este Tribunal mediante auto nro. 65 del 20/04/2023 ordenó diferir la decisión a la realización de la audiencia de debate, a fin de posibilitar la presentación de nueva prueba, toda vez que, al momento no se había incorporado ningún elemento novedoso desde la anterior presentación en tal sentido durante la etapa de instrucción.

A fs. 353/354 se agregó el acta que dio cuenta de la celebración de la Audiencia Preliminar en los términos de la Acordada 1/12 de CFCP. En esa oportunidad las partes pudieron expedirse respecto de la posibilidad de concretar salidas alternativas al juicio oral, y cuestiones vinculadas a la prueba a producirse durante el debate, reiterándose que su fecha de inicio será el 2/08/2023.

Llegada la fecha señalada, -y conforme surge del informe actuarial confeccionado tal día- algunas de las partes anunciaron que se encontraban en tratativas para la concreción de un acuerdo de juicio abreviado. Por tal motivo, se difirió el inicio del debate oral a las 11.00 hs., y resultando insuficiente el término establecido, y a los fines de evitar mayores demoras, por Presidencia se dispuso dejar sin efecto la fecha de inicio del debate oral para ese día, ya que algunos letrados, representantes de personas que deseaban el debate, se encontraban en espera que los que decidieron optar por la vía abreviada.



En esa fecha, el Sr. Fiscal General presentó el acta de juicio abreviado que da cuenta del acuerdo suscripto por Oscar Blas Pravisani, Ariel Carlos Ledesma, Carlos Alberto Pogolotti, Pablo Daniel Velázquez, Jesús María País, Germán Andrés Litardo, Miguel Ángel Sbaseiro e Isabel Gladys Vallejos, y sus respectivas defensas.

Mediante decreto del 3/08/2023 se estableció audiencia de visu en los términos del art. 431 bis CPPN para el día 4/09/2023 a las 10.00 hs., y asimismo, se fijó fecha de debate oral, para el resto de los imputados para el día 31/08/2023. En ese proveído además, se proveyó prueba ofrecida por la defensa de Ana Paula Sappa.

En fecha 17/08/2023, el Sr. Fiscal General presentó un nuevo dictamen, relativo a otro acuerdo de juicio abreviado suscripto con Mario Oscar Vignatti y su defensor. Tal presentación fue proveída, disponiendo la celebración de la audiencia de visu en los términos del art. 431 bis CPPN en la fecha ya establecida para los demás consortes procesales en idénticas situaciones.

En fecha 3/08/2023 se celebró la audiencia de visu en los términos ordenados en el art. 431 bis CPPN que comprendió los acuerdos de juicio abreviado suscripto por Gladis Isabel Vallejos, Pablo Daniel Velázquez, Blas Oscar Pravisani, Jesús María País, Germán Andrés Litardo, Miguel Ángel Sbaseiro, Ariel Carlos Ledesma y Mario Oscar Vignati, contando con el asesoramiento de sus respectivos defensores con el Sr. Fiscal General. En fecha 14/09/2023 se celebró la audiencia de visu en esos términos con el Sr. Carlos Alberto Pogolotti y su defensor, debido a que dificultades personales del causante impidieron su presencia el día originariamente estatuido.

Tal como consta en el acta agregada a fs. 422 y sgtes. el día 31/08/2023 se dio inicio finalmente a la audiencia de debate oral, con respecto a cuatro imputados: los casos del escribano Fabián Edgardo Tosini y los de Ana Paula Sappa, Hernán Gustavo Protti y Omar Antonio Pazzi. El debate se extendió a razón de una jornada semanal, hasta el 12/10/2023, fecha en la que se dio lectura del veredicto.

### **3.- Acusación**

#### **a. Ministerio Público Fiscal**

---

*Fecha de firma: 23/10/2023*

*Firmado por: EUGENIO MARTINEZ FERRERO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: FLORENCIA ELISA RODRIGUEZ, SECRETARIA*



#37008296#388566300#20231023135125667



## *Poder Judicial de la Nación*

Volviendo a la investigación y como se ya se adelantara, una vez practicadas las medidas de instrucción necesarias, la Fiscalía Federal requirió la elevación a juicio en relación a Fabián Eduardo Tosini y Ana Paula Sappa, -entre otras personas- en calidad de coautores del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c de la ley 24.769, actual art. 15 inc. c del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430-). En relación al primero de los nombrados, se sostuvo que también resultaría aplicable la previsión del art. 15 inc. a ) del art. 24.769, actual art. 15 inc. a del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430- en razón de su profesión de escribano público (fs. 107/141 de la elevación /TO4).

Una segunda requisitoria de elevación a juicio fue promovida por la representante del Ministerio Público Fiscal, pero respecto de otros intervinientes, entre los que figuraban, en lo pertinente, Hernán Gustavo Protti y Omar Antonio Pazzi, en calidad de coautores del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c de la ley 24.769, actual art. 15 inc. c del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430-) (v. fs. 142/164 de la elevación /TO4).

En oportunidad de producirse los alegatos, el Sr. Fiscal General, Dr. Federico Reynares Solari inició sus alegatos diciendo que varios miembros de esa asociación ilícita fiscal, en términos que estas actividades asociativas resultaban previstas y penadas por la ley penal tributaria, entre ellos alguno de sus organizadores como también profesionales de las ciencias económicas. Señaló que muchas personas encargadas de la venta y la comercialización de esos comprobantes apócrifos ya fueron condenadas por este Tribunal mediante la Sentencia 44/ 21. En lo que aquí nos interesa, esa condena ha sido confirmada ya por la Cámara Federal de Casación, en cuanto a la ocurrencia histórica de los hechos y a las autorías endilgadas. El fallo fue dictado el 12 de julio del corriente año.

Se refirió entonces el fiscal a que se trata de hechos que se suceden en este contexto, son hechos que están probados y que tienen doble conforme en lo que interesa a la sustancia probatoria que les otorga certeza y por más que puede haber recursos extraordinarios pendientes, sostuvo que en un razonable pronóstico, consideraba improbable que esos recursos extra-



ordinarios tuvieran éxito, más allá que no impactaría sobre la configuración de los hechos. Dijo que el Ministerio Público se había tomado el trabajo de incorporar en el ofrecimiento de pruebas algunas circunstancias referidas en el juicio anterior, si bien se trataba de sentencias del Tribunal Oral y de la Cámara de Casación que son públicas, por lo que no necesitaba de un pedido expreso para poder valorar aquellos fundamentos.

Afirmó que la ocurrencia de los hechos ya está cerrada, desde el punto de vista procesal, sin perjuicio del supuesto improbable que señale que exista arbitrariedad en la interpretación de la prueba; es decir, la existencia de un grupo de personas, una organización criminal dedicada a la creación de lo que se llama usinas, empresas creadas al solo efectos de simular una operación documentada pero sin correlato real, lo que les generaba facturación, que se comercializaba con el fin de adquisición por otros contribuyentes para computar a su favor crédito fiscal y así disminuir los saldos de un impuesto a ingresar ante el fisco, tanto en concepto de IVA como en concepto de impuesto a las ganancias, y generando consecuentemente el perjuicio fiscal.

Siguió relatando que el marco del juicio anterior se dio cuenta de un entramado de contribuyentes ficticios que generaban facturación apócrifa y facilitaban a terceros la omisión de ingreso de impuestos nacionales a su cargo, se explicitó -en esos juicios- la detección de usinas con manifiesta incapacidad económica y financiera para desplegar la actividad que declaraban y se determinó la inexistencia de los domicilios fiscales declarados o la coincidencia de un mismo domicilio para varias firmas, también se pudo conocer la inclusión en la base Apoc de varios contribuyentes y la existencia de relaciones de parentesco entre varias de las personas físicas que conformaban sociedades. También fue detectada la coincidencia de profesionales intervinientes en la constitución de varias personas jurídicas y también fue sopesado el resultado obtenido a partir de las escuchas telefónicas ordenadas en cuanto de ellas surgió la emisión de comprobantes manuales y de tickets ficticios por parte de la organización investigada.

También se analizó que esos elementos esbozados por la AFIP encontraron respaldo fáctico en las probanzas obtenidas en los allanamientos de los inmuebles vinculados con los organizadores y los miembros de la



## *Poder Judicial de la Nación*

asociación ilícita tributaria y de los domicilios correspondientes a las usinas detectadas dispuestos en autos. En esto hago una pequeña digresión, sostuvo, porque los allanamientos fueron en la última etapa en donde le tocó circunstancialmente encontrarse en la fiscalía de instrucción cuando el organismo recaudador efectuó esta presentación y lo primero que se dispuso fue la realización de escuchas telefónicas y en un segundo momento se realizaron los allanamientos.

En esa causa había dos grupos, según sostuvo: el grupo de Marcelo Liporacci, Lelio Serafini y Jorge Centeno, y otro de Ricardo Astudillo y de Adrián Zeballos; que a su vez Liporacci y Astudillo eran nexo entre ambas estructuras y los jefes de esas organizaciones, y tenían facultad de dirigir y decidir respecto de las tareas que desempeñaba el resto de los integrantes. Así se pudo concluir que, entre enero de 2015 y diciembre de 2016, se detectaron diecinueve usinas las que solo en relación al IVA generaron un monto de evasión que ascendía, en aquel momento, a 247 millones de pesos mediante la emisión electrónica de 28.795 comprobantes por un monto neto de \$1.276.000 (aproximadamente). Ellos fueron utilizados por distintas empresas vinculadas entre provincias muy distantes entre sí y los usuarios fueron 3.419 personas humanas y jurídicas. Expuso todo esto para contextualizar dónde surgen, en qué contexto se dan lo que se va a discutir en esta causa, que no es la existencia de esta organización sino la intervención punible de las personas que están siendo juzgadas en este período.

Continuó refiriendo a la convocatoria del investigador del organismo recaudador -jefe de investigación de la Dirección Regional 1 de la AFIP, el contador Fernando Duncan Amante- considerando que su testimonio fue esclarecedor en lo que respecta al inicio, modus operandi de la asociación ilícita tributaria, composición, y aportes de los acusados en la empresa. Dijo que el testigo fue muy elocuente cuando señaló que la organización se ocupaba de inscribir contribuyentes al organismo recaudador al solo efecto de emitir comprobantes a nombre de ellos, vender esos comprobantes a terceros que obviamente denominaban usuarios para que esos comprobantes sean computados en los libros de IVA y poder reducir con ese crédito fiscal que surgía de esos comprobantes los saldos a pagar. También explicó en qué consiste el impuesto, cuáles son las maniobras que se realizan para reducir el monto a pagar a la AFIP y agregó que ha-



bía un momento anterior a esa generación de comprobantes apócrifos que tiene que ver con que hay personas que reclutaban a otras para incorporarlos como contribuyentes ficticios, como titulares de sociedades.

Siguió diciendo que el gran quid de la cuestión aquí es si hay intervenciones punibles o simplemente hay conductas neutrales de profesionales, es decir, con referencia al escribano, si Fabián Tosini llevó adelante una conducta neutral o una conducta penalmente reprochable de su actividad notarial.

También, señaló que volviendo ya a lo que decía Amante, sobre un nexo entre los organizadores y los compradores de la facturación apócrifa, la gente que se ocupaba de vender facturas apócrifas. Anticipó que al respecto no iría a decir nada diferente a lo que dijo en el plenario anterior que quien vendía facturas apócrifas en cierta medida es asimilable a la actividad legal del viajante de comercio que tiene una determinada zona, una determinada especialidad por la característica de la actividad que llevaban adelante.

Anunció que previo a todo haría una mención sobre cuál debe ser el rol del Ministerio Público Fiscal en casos como este, en cuanto a que hay una teoría con raigambre anglosajona, eficientista y resultadista que sostiene que hay que llevar a juicio a los casos en los cuales hay una posibilidad de éxito, pero expresó que no compartía esa teoría, sino que el MPF también tiene que llevar a juicio casos que denominó difíciles, en los que válidamente puede haber una interpretación de los hechos y también puede haber otra, en orden a la obligación constitucional de ser objetivos y no solamente llevar a juicio las obras toscas de autores vulnerables cuya prueba es sencilla.

Comenzó por el caso de Fabián Tosini, y expresó que no discutiría respecto de si es una buena persona, sino sobre si realizó una acción neutral en su actividad notarial, o una contribución penalmente relevante a esta asociación. “Porque puede certificar que había distintas empresas, no una... una vez fue, bueno. Después fue otra, al mismo lugar, ahí en calle Paraguay que era el domicilio de Miranda Cairo pero bueno, no importa. Podría no habérselo dicho Miranda Cairo. Fue una, dos, tres veces”. Agregó “Una vez, no pasa nada podemos decir. Dos veces, es culpa. Tres veces, es dolo. O, por lo menos, tenemos la obligación de venir a discutir acá si eso es dolo o no es dolo. O, como las de-



## *Poder Judicial de la Nación*

fensas, no sólo en esta causa porque vamos a ser claros; no solamente se está defendiendo a Fabián Tosini. Se está defendiendo a la actividad notarial”.

Continuó diciendo que muy recientemente, la justicia de la provincia tuvo una causa en la que uno de los testigos de la defensa, el escribano Arévalo, sostuvo que toda tarea notarial en la que se respeten presupuestos formales se trata de una conducta neutral. En este sentido el Fiscal expresó que ser prolijo y hacer las cosas bien no es la imputación, sino que, por el contrario, se precisaba que hiciera todo bien, porque tenía que ser creíble lo que presentaban para poder disimular la verdadera actividad económica que había detrás, porque atrás no había ninguna actividad económica.

Continuó sus alegaciones diciendo que la situación es asimilable a la de María Cristina Ottaviano y Furini, que en el fallo de Casación, se confirmó la condena de esos dos profesionales de las ciencias económicas. El Dr. Reynares afirmó que no toda actividad profesional es una conducta neutral sino que hay determinados aspectos dolosos que la convierten en una participación, en una intervención en una asociación ilícita, ese estándar resulta plenamente aplicable. Y que si bien, en el caso de la contadora María Cristina Ottaviano hubo una conversación en la que ella hacía las cuentas en blanco y otra en “trucho”, eso era una exteriorización de dolo, lo que no se presentaba en el caso de Tosini en donde no había una sola conversación.

También sostuvo que en el caso de Furini, hubo exteriorización del dolo porque había un indicio vehemente que decía que certificaba una cantidad de moneda extranjera con centavos, pero lo que era definitivo era que Furini era usuario de esas facturas “truchas”.

Aclaró que estas situaciones probatorias no son asimilables a la de Fabián Tosini, pero en su caso hay una serie de indicios que analizados separadamente son susceptibles de una interpretación incriminante o desincriminante, pero que la suma de esos indicios permiten afirmar la existencia de un actuar doloso.

Refirió el fiscal a la explicación del testigo Amante en cuanto a las tareas de Miranda Cairo en el subgrupo de Ricardo Astudillo y Adrián Zeballos, de ser un gestor cuya función era fabricar contribuyentes apócrifos. Y



que en el allanamiento de su domicilio se encontraron todos los elementos preparatorios de las personas jurídicas que él se ocupaba de inscribir en la AFIP. En este contexto, sostuvo, aparece Fabián Tosini realizando constataciones de domicilios, empresas apócrifas utilizadas para la actividad delictiva de la organización siendo al menos tres de ellas constatadas en el mismo domicilio y firmas certificadas tanto de Miranda Cairo como de otras personas físicas y jurídicas que también resultaron ser contribuyentes apócrifos o usina.

Señaló que acá se encuentra el planteo troncal de la defensa que era una conducta neutral porque él no sabía el destino, pero que a esto se le podía oponer la declaración del testigo Amante que habla sobre las dinámicas de inscripción de las sociedades y de la necesidad de contar con un profesional del notariado para que esa empresa que certifique. Discurrió sobre la finalidad de protección de la norma que exige formalidades en tales casos, que no se pueden llegar a satisfacer en un caso aislado si por lo menos la norma tiene como finalidad la protección que ante la repetición de casos similares se tome algún otro temperamento.

Siguió expresando que en la presente causa hubo tres comprobaciones de domicilio en el mismo lugar, y cuestionó que el escribano no lo haya informado en la UIF. En ese punto refirió a las disposiciones de la UIF y a la respuesta brindada por el testigo Arévalo en cuanto fue preguntado si consideraba que se aplicaba solamente a las escrituras públicas o si también a las comprobaciones notariales y nos dijo: “No. Tiendo a pensar que se trata de normas que están dirigidas a las escrituras públicas porque ahí probamos actos jurídicos en cuanto los confrontamos con la norma específica que manda a informar a la UIF, si hay sociedades, distintas sociedades, más de una sociedad constituida en un mismo domicilio. Y luego dijo: Sí, en las comprobaciones notariales, también.”

Consideró de especial relevancia la documentación que fue hallada en el domicilio del escribano en pasaje Storni 701 de Rosario y también la que fuera secuestrada en el allanamiento de calle 9 de julio 982, en uno de los pisos de esas unidades habitacionales, en ese momento la contadora Ottaviano; y también en el domicilio de Marcelo Miranda Cairo, un domicilio complejo que tenemos en esta causa, el de calle Paraguay 239 de la ciudad de Rosario en



## *Poder Judicial de la Nación*

el que aparecen las boletas del escribano. Sostuvo que es complejo porque tiene presente en particular el domicilio de Paraguay 239 porque es en el que se repiten las múltiples contrataciones llevadas adelante por Fabián Tosini.

Valoró como un dato no menor, que en la documentación secuestrada en ambos domicilios se ve que Tosini llevaba adelante las constataciones de domicilio de las diferentes empresas, siempre a requerimiento de Miranda Cairo y en su propio domicilio, el cual ya en principio debería haber llamado la atención del escribano porque Marcelo Miranda Cairo no aparecía ni como socio de las empresas ni hacía constar como apoderado o gestor de las mismas en ninguna documentación que fuera exhibida.

Nuevamente volvió a señalar al testigo ofrecido por la defensa, el escribano Arévalo, cuanto declaró que no resulta necesario acreditar personería que se invoque en el acto sino que basta que una persona acredite interés legítimo, en este caso ser socio/ gerente de una SRL. No obstante, adujo el fiscal que Miranda Cairo llegó a Tosini a través de Meli y que después Meli aparece en un cargo formal en una de estas sociedades que no se correspondían con la actividad que Fabián Tosini pensó que tenía, lo que a su entender era un alerta. Además ponderó como llamativa la corta distancia temporal que existe entre las constataciones que realizó en el mismo domicilio.

En ese estado, exhibió tres constataciones: Intermedios y Publicidad SRL, en fecha 2/9/16, Quirotex Instrumental SRL en fecha 7/12/16 y Transport & Carriage SRL en fecha 20/3/17, a requerimiento de Marcelo Miranda Cairo y todas en el mismo domicilio, que es el de Marcelo Miranda Cairo sito en calle Paraguay 239, 1er piso de Rosario.

Reiteró “Una vez, no pasa nada... Dos veces, es culpa y tres veces, es dolo por lo menos”. Citó la resolución 21/11 de la UIF, artículo 19 inciso 16: “informar operaciones sospechosas, entre ellas la constitución múltiple de sociedades con mínimo de socios, mínimo de capital o mismo domicilio”.

Concluyó que las actuaciones que llevó adelante Fabián Tosini deberían haber llamado su atención en este contexto. Lo que a su entender cobró una espesura mayor cuando se contrastó con lo manifestado por el Sr. Arévalo, en cuanto que se certificó la firma del que actúa con determinado ca-



rácter sin presentar el documento que lo respalde, se realiza en caso de excepción, de urgencia, lo que distó de la actuación de Tosini en este caso. Aseveró que Tosini era el escribano de confianza de Miranda Cairo.

Seguidamente, el Fiscal analizó cada una de las actas en las que Tosini certificó firmas, con la indicación de fechas, contenido e intervinientes, señalando quienes resultaron determinados como “apócrifos” por la AFIP.

También tuvo en cuenta actuaciones en las que Tosini constató domicilio, certificó fotocopias, firmas de empresas y personas que también resultaron ser contribuyentes apócrifos que utilizaban la asociación ilícita para comerciar comprobantes falsos. Al respecto, el Fiscal dijo que ante ello, cualquiera podría señalar el desonocimiento de Tosini respecto a que luego esas personas serían identificadas como “apócrifos” por la AFIP, pero entendía que la espesura de la cuestión era que se trataban de casos en los que intervenía Marcelo Miranda Cairo, calificándolo de “cliente permanente”.

Recordó los elementos que se secuestraron en el domicilio de calle Paraguay 239, 1er piso en donde vivía Marcelo Miranda Cairo, entre lo que se encontró fotocopias certificadas por Fabián Tosini respecto al contrato constitutivo, la modificación de capital social, el acta complementaria y el cambio de jurisdicción y el original la cesión de compañía RIVECO SRL, empresa caracterizada como apócrifa por la AFIP, lo que interpretó como prueba de la continuidad en la relación que tenían Fabian Tosini con Marcelo Miranda Cairo, que le garantizaba un determinado ingreso económico, y que consideraba que eso era dolo.

Asimismo, el Dr. Reynares Solari analizó documental consistente en los antecedentes de “Biosense SRL” también determinada apócrifa, declaración jurada de Medrano socio de “Clementina” y “Transport & Carriage SRL”, y la autorización para emitir comprobantes donde se visualizan las firmas de Rubén Meli y Marcelo Miranda Cairo -certificada por Fabián Tosini-. Sobre este último punto recordó lo relatado por el propio Meli, en cuanto a que no recordaba haber celebrado contrato alguno de la empresa “Transport & Carriage”, que nunca desarrolló actividades agropecuarias y de transporte de carga y que lo único que hizo fue darle a Miranda Cairo su número de DNI para que le consulte una deuda





## *Poder Judicial de la Nación*

de ingresos brutos en la computadora y nada más. Y dedujo que entonces Meli no habría ido a firmar los documentos en presencia de Tosini, ya que si Tosini también lo conocía a Meli, debería saber que no llevaba adelante esas actividades.

Dijo que de las escuchas telefónicas no surgió que Fabián Tosini hablara, lo que fue confirmado por Amante ante la pregunta de la defensa ¿está la voz de Fabian Tosini?; y que entonces alguien podría decir, Miranda Cairo estaba alardeando delante de Rete en relación a lo que haría Tosini, y señaló otra conversación en la que Miranda Cairo dijo “Vamos de Fabián” de lo que infirió que Fabián era su escribano de confianza.

Luego continuó con el análisis de los dichos de Miranda Cairo en esta audiencia y señaló que él no declaró hechos, sino conceptos cuando dijo “Ahí terminó su función” lo que a su juicio es suficiente para que resulte sospechoso, además del paralelismo que realizó en relación a Furini, quien terminó condenado por Casación.

Por otra parte, el Sr. Fiscal hizo hincapié en que el Sr. Tosini dijo que no conocía al resto de los miembros de la asociación ilícita a excepción de Marcelo Miranda Cairo y de Rubén Meli, pero que omitió decir que conocía a personas cuyas firmas certificó en diferentes instrumentos y que fueron todos caracterizados apócrifos por la AFIP.

Por lo que expuso que si se analizaba todas y cada una de estas circunstancias por separado, no otorgaría la convicción acusatoria, pero si se los analizaba todos juntos son todos elementos que van sumando a la construcción definitiva de su hipótesis acusatoria. Afirmó que el dolo que se tenía que probar no era el dolo de que estaba haciendo algo que no correspondía con respecto a la certificación, sino de la función ilícita tributaria. Entendía que Tosini conocía ese aspecto, dado que estaba asociado con Marcelo Miranda Cairo y Marcos Rete, especie de gestores de personas fiscales -físicas o jurídicas-, que no tenían capacidad económica suficiente. Y en ese contexto, la contribución de Fabián Tosini era la colaboración de alguien que tiene una autorización del Estado para llevar adelante una actividad que no cualquier persona puede llevar adelante. Por esas razones, consideró que había suficiente prueba para afirmar que Fa-



bián Tosini llevó adelante intervenciones dolosas en la conformación de esta asociación ilícita.

En relación a Omar Antonio Pazzi, imputado como parte del subgrupo conformado por Astudillo y por Zeballos en su rol de vendedor e intermediario en la comercialización de comprobantes apócrifos sostuvo que el testigo Fernando Amante indicó que Pazzi era uno de los revendedores del subgrupo y tiene varias conversaciones con Astudillo, las que ponderó como total y absolutamente concluyentes y en este caso no se trataban de indicios, sino que todos y cada uno de los elementos probatorios que existía en contra de Omar Pazzi son en sí mismos contundentes y determinantes.

Citó la conversación en la que Pazzi lo llamó a Astudillo y le dijo “salgo para allá, hay que decirle algo a Adrián”. “Después lo tenemos que ver juntos, viste, cuando nos juntemos, ahí hay unos cuantos pedidos y tengo que pasarte un par más”. Señaló que Amante dijo que Omar Pazzi era uno de los principales revendedores de este grupo y tenía varias conversaciones con Astudillo por el tema de los comprobantes. Citó la llamada del 24/5/17, en la que Pazzi le dijo a Astudillo: “Richard... ¿Vos a qué hora vas a andar por la ofi? Nueve y media... bueno. Nos juntamos, a ver qué tenemos pendiente.” “Ah, sí, ya están, yo creo que hoy me llevan los originales, sino mañana a la mañana” “Bueno, hay otro que se hizo manual. Tratar de rastrearlo para ver si realmente lo informaron porque sino vamos a tener un ‘quilombo’ terrible con los clientes y vos que querías saber de Adrián... Sí, ya van para allá” “El caso de Ponce Construcciones, y él no las tenía porque a mí me había llevado algo. Mancioli son \$20.000 tiene que superar los \$5000 finales o algo así... no lo sé, no tengo papeles acá en mano, o ese día... falta todavía...” Al respecto concluyó que en esta última conversación se probaba el dolo al señalar los límites de los montos requeridos.

Prosiguió con otras conversaciones que tenían como interlocutores a Astudillo y a Zeballos sobre quiénes eran sus principales vendedores y nombraron a Miotti, ya condenado, y a Pazzi, de quien se dijo que “sostiene el negocio”, y eso mismo fue ratificado por Fernando Amante. También en otra conversación, Astudillo y Zeballos, hablaban de la gran cantidad de trabajo que les vendía Omar Pazzi por día, y del desorden que les provocaba. Apreció como



## *Poder Judicial de la Nación*

destacables, los comentarios de Amante ante una llamada entre Astudillo y Pazzi donde el primero le consultaba si conocía un abogado... y Pazzi le dice: “Yo en Totoras no tengo nada, si alguien vende son vendedores míos, pero en Totoras no”, lo que indicó, a su criterio, que Omar Pazzi fuera un gerente de vendedores.

Concluyó que acá había una zona determinada, y que es una actividad primordial la venta de material apócrifo por sus características, no se le puede dar publicidad. Continuó citando el informe realizado por la AFIP como respuesta al oficio 1073/18 identificado como AC/sigea Nota N° 47/20 en que en relación a Pazzi se encontraron elementos en el domicilio de calle Mendoza 621 piso 7 departamento 1 de Rosario Oficio 3459 donde funcionaba una de las oficinas que manejaba Zeballos y dio lectura a los mails detectados, con indicación de casillas de correo de remitente y destino, todos con asunto “Omar...” y el contenido relativo a pedidos de facturación.

Continuó refiriendo al domicilio de Avenida Libertad piso 7, el domicilio de Astudillo, en el que se halló una agenda del año 2017, en donde figuraban anotaciones con importe \$270.000 y a continuación decía “Omar \$40.000”, que se trató de información constatada con los tickets de depósito en la cuenta “asociación mutual de boxeadores” del Banco Francés de la misma fecha. También refirió al hallazgo de anotaciones correspondientes a un cuadro con indicación de porcentajes, que detallaba “Omar, 10%, 3% y 10%”.

Siguió indicando el secuestro del domicilio de calle Córdoba, piso 7 departamento de Rosario en las oficinas de Astudillo, en el que se encontraron mails con asunto “Omar”, en los que se solicitaba la confección de remitos por mercadería facturada, preparaciones de recibos de pago en blanco y sello para endosar los valores, y destacó un pedido de Roberto Pereyra del 10/5/17 de la cuenta nuevalogistica2015@hotmail.com, entendiendo que era la cuenta de Omar Pazzi, titulado “RV: Omar - pedido de ticket” y solicitaba “mes de abril de 2017, \$5000 de IVA, en factura Gasoil Rosario y Zona PG menores a \$1000 finales, si o si menores a \$1000 final.”.

Después, se refirió al pedido generado por Roberto Pereyra de “nueva logística”, mail con asunto “Omar, manuales buenas Forconi Carlos” que tenía escrito como contenido “son facturas manuales buenas y describir



el detalle de los conceptos/bienes que deberían figurar en la factura emitida. Mes Abril, año 2017, \$4566 de IVA, cuatro cubiertas para camión de \$5435,71 + IVA cada una”, lo que entendió como una descripción de la realidad económica. En este punto el Fiscal dijo que en relación a este contribuyente, se consultaron los sistemas de la AFIP, y se verificó que en abril del 2017 computó una factura tipo A emitida por Alcedo Silva Adriana que coincidía con lo solicitado en aquel mail, de lo que infirió que en ese caso el bien jurídico tutelado por la norma resultó afectado, mediante la utilización de esa esta factura.

En definitiva, consideró que quedó probada la intervención de Omar Pazzi en los hechos, su rol de vendedor de facturas apócrifas dentro del subgrupo conformado por Astudillo y Zeballos y su intervención era esencial porque se trataba del vendedor de mayor envergadura, tanto en las escuchas, concluyentes por sí mismas, como en la documental encontrada en lo que es el domicilio de los miembros de la organización.

Agregó, que el nombre de Pazzi surgió de la investigación durante la instrucción dado que de la solicitud de informes de titularidad, la línea que usaba estaba a nombre de Matías Pazzi y que al asociar el teléfono con Facebook, condujo a la cuenta de Omar Pazzi, que tenía una foto de personas tocando distintos instrumentos musicales.

Luego continuó su acusación con Hernán Gustavo Protti, imputado como parte del subgrupo conformado por Liporaci, Serafini, Centeno, en el rol de gestor de la inscripción ante distintos organismos de control de las personas físicas o jurídicas que luego se verían utilizadas como usinas de facturación apócrifa. El Fiscal refirió a los dichos de Fernando Amante que expresó que Protti dijo que tenía tres “pibes” que tenía que inscribir y hay varias conversaciones en relación al tema de la inscripción, en las que Serafini le daba la directiva de dónde tenía que ir y que tenía que llevar para darles el alta en la AFIP. En las conversaciones queda claro lo que dice el testigo Amante, porque en una de ellas Protti dice: “Escuchame, qué quieres hacer. Yo ahora estoy yendo a buscar uno de los ‘pibes’ para llevarlo a la AFIP. Llevo a uno solo, tiene que ir a calle Alvear, con la fotocopia del documento, la fotocopia de los dos servicios, van a sacar el CUIT... El otro pibe tiene que ir al banco a sacar la clave, el CBU...”



## *Poder Judicial de la Nación*

Amante dijo que el rol de Protti llevando a esta gente era relevante porque era gente que ellos necesitaban para ir reemplazando a los “caídos en batalla”. Esto, en referencia a la inclusión de cada una de estas personas como empresas apócrifas de contribuyentes apócrifos, tanto personas físicas como jurídicas, que la AFIP iba detectando como apócrifas entonces tenían que ir cambiando permanentemente. Se trataba de la “la Hidra de mil cabezas”, en palabras del Sr. Fiscal.

Señaló como relevante una conversación entre Protti y Liporacci que fue reproducida en el debate. Amante dijo que en este caso, se ve bien cómo se cierra el circuito de inscripción de la gente, les sacan el CUIT, el CBU. Y en esa charla discurrían sobre si mandó o no las claves fiscales porque, después ingresando con la clave les cargaban las actividades económicas que después iba a emitir las facturas “truchas”. Protti se quejaba porque les había dicho a los chicos que inscribió que iban a cobrar, y Liporacci le decía que no, que todavía no tenían las actividades cargadas.

Concluyó que Protti sabía perfectamente que a esas personas le iban a emitir factura, si bien la actividad que había llevado adelante todavía no se había desarrollado en su totalidad desde el punto de vista objetivo. En el informe realizado por la AFIP, en el domicilio de calle Don Bosco 194 bis de Rosario se secuestra un talonario de factura de servicios Exprés de Hernán Gustavo Protti, dos duplicados de color verde y consultado el sistema de la AFIP se verificó que el contribuyente Protti Hernán Gustavo no presentaba dicha información, si bien de una consulta en la base del fisco fue informada una factura A de fecha 17/4/15 por un importe total de \$20.000. Señaló que se encontraron talonarios de factura, constancia del contribuyente Protti, diario de IVA ventas, talonario de factura tipo A de servicios Exprés, y autorización a Serafini a actuar ante la AFIP.

El Dr. Reynares Solari siguió enumerando elementos secuestrados en el domicilio de Gorriti 342 de Rosario, de Centeno, consistente en distintos talonarios de comprobante, factura tipo A, recibos “X”, y notas de envío “X”, todas en blanco sin utilizar que corresponden a distintos emisores, uno de los cuales es Hernán Gustavo Protti y consultado en ese caso que observa que



distintos compradores le informan facturas por compras al contribuyente de numeración coincidente con las facturas en blanco contenidas en dicho lugar.

De lo dicho, entendió que el aporte que Hernán Gustavo Protti realizó para esta asociación fue una contribución no banal. Pero, que de acuerdo a lo sostenido sobre la no consolidación total del aspecto objetivo, entendía que se presentaba una duda que no ha podido ser superada en relación a si esa contribución fue esencial o no al desarrollo de la asociación, por lo cual afirmó que si bien Protti intervino en esta asociación y por tanto realizó una actividad penalmente relevante no lo hizo en condición de autor sino en condición de partícipe.

En relación a Ana Paula Sappa, que venía como parte del subgrupo conformado por Centeno, Liporacci y Serafini, señalada en torno a la confección e impresión de comprobantes apócrifos, expresó que había muy pocas escuchas en su contra, en sólo dos de ellas intervino Sappa, siempre hablando con Centeno y surgía claro que su rol era solamente el de imprimir los comprobantes apócrifos. De hecho, en una de las conversaciones ella se ofrece a realizar el trabajo de confeccionar los mails y Centeno se niega y le dice que “ella ya sabe cuál es el trabajo que tiene que hacer”. Surgen conversaciones entre Centeno y Liporacci en las que se refieren de una manera incorrecta a Paula Sappa, y que contribuían a la conclusión desincriminante.

Consideró que Paula Sappa en su indagatoria dijo que Centeno le dio trabajo, tenía veintiún años, que trabajaba en su oficina, él le dejaba archivos en la computadora para que imprima y que después, los separaba conforme le pedía. Después hizo referencia a la conversación que Centeno le dijo “que no puede armar los mails, y después para armar los mails tenía que estar con Matías, que Matías ya no iba a estar, que Matías le estaba enseñando a Luca, para manejar la computadora pedí la máquina porque al no estar Matías yo la voy a necesitar, Luca la tiene clara con la computación pero también estamos limitados, todo es ‘quilombo’ pero después hablamos bien... quedate tranquila, yo te llamo a la tarde.”

Ponderó que las actividades que realizaba Paula Sappa, eran actividades del último eslabón de la implementación de las activida-



## *Poder Judicial de la Nación*

des que llevaba adelante en esta asociación ella no podía estar en un lugar que le permitiese observar de modo alguno la totalidad de la maniobra. Es una actividad de un nivel muy bajo en la cual obviamente ella no podía tener una visión que le permitiera saber cuál era la actividad que realmente llevaba adelante. Citó la conversación, en la que dice Centeno: “la tengo a Paula que imprime todo lo que hizo Pablo... Paula imprime, simplemente ella imprime, no hace otra cosa que eso.”

Luego se refirió a los padecimientos expresados por Sappa como consecuencia de la tramitación de esta causa, y también señaló que esta postura ya había sido asumida para el caso de Melisa Cardozo. También contó que la Cámara Federal de Casación Penal desincriminó a Sgariglia de manera definitiva con una función similar; y disgregó en torno a que pedir absoluciones no es un fracaso de la acusación sino que las absoluciones demuestran que el sistema funciona.

Concretó su pedido de pena de la siguiente manera:

Respecto de Fabián Tosini, que sea condenado como coautor del delito de asociación ilícita tributaria a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación por el doble tiempo de la condena (art. 15 inc. c y a de la ley 24.769);

En relación a Omar Antonio Pazzi, que se lo condene como coautor del delito de asociación ilícita tributaria a la pena de 4 años de prisión (art. 15 inc. c de la ley 24.769);

Gustavo Hernán Protti, que se lo condene como partícipe secundario del delito de asociación ilícita tributaria a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con las condiciones que estime el Tribunal (art. 15 inc. c de la ley 24.769)

Sobre Ana Paula Sappa, peticionó su absolución en los términos de art. 3 CPPN.

### **b. Querellante AFIP**

Por su parte, los representantes de la AFIP, en su carácter de parte querellante, y en lo que respecta al presente juicio requirieron en su momento la elevación a juicio en relación a Fabián Eduardo Tosini y Ana Paula Sappa en calidad de coautores del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c de la ley 24.769, actual art. 15 inc. c del Régimen Penal Tributario –art. 279 de



la ley 27.430-), y en relación al primero de los nombrados también resultaría aplicable la previsión del art. 15 inc. a ) del art. 24.769, actual art. 15 inc. a del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430- en razón de su profesión de escribano público y los hechos atribuidos (v. fs. 91/106 de la elevación /TO4). En tanto, Hernán Gustavo Protti y Omar Antonio Pazzi fueron requeridos a juicio en un segundo momento por la parte querellante, en calidad de coautores del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c de la ley 24.769, actual art. 15 inc. c del Régimen Penal Tributario –art. 279 de la ley 27.430-) (v. fs. 124/141 de la elevación /TO4).

El 28/09/2023 se produjeron los alegatos de la parte querellante. Las Dras. Cecilia Sánchez Wurst y Paula Sibilin en sus roles de abogadas de la AFIP, iniciaron sus conclusiones finales; no obstante, durante su discurso, se produjo una interrupción por parte de las defensas que advirtieron que el alegato se trataba de una lectura sin pausa del memorial que traían preparado. Desde la Presidencia de juicio se realizaron los llamados de atención y recomendaciones del caso, y se requirió a las representantes del acusación privada que continúen con el desarrollo de sus conclusiones ajustándose a las previsiones del código de rito.

Las Dres. Sánchez Wurst y Sibilin refirieron a las sentencias del Tribunal como a la de Casación, en las que se demostraron la existencia de los hechos, se expidieron respecto de la acción de tomar parte de una asociación ilícita, y de la naturaleza del delito, como autónomo e independiente de la comisión de los otros ilícitos que prevé el régimen penal tributario. También señalaron que quedó demostrado que el objetivo era la emisión de la facturación apócrifa a fin de generar este crédito fiscal que luego se comercializaría se vendería.

La Dra. Sánchez Wurst hizo referencia que a los acuerdos de juicio abreviado suscriptos por los otros imputados en los cuales reconocieron con la debida asistencia de sus de sus defensas, la existencia del hecho, la participación y la calificación.

Luego, la Dra. Sibilin continuó explayándose respecto de Fabián Edgardo Tosini, con los alcances e indicación de pruebas efectuado en el requerimiento de elevación a juicio, ya referido, es decir, con el señalamiento





## *Poder Judicial de la Nación*

de su intervención como escribano público en la constitución de sociedades ficticias, en el domicilio y a requerimiento de Marcelo Miranda Cairo -condenado como autor del delito en análisis en el marco del anterior juicio-; y certificando firmas de varios involucrados en la maniobra.

Respecto de los requerimientos en base a los cuales se confeccionaron las certificaciones, la querella señaló el testimonio de Enrique Jorge Arévalo, en cuanto a que corresponde dejar constancia en las actas notariales del carácter que invoca el requirente, lo que en el caso no ocurrió.

La Dra. Sibilin continuó su lectura en referencia a las tareas de campo diligenciadas por Gendarmería Nacional y a los allanamientos realizados con el consecuente análisis de los elementos secuestrados a través de la nota 4720 de la División Investigación de la Dirección Regional Rosario. Continuó dando lectura a las escuchas telefónicas entre Marcelo Miranda Cairo y Marcos Rete, las que entendía que se referían a este imputado. Además agregó declaraciones de Fernando Amante en cuanto detalló los roles y funciones de cada uno de los intervinientes de la asociación.

En base a la citada conversación entre Miranda Cairo y Rete, señaló los dichos del testigo Enrique Jorge Arévalo cuando indicó que no está permitido dejar espacios en blanco o guardar hojas notariales y continuó haciendo observaciones en cuanto a que las actas notariales secuestradas las firmas no están insertas seguido a la escritura.

La querella concluyó que a pesar de los intentos de Tosini de deslindarse responsabilidad, las escuchas reproducidas en juicio y la documental secuestrada lo posiciona como una persona necesaria y parte de la mecánica de puesta en marcha para el desarrollo de los ilícitos investigados.

La Dra. Sibilin continuó refiriéndose a la imputación de Ana Paula Sappa, y dio lectura de las descripciones en torno a lo que consideraba que era su función de impresión de las facturas apócrifas para el subgrupo formado por Liporacci, Centeno y Serafini, citando conversaciones telefónicas del legajo de Jorge Centeno.

Del mismo modo, prosiguió con la acusación de Gustavo Protti en base a su imputación. Leyó una conversación entre Protti y Serafini y



se refirió a la documentación secuestrada en el allanamiento en el domicilio de este último. Seguidamente la abogada querellante se refirió a las declaraciones de Fernando Amante al escuchar esas conversaciones y al informe de la División Investigaciones especialmente en lo relativo a los domicilios de calle Iriondo 2228 y Juan Pablo II 208 bis.

Concluyó que la intervención de Hernán Gustavo Protti en el contexto de la organización delictual se puede probar a partir del vínculo funcional que puede apreciarse que mantenía con Serafini y Liporacci, y reportaba actividades de inscripción de personas en el organismo recaudador y también en bancos para la emisión de facturación que cubrirá las demandas de la organización recepcionada para la comercialización de crédito fiscal apócrifo.

Luego siguió tratando la situación de Omar Pazzi, en base a su imputación, entendiendo que su intervención surge de las intervenciones telefónicas que refiere y de los producidos de los allanamientos.

Luego la Dra. Sánchez Wurst concluyó que resultaba evidente que cada uno de los imputados había efectuado un aporte esencial a la asociación ilícita tributaria por lo que consideró que todos debían ser condenados en calidad de coautores.

Volvió a referirse a Tosini en cuanto a que se trata de un escribano público que debía dar fe pública de todo lo que actúa en su presencia, con las consecuentes responsabilidades y necesidades que tiene que extremar los recaudos en sus actuaciones como también anotar al organismo correspondiente en caso de entender que hay operaciones sospechosas. Sostuvo que ello evidenciaba su actuar doloso y mencionó ante la insistencia de la defensa en relación al cobro de honorarios, que entendía que ello en nada empece a que se demuestre su connivencia y activa participación como coautor, porque el tipo penal del artículo 15 inciso c no exigía como elemento tipificante la participación en algún tipo de lucro o que se obtenga algún provecho de la actividad de la asociación ni mucho menos una determinada forma de cobrarlo en el caso que lo hubiere.

Dijo que la función de Tosini era necesaria para la mecánica de la asociación ilícita tributaria ya que sin ese aporte no se hubiera podido



## *Poder Judicial de la Nación*

completar la actividad que desarrollaban los otros integrantes y señaló que su calidad de profesional es lo que hacía relevante su aporte por lo tanto solicitó en su calidad de coautor con una participación necesaria y relevante, la pena de prisión efectiva de 5 años y la de inhabilitación especial prevista en artículo 15 inciso a del régimen penal tributario por el doble tiempo de la condena- esto es 10 años- accesorias y costas.

Respecto de Ana Paula Sapa entendió demostrada su intervención imprimiendo facturas apócrifas que luego eran vendidas, en base a sus dichos y al resto de la prueba de la causa y entendió que su aporte era necesario aunque tal vez no tan relevante. Solicitó para Ana Paula Sappa en su calidad de coautora por un grado de participación menor la pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses, accesorios y costas.

Con relación a Hernán Gustavo Protti, petitionó su condena por formar parte de la asociación ilícita investigada, gestionando inscripción en distintos organismos de contralor de personas que luego eran utilizadas por la organización como usinas de facturaciones apócrifas, aporte que valoró necesario. Y señaló que Protti mantenía un vínculo funcional con dos de los principales organizadores la Lelio Serafini y Marcelo Liporacci, a quienes reportaba sus actividades de inscripción de personas ante el organismo recaudador. En consecuencia, también lo consideró coautor con un aporte necesario, solicitando para él la pena de prisión de 5 años, accesorias y costas.

Por último, en relación a Omar Antonio Pazzi consideró demostrada su responsabilidad como coautor por su participación en la asociación como vendedor e intermediario en la comercialización de comprobantes apócrifos, señaló que la prueba incorporada en la causa evidenció su relación con el organizador Astudillo, tratándose de un aporte necesario y en su calidad de coautor solicitaron la pena de prisión de 5 años, accesorias y costas.

### **4.- Defensas**

#### **a. Fabián Edgardo Tosini:**

Prestó declaración indagatoria a fs. 1348 y sgtes. Tras conocer su imputación, manifestó "Voy a hacer una manifestación. En primer lugar, niego todas las imputaciones porque no tengo vinculación alguna con todas



las personas detenidas, no tengo conocimiento de ninguna, sí conozco al contador Miranda que me lo presentó un ex compañero de la secundaria Rubén Meli quien me consultó si podía hacer trabajos notariales para el contador, seguidamente, viene el contador, habla conmigo me pregunta por los costos y a partir de ahí empecé a hacer trabajos notariales que consistían en certificación de firmas de documentos que venían ya confeccionados, es decir yo certificaba firmas y no contenido. Hubo varias certificaciones de firmas de varios formularios de AFIP que era F855 creo, que eran todos iguales, yo le certificaba la firma al contador Miranda y el los presentaba, también conozco de los que nombró, cuando hablo que conozco, de manera profesional, al Sr. Rete el cual le he certificado la firma de documentos que me ha traído el contador confeccionados, yo certifiqué firmas, no contenido, le hice un poder y una constatación. También conozco al Sr. Shiro-ma que me traía la documentación para certificar y luego la retiraba, mi trabajo, vuelvo a repetir, fue estrictamente profesional, no conozco a ninguna de las personas detenidas, no tengo vinculación con ninguna de las personas detenidas, mi única vinculación fue con estas personas que mencioné recién para trabajo notarial. Todas las actas de certificaciones de firmas han sido retiradas en el allanamiento mandado por Uds. No tengo ninguna otra vinculación”. En esa ocasión, el Dr. Walter Stramazzo le preguntó si le pertenecían alguno de los números telefónicos indicados en la prueba, a lo que su asistido le respondió que no y que no conocía a ninguno de esos números. Además, se le preguntó si reconocía a algunos de los ejemplos o diálogos aportados en las intervenciones telefónicas o a qué se referían, a lo que respondió que no.

En la audiencia de debate de fecha 31/08/2023, Fabián Tosini hizo uso de su derecho a prestar declaración y responder preguntas. En esa ocasión afirmó: “A los 23 años me recibí de abogado. A los 25 comencé a ser adscripto al registro 342 de la ciudad Rosario y a partir de ahí empecé a ejercer mi profesión con pasión con ganas con ímpetu porque siempre la ejercí de esa manera, con total apego a las normas y reglamentaciones notariales como así también a las normas y reglamentos penales, civiles y administrativos. Vuelvo a reiterar no tengo antecedentes penales, nunca tuve ningún tipo de sanción administrativa por parte del colegio de escribanos, siempre fui una persona totalmente



## *Poder Judicial de la Nación*

correcta y lo único que hice toda mi vida fue ejercer la profesión primero (....) Primero estaba en un registro con otro escribano y luego de unos trámites administrativos, que logramos con unos colegas por una ley provincial, tuve mi propio registro, que es el número 348 y es el que detento hasta el día de la fecha. Quería dejar aclarado que yo vengo de una familia de clase media baja en la cual no tuve ni padre, abuelo o tío escribano, todo lo que hice, mi profesión, lo hice solo. A mis padres les costó mucho esfuerzo que yo pueda recibirme porque los medios económicos en mi casa nunca sobraron. Nunca tuvimos posibilidades de tener digamos lujos, lo que tenemos con mi esposa, lo hemos logrado con mucho esfuerzo.

Mi escribanía habitualmente otorga 200 escrituras anuales, más la certificaciones de firma que durante muchísimos años lo hice solo sin colaborador y después de 10 años tuve un colaborador, y hace tres o cuatro años que tengo a mi hijo como colaborador. Eso genera un esfuerzo muy grande y muchas horas de trabajo. Mis padres me han inculcado toda una serie de valores muy importantes para mí que hasta el día de la fecha sigo pregonando que son el valor al respeto el valor al trabajo el valor; saber cuáles son los límites -hasta donde uno puede llegar-; saber manejarse en la vida, tener códigos. En mi caso particular, no formé parte de ninguna organización delictiva no realice ningún hecho delictivo que eventualmente se hubiera producido con la documentación confeccionada por mi persona. ¿Por qué digo eventualmente? porque a mí no me consta el hecho delictivo que se realizó, yo simplemente hice trabajos notariales.

El destino final de esa documentación yo no puedo saber nunca cuál va a ser, esa documentación fue confeccionada de acuerdo a las normas y reglamentaciones notariales, de acuerdo a las normas de los códigos civiles, administrativos y penales. Nunca me alejé de ello. Siempre tuve un determinado prestigio en mi profesión, siempre fui respetado por mis colegas, siempre entré con la frente alta al Registro de Propiedad, al Colegio de Escribanos, nunca tuve ningún tipo de problema con ninguna de las instituciones. Siempre por todo trabajo que hice cobré. Yo no conocía a ninguna de las personas que formaban parte de esta asociación con excepción el señor Miranda Cairo el cual fue presentado por el señor Rubén Meli, un compañero a la secundaria. Un día me dijo "Fabián hay un contador que necesita realizar trabajos profesionales", me llamó



telefónicamente, sobre el trabajo que había que hacer, le dije cuáles eran los costos y a partir de ahí comenzamos a realizar los trabajos, pero yo a Miranda Cairo no lo conocía. Ni antes ni después, porque después de esto no tuve vinculación alguna. Siempre se presentó como contador tal es así que tengo acá las publicaciones de linkedin donde dicen contador por actividad propia. La otra persona que conocí a través de Miranda Cairo -porque le hice certificaciones de firma y alguna que otra documentación- es al señor Rete que no lo conocía con anterioridad y tampoco tuve vinculación con posterioridad en absoluto. Quiero hacer hincapié en que es muy importante para mí que la causa que lleva casi 7 años, me trajo padecimientos de toda índole: personales, familiares, económicos, emocionales, porque no le deseo a nadie lo que me tocó pasar. Todo comienza un 13 de julio del año 2017 donde a mí -en el domicilio que vivo hace 25 años- me vienen a detener con todos los vecinos viendo la situación. Me llevan con una camioneta, me pasean por todo Rosario en distintas reparticiones durante más de 10 horas. Cerca de las 11 de la noche llegamos a un cuartel de gendarmería donde nos improvisan un lugar para dormir no más de dos horas y de ahí a las 5 de la mañana me llevan directamente a Piñeiro. Para una persona que no pisó en su vida una comisaría, llegar al penal y soportar que hagan una revisión desnudado adelante de personal masculino y femenino y que me destinen a una celda que daba directamente al campo sin ventana, en julio, pleno invierno. El mijitorio no andaba porque estaba tapado y el lugar para lavarse la cara no andaba el botón o sea que ni siquiera tenía agua. Así tuve que padecer durante toda mi estadía y lo peor de todo tuve que convivir 22 días con toda esa manga de organización, con bronca, impotencia, locura. Eso fue lo que me tocó vivir a mí, que no se lo deseo a nadie. Hasta el día de hoy lo estoy padeciendo. Yo soy inocente, no tuve absolutamente nada que ver con esta organización, no cometí ningún delito. Hice solamente trabajo profesional qué es lo que hago desde hace 31 años siempre con apego a las normas a la reglamentaciones a todo lo que uno tiene que tener. Deseo que se termine de una vez por todo esto porque ya el padecimiento es muy grande, yo no merezco todo lo que me tocó vivir y vuelvo a reiterar, yo no conocía esta gente, yo no sabía el destino final de la documentación que yo confeccioné. No tuve absolutamente nada que ver, yo cobré por mi trabajo, otorgué recibo por mi trabajo en-



## *Poder Judicial de la Nación*

tonces, yo no puedo formar parte de ninguna organización, si no conozco a nadie. Lo que quiero es volver a reivindicar mi nombre y mi apellido. Quiero que mi familia vuelva a tener el apellido con orgullo porque fue fui vapuleado tuve que sopor-  
tar tres páginas del diario más importante de Rosario durante tres días que me di-  
jeron cualquier cosa “el escribano de la facturas truchas”, “el escribano trucho” y  
yo no soy eso yo nunca hice nada de eso y voy a reiterar lo que dije mi declara-  
ción indagatoria y yo lo único que hice fueron trabajos profesionales. y creo que  
fui uno de los pocos que voluntariamente declaré en su momento en mi indagato-  
ria. Por eso Señor Juez espero que se haga justicia pero que declaren mi inocen-  
cia y desde ya le agradezco a usted y a todas las personas presentes la posibili-  
dad que me dieron de expresarme. Muchas gracias”.

Seguidamente el Dr. Stramazzo le solicitó a su asistido que repitiera quién le había presentado al señor Miranda Cairo. A lo que respon-  
dió: “Me lo presentó el señor Rubén Meli, compañero de la secundaria del colegio  
La Salle, al cual yo cursé toda mi secundaria. En algunas oportunidades venía a  
hacerme consulta porque era intermediario de algunas operaciones y yo lo aseso-  
raba.”

Además, su defensor le preguntó en qué consistía la  
certificación de firmas que hace el escribano cuando le llevan una documentación  
privada. El Sr. Tosini respondió que “certificar firma significa que de la firma im-  
presa en el documento, el escribano controle la identidad de la persona que colo-  
ca esa impresión, y esa impresión, el que firma, lo hace por ante el escribano. Eso  
significa certificar firma que no es lo mismo que certificar contenido. Como la pala-  
bra indica, lo que se certifica es la firma certificar, en cambio el contenido es cuan-  
do el escribano dice que tomó conocimiento del contenido de lo que dice el docu-  
mento”.

El Dr. Stramazzo preguntó si recordaba si esta gente  
que le pedía certificar firma por escribano, era algo caprichoso el requerimiento de  
esa intervención o si había una exigencia legal en ese sentido. Tosini respondió:  
que respecto de toda la documentación que le trajeron era para certificar o para  
hacer poderes era totalmente normal su actuación en todos los casos en los que  
actuó y que lo hizo conforme a las normas y reglamentaciones notariales.



Su representante, el doctor Stramazzo siguió solicitando precisiones y Tosini puntualizó: “En esa oportunidad (en referencia a su indagatoria en instrucción) me exhiben no menos de 50 teléfonos y yo no conocía a ninguno a ninguno... Esos teléfonos jamás hay ninguna desgrabación donde esté mi teléfono”.

Finalizadas las preguntas de la defensa, el Sr. Fiscal General preguntó si recordaba a Sergio Martín Shiroma, a lo que el imputado respondió por la negativa. El Fiscal siguió preguntando si, para Marcelo Miranda Cairo o Marcos Rete, realizó constataciones de domicilio para corroborar hechos o situaciones. Respondió: “yo voy a un domicilio y corroboró hechos o situaciones por ejemplo la existencia de un escritorio la existencia de una mesa, de computadoras, papelería”. El Fiscal requirió que precise si recordaba si -ya sea a requerimiento de Marcelo Miranda Cairo o de Rete- si realizó constataciones de domicilio en el mismo sitio para lo mismo o para atribuir una subjetividad distinta en ese domicilio. Fabián Tosini respondió: “yo soy una persona que habitualmente en el año hago muchas actas notariales... y me ha tocado certificar en un mismo domicilio... es muy común porque los contadores tienen la modalidad por una cuestión de facilidad de constituir el domicilio de las sociedades en un mismo lugar por el tema de las notificaciones de Afip, y no que se la tenga que traer el cliente y de esa manera llegar fuera de tiempo y tener que pagar una multa.

El Fiscal preguntó qué certificaba, qué es lo que ponía en el acta. Fabián Tosini contestó: “lo que veo... si usted lee mis actas, yo en ningún lugar dije que está la empresa, lo digo hay un escritorio, sillas, papelería. Yo en ningún momento dije funciona la empresa por eso me remito a lo que dije en el acta notarial”.

Por su parte, la querella solicitó al imputado que detalle qué servicios notariales ofrece normalmente una escribanía. Respondió Tosini: “compraventas, donaciones, certificaciones de firma”. Seguidamente, esta parte preguntó cómo lo contactan sus clientes para para efectuar estas esos servicios. Constesó: “Miranda Cairo me lo recomienda el señor Rubén Mele. Se presenta como contador así también lo dicen las publicaciones linkedin y a partir de ahí me llama telefónicamente y me informa que tenía que hacer una serie de trabajos, yo





## *Poder Judicial de la Nación*

le pregunté qué trabajos eran y le dije el costo que tenían cada uno de los trabajos". Continuó preguntando la querella si con respecto al procedimiento de constatación de domicilios él revisa la papelería que puede encontrar en el en el domicilio que está haciendo la certificación; ante ello, el Sr. Tosini se remitió a lo que puso en el acta notarial.

Las preguntas de la querella continuaron respecto del procedimiento de constatación de firmas o certificación de firmas, si se podía realizar sin que esté presente la persona de la cual se está certificando la firma y si recordaba haber constataciones para las firmas Acero Sur SRL, Ribeco SRL, Bio Sense, Intermedios y Publicidad, Qirotext Instrumental SRL, Clementina SRL, Transport y Carriage SRL y si recordaba haber certificado una declaración jurada Oscar Osvaldo Medrano socio de la Clementina SRL, como también el formulario 856 con firmas de Rubén Meli y Miranda Cairo y si conocía al contador José Cayetano Furini. El escribano respondió no recordar las intervenciones y que, con excepción de Miranda Cairo, no conocía a nadie.

En su respuesta, Fabián Tosini expresó que los aportes de capital a una sociedad constan en actas notariales por ser una comprobación de hecho, a diferencia de una escritura pública donde se deja constancia de contratos de compraventas, donaciones, sesiones de derecho, etc. En ese punto Tosini remarcó cuál era la diferencia entre un acta notarial y una escritura pública. A las preguntas formuladas por las partes, relativas a en qué consisten las constataciones de domicilio, respondió que constató lo que había en el en el lugar y papelería, que en ningún momento dijo que ahí funcionaba una sociedad.

Llegado el momento de las conclusiones finales, la defensa técnica, a cargo del Dr. Walter Stramazzo, comenzó su narrativa sosteniendo que se apoyaba en lo que dijeron sus colegas, sobre todo la Dra. Jimena Sendra en cuanto a que estaban sentados sus clientes acá por una inercia que se repite no sólo en la justicia federal, porque hoy en día para ir a juicio no alcanza solo la probabilidad, sino que debe hacer chances de una sentencia condenatoria, sino no hay que ir a juicio. Invocó que ingresó por lectura la falta de mérito de Tosini que estaba preso por primera y única vez en su vida, y el juez dijo que no había elementos para pensar que se vinculaba la actividad profesional de Tosini, con el



resto de la organización, incluso ofreció la apelación del fiscal para que se vieran los términos en los que apelaba. Continuó sus alegaciones sosteniendo que en ese entonces, la Cámara lo mantuvo en libertad, pero dijo, “profundicen la investigación” al Fiscal y a la Querella y expresó que los que los que profundizaron la investigación fueron las defensas de lo que pasaron 6 años. Reflexionó ¿qué trajo el fiscal y la querella?, aclarando que no había nada personal en contra de ellos, pero no se puede pedir 4, 5 años de prisión y basarse en un fallo en el que lo que hizo la casación fue decir “se le fue la mano con la pena...” y en esta oportunidad pidieron la misma pena.

Señaló que los acusadores sellaron la suerte de la acusación y que en cuanto al marco fáctico fue por los hechos ocurridos de enero de 2015 a diciembre de 2016. Siguió preguntándose “¿cuántas constancias notariales hizo Tosini en esos años? Una constatación”. Y se cuestionó “¿cómo hacen para salvar el requisito de la permanencia en la asociación ilícita, cómo hace el fiscal para justificar, cómo explica el dolo?”. Se refirió a la frase del Fiscal “una vaya y pase, dos culpa, tres dolo” y sostuvo que la doctrina ha establecido cuáles son los ingredientes para hablar de la culpabilidad y se preguntó qué dijeron los acusadores sobre imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad, exigibilidad o no de otra conducta. Se cuestionó cómo hicieron para sostener la acusación en ese contexto, dado que sólo hubo un acto en el marco fáctico, y que cualquier otra interpretación sería violatoria del principio de congruencia.

Refirió a que cuando la Cámara revocó la falta de mérito, dijeron “profundicen la investigación”, pero aclararon los camaristas Dres. Pineda y Barbará “Sappa y Tosini cumplieron roles menores”, y afirmó que eso era participación secundaria, coautoría que es lo que se habló en el debate y entendió que no fue desarrollado.

Señaló que hubo una inversión de la carga probatoria, y que el fallo casatorio no fue analizado en su totalidad. Refirió a que en un momento incluso acusaron a Meli, que fue una persona que le presentó Tosini a Miranda Cairo y esa parte lo trajo para demostrar que antes y después de esa presentación, Tosini no conocía a nadie. Siguió refiriéndose al fallo de casación



## *Poder Judicial de la Nación*

cuando explicó ¿Qué es tomar parte? y concluyó que ello no se puede pedir pena en este caso.

Luego agregó que no se opondría a la lectura de los alegatos, si bien no había que leer.

Prosiguió refiriéndose al testigo Arévalo, en cuanto fue preguntado sobre los espacios vacíos en una constatación, y dijo que dio clases con su respuesta. Señaló que Tosini hizo dos cosas: constató y certificó firmas. Enfatizó que las constataciones constatan hechos, según lo explicó el testigo Arévalo, en referencia al Código Civil y Comercial. Habló del por qué de la intervención de un escribano, y que las resoluciones del Afip e informe del Registro Público de Comercio -que dieron por ciertas las partes- no era sospechoso que haya varias empresas en un mismo domicilio, sino que era muy común. Sostuvo que el fiscal hizo un reproche en cuanto a que Tosini debió sospechar, y en todo caso, eso era una conducta negligente.

Continuó refiriéndose al testigo Amante, que afirmó que no había un sólo audio de Tosini, no se intervino el teléfono de Tosini y que nadie transcribió una charla con Tosini, lo único que encontraron fue la charla entre Rete y Miranda Cairo en la que se decía: “anda del escribano que te guarda fechas en el protocolo”. Afirmó que incluso aunque si así fuera, nada tiene que ver eso con la asociación ilícita. Además sostuvo que cuando el testigo Amante era preguntado por los acusadores se movía como pez en el agua, en tanto cuando fue preguntado por la defensa se volvió monosilábico y olvidadizo. Recordó que le formuló la pregunta si tenía un dato investigativo que le permitiera presumir que Tosini sabía que se hacía con esa investigación y dijo que no.

Continuó reflexionando sobre el pedido de pena efectuado sin tener en cuenta los arts. 40 y 41 CP. Además, señaló que en la acusación de Tosini y en relación a las escuchas, hicieron un parangón entre Ottaviano y Furini -dos contadores ya condenados-, que son profesionales, pero en otras ramas. Pero Ottaviano era pareja de Astudillo, ella asesoró y contribuyó a la creación de sociedades y que nada de eso se dio en su cliente, que no constituyó sociedades, sino que constató domicilios.



Valoró como inaceptable el castigo a quien no acepte el abreviado y señaló que la CFCP pidió que le bajen la pena a los responsables de la asociación ilícita y aun así se pidieron penas altas.

Entonces sea porque no se respetaron pautas básicas de la dogmática, por no respetar el principio de no contradicción del orden jurídico, se preguntó cómo va a ser prueba de un delito una constatación que todos dicen que está bien hecha, diciendo que Tosini nunca tuvo una sanción, ni antecedentes penales. Señaló como indicio la queja de Rete de que Tosini era caro, y cuestionó desde los principios de la sana crítica y la lógica que los criminales no cobraban por sus servicios profesionales.

También remarcó que Tosini declaró lo mismo acá que lo que había dicho 6 años atrás. Concluyó sus alegatos peticionando la absolución, diciendo que no creía que hubiera que descansar en la duda, pero que si llegara ese caso, también la pidió en esos términos. Y que si no ocurría eso, dejaba planteada la reserva del caso federal. Subsidiariamente pidió un especial pronunciamiento en esa hipótesis y sólo para agotar el ejercicio del ministerio de la defensa, se apartara del bloque acusador y en ese caso, perforando el mínimo, se otorgara la probation sobre el momento en el que lo está pidiendo, ya que había fallos del TOF 3 en la causa “Los patrones” y autos “Oldani” del TOF de Santa Fe. Citó al Fiscal cuando dijo “Admito que esta presentación puede parecer demasiada”, pero agregó que no solo es demasiada, sino inaceptable y absurda y debe rechazarse. En definitiva pidió la absolución, subsidiariamente la probation, y dejó hechos los planteos para el caso federal.

En ocasión de las palabras finales Fabián Edgardo Tosini no hizo uso de ese derecho.

#### **b. Ana Paula Sappa:**

A fs. 1629/1631 se le recibió declaración indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N.. En esa ocasión optó por efectuar una manifestación en relación a que a la única persona que conocía era a los Centeno y aclaró que “no cometí ningún delito”.

Durante el debate, en oportunidad prevista en el art. 378 del C.P.P.N., la nombrada declaró: “Primero que nada quiero agradecer por



## *Poder Judicial de la Nación*

esta oportunidad de poder declarar porque hace 7 años que estoy esperando este momento. La verdad que estoy nerviosa porque nunca pasé por una situación así... yo no formo parte de ninguna asociación ilícita, no conozco a las personas ni las que están acá hoy ni nadie de toda esa gente que está involucrada en esta causa. Solamente conocía a Jorge Centeno y a Matías Centeno por el hecho de que yo entablé una relación con su hija Priscila, de 20 años de amistad. Ellos vivían al lado de la casa de mi abuela y bueno, fuimos amigas toda la vida. Una relación en la que yo me quedaba a dormir en su casa, íbamos de vacaciones, estábamos siempre juntas, tengo fotos acá que lo acreditan... en fin, fue una amistad y una relación que era mi familia prácticamente.

Cuando yo tenía 21 años hacía estos eventos y estas promociones pero era algo de los fines de semana, en realidad, y no eran todos los fines de semana, y yo estaba buscando algo de pocas horas para trabajar, porque en ese momento estaba estudiando y bueno se lo comento a mi amiga de que estaba buscando un trabajo. Ella me dice que el padre, en la oficina, necesitaba gente algunos días a la semana y pocas horas y yo le dije que sí y bueno empecé a trabajar estuve pocos meses la verdad que no recuerdo cuántos, cuatro o cinco meses, me pagaba \$5000 o a veces menos, por mes y bueno mi trabajo era... en una oficina había dos computadoras, había unas impresoras y básicamente él me dejaba en la computadora los archivos para que yo los imprima y bueno yo imprimía esos archivos y después los ponía arriba de la mesa lo dejaba ahí lo separaba por clientes, y bueno básicamente ese era mi trabajo. Sí imprimí facturas, pero la verdad que yo no tenía conocimiento. No sabía lo que estaba pasando, yo confiaba en el padre de mi amiga de toda la vida, nunca hubo nada que me llame la atención, eran empresas que yo conocía de nombre y bueno para mí era un trabajo más era algo administrativo. Era simplemente un trabajo que yo estaba haciendo además de lo que hacía el fin de semana.

Quiero contar un poco la situación que vivo hace 7 años. La verdad es muy difícil porque yo no tengo nada que ver. Nunca quise cometer un delito, yo no sabía esto. Perdón pero yo nunca tuve problema, mi familia es súper trabajadora, todos estos años yo nunca le pude contar a mi jefe porque me da vergüenza... esto me trajo problemas en todos los aspectos de mi vida por



ejemplo tengo un hermano que trabaja en un banco y yo nunca le pude llevar mi curriculum, siempre me decía -antes que pase esto- de que lleve el currículum para que pueda entrar a trabajar y como piden los antecedentes, nunca puedo llevar el currículum. Dejé de estudiar y no consigo otro trabajo, no me llaman; si ponés mi nombre y apellido, aparezco en como tres páginas. Nunca pude organizar viajes afuera porque a partir de ese momento directamente no puedo salir del país, tengo que ir a firmar todos los meses a una comisaría lo que es que es horrible, y vino gendarmería un montón de veces a mi casa, todos los vecinos toda la gente mirando, los conocidos me preguntaban “Qué pasó?” y si yo era la misma persona, qué estaba pasando, que estaba mi nombre y mi apellido en todos lados. Me hicieron poner los dedos, me tuve que desnudar adelante una policía para que constate mis tatuajes o mi forma del cuerpo.

Tuve la oportunidad, porque tengo amigos que viven en el exterior, que me han dicho “Vení a vivir conmigo tengo alojamiento podés trabajar” y nunca he podido hacerlo porque tengo esta causa que me atormenta que no me deja dormir quiero pasar esta situación porque no es fácil. Yo tenía 21 para 22 años, ya tengo 29 y sigo con esto que yo no busqué, que no quise, no me enriquece y no hice nada. No tenía nada que ver yo entré a trabajar confiando en el padre de mi amiga simplemente. Esto me afectó en vínculos, porque en ese momento estaba en una relación y habían dado falta de mérito y cuando me la sacaron el chico me dijo mira yo no puedo seguir como vos, no sé qué va a pasar con esto, y eso hizo que yo no quiero relacionarme con nadie porque para mí es una carga y no se la quiero llevar a otra persona porque es un tema mío.

Entonces me afectó psicológicamente y en todos los sentidos. En ese momento por ejemplo también queríamos poner a ver a la venta nuestro departamento, que es lo único que tenemos y lo tuve que poner como caución para poder pasar el proceso de libertad y hubo una oferta y no se pudo llevar a cabo porque cuando le explicamos la situación, la venta se cayó. Entonces sinceramente en todos los aspectos me afectó. Yo trabajo en una administración de edificios y en un momento como digo “Bueno voy a estudiar corredor inmobiliario” y cuando te querés matricular también te piden los antecedentes. Entonces por más que todo este proceso lo pasé libre yo siento que no pude elegir



## *Poder Judicial de la Nación*

un montón de situaciones de mi vida, oportunidades que perdí y ese tiempo no me lo devuelve nadie, y sentirme juzgada y sentir vergüenza por algo que yo no tengo nada que ver.

La verdad, que como dijo la persona que declaró antes, no se lo deseo a nadie esto porque es horrible. Es muy difícil para mí para mi familia. Bueno eso es lo que quería decir que yo no cometí ningún delito que no estaba al tanto de lo que estaba pasando y que confié en alguien que no tenía que confiar”.

En ocasión de los alegatos, su defensa técnica a cargo de la Defensora Público Oficial Coadyuvante, Dra. Jimena Sendra adhirió al alegato de la fiscalía, solicitó que al presente caso se dé perspectiva de género y anticipó que luego se referiría a la acusación de la querella. Peticionó la absolución de su asistida del delito por el que fue acusada. Entendió que el alegato del fiscal obliga al juez a resolver de ese modo de conformidad a “Tarifeño” de la CSJN ya que si bien hubo una acusación de la querella, corresponde hacer una análisis de esa supuesta acusación en clave constitucional. Siguió diciendo que la Corte Suprema en sus precedentes es clara en que para que la acusación sea sustancial se debe integrar con el requerimiento de elevación a juicio y la acusación. Entendió que cuando se analiza el alegato de la querella se advierte que no fue en los términos del CPPN. Manifestó que los supuestos alegatos fueron la lectura del requerimiento de elevación a juicio con pedido de pena. Sostuvo que bastaba con analizar el requerimiento de elevación a juicio, dar lectura y escuchar a la querella cuando hizo referencia de Ana Paula Sappa, en un relato -amen de la violación del CPPN por su lectura-, que comenzaba de igual manera que el requerimiento de elevación con la modificación de los tiempos verbales, si bien se agregó una manifestación que hizo su asistida en este debate, y luego se continuó con la lectura del requerimiento de elevación. Refirió a que se vio cortada la lectura dada la oposición de las defensas. Siguió diciendo que en consecuencia de ese requerimiento de elevación con pedido de pena, sin la valoración de la prueba producida en el debate, no se dio cumplimiento por parte de la querella de las formas sustanciales de llevar adelante un juicio constitucional dado que no se ha respetado el debido proceso legal.



Entendió que lo que dijo el fiscal obliga al juez a resolver de la manera peticionada, conforme el antecedente “Tarifeño”. Además sostuvo que el carácter de este querellante en el proceso penal, no es un particular, sino que el AFIP tiene un carácter adhesivo a lo que plantea el MPF, se trata de un órgano del Estado que mantiene una acusación cuando el órgano que es titular de la acción penal ha desistido de la acusación. En este carácter adhesivo que sostiene que tiene el Afip por ser un órgano del Estado tiene que colaborar con el MPF pero no puede atribuirse de facultades. El art. 109 CN lo prohíbe. Refiere al carácter adhesivo que considera que tiene este querellante en particular, y dada la falta de acusación fiscal, corresponde la absolución.

En segundo lugar, solicitó que se declare al requerimiento de elevación a juicio con pedido de pena formulado por la querella como un acto discriminatorio de género por perpetuar estereotipo de género, afectación a derechos constitucionales vinculados a la mujer, pena de prisión sin valorar ninguna cuestión de género que fueron evidenciadas, y que hizo referencia el Fiscal. Expresó que por su condición de funcionarios públicos tienen la obligación de respetar la perspectiva de género y sus alegaciones fueron un acto discriminatorio por perpetuar estereotipos que nuestro estado se ha comprometido en erradicar. Continúa sosteniendo que Ana Paula ha sufrido una persecución penal, y consideró que hubo una animosidad especial por tratarse de una mujer. Peticionó que en atención a ello se remitieran actuaciones al AFIP para que analizara este caso como un acto discriminatorio de género, como también al Colegio de Abogados, por incumplimiento de sus funciones. Subsidiariamente solicitó la absolución porque no han acreditado elementos cargos, y que la prueba ratificaba los dichos de la defensa, señalando que en la acusación se tomaron parcialmente la declaración de su asistida en esta audiencia en cuanto ella reconoció que imprimía y no se valoró el resto de los dichos, lo que es insostenible en un Estado de Derecho. Luego sostuvo que este requerimiento de elevación a juicio con pedido de pena, tiene los mismos vicios constitucionales que presenta la Determinación de Oficio, si bien en el ámbito administrativo. Siguió diciendo que se omitió de la declaración de Amante, que dijo que el “team Centeno”, clonaba facturas y cuando explicó que significa clonar facturas, explicó en que consistía en duplicar facturas de em-





## *Poder Judicial de la Nación*

presas existentes, y nombró YPF, por eso Ana Paula dijo que conocía a las empresas. Ella reconoció la existencia de empresas que son conocidas por todos. Se preguntó si una chica de 21 años pueda decir “esta empresa tiene visos de ilegalidad”. La Querella omitió el discurso de Ana Paula, que se lo probó, con el certificado de su psicólogo, las manifestaciones de que eran amigas de la hija de Centeno, con el rol que tenía Centeno como una especie de padre, acreditado con los prints de pantalla de Facebook y que incluso había conversaciones con Centeno de 2011 con mucha familiaridad. Del cuaderno de jardín de infantes había un dibujo que con 5 años ya lo reconocía como parte de su familia. Y la querella omitió todo esto. Continuó señalando que la querella utilizó los abreviados de consortes de causas para asumir hechos, lo que era de gravedad institucional por su carácter extorsivo. Expresó la defensora que todos tuvimos 21 años, con las características y gustos propios de esa edad y que el crecimiento nos hace quienes somos, que nadie nació siendo abogada o juez. Luego prosiguió diciendo que la Querella hizo referencia a que Ana Paula era la titular de un número de teléfono, y cuestionó la implicancia penal de eso: que le fue atribuida responsabilidad por lo que Centeno decía de ella: “Paula imprime .....”, pero que la Querella omitió analizar una escucha que si fue valorada por el Fiscal que se encuentra incorporada al legajo de escucha de Centeno cuando habla Matías y dice “no se sino la mando, que pedazo de pelotuda esta mina, es media mongui, viste que las minas son..., llamala a esa estúpida”, en referencia a su asistida y afirmó la necesidad que esta escucha sea analizada con perspectiva de género. Cita el fallo “González Nieva” de la CSJN, en cuanto que debe hacerse un análisis integral de toda la prueba. Concluyó enfatizando que la prueba de la propia acusación la desvinculaba a su asistida, solicitó que se la absuelva de los delitos que pidió la Querella, a efectos subsidiarios solicitó una participación secundaria, y sustentó la solicitud en que fue la propia querellante la que sostuvo en sus alegatos la coautoría no obstante señalar que hizo un aporte no tan relevante, y en consecuencia, peticionó que se le concede la suspensión del juicio a prueba, sin imposición de tareas comunitarias ni normas de conducta debido a los perjuicios que este proceso le causó. Sigue diciendo que para el caso de que el juez entienda que la conducta de imprimir constituyó una coautoría cabe perforar el mínimo, por tratarse de una pena que



considera alta debido a que apareja una pena de prisión efectiva, la que agregó, no estuvo fundamentada por las pautas del 40 y 41 CP y afirmó que sobre este punto deberá meritarse las siguientes circunstancias: edad al momento de los hechos, relación asimétrica que existía entre el padre de su amiga Centeno y la utilización que hizo este hombre respecto de ella, análisis con perspectiva de género, fecha de los hechos, ausencia de antecedentes penales. Sostuvo que el caso se perfore el mínimo. Peticionó que se vea este caso y todos los perjuicios que le causó a Ana Paula Sappa la tramitación de este proceso, a fin de que pueda cerrar esta etapa.

Durante la oportunidad prevista para la realización de la palabras finales, Ana Paula Sappa agradeció el trato y el respeto recibido, que esperaba que esto se resuelva y lamentaba que los años que pasaron no van a volver, pero consideraba que aún tiene un futuro por delante. Expresó que quería vivir y poder elegir sin esta carga, porque ella no tenía responsabilidad sobre esto. Dijo que antes era una joven de 21 años y ahora tiene 29, pero que consideraba que aun tenía un futuro por delante, como también tenía una familia que la acompañaba en este sufrimiento.

**c. Hernán Gustavo Protti:**

En fecha 27/11/2020 fue convocado a los fines del art. 294 C.P.P.N. En esa ocasión manifestó que a raíz de que estaba sin trabajo, le preguntó a un amigo que era gerente de compra de Cerámica Alberdi, si le podía dar trabajo, y le ofreció vender tarimas, para lo que debía darse de alta en AFIP a fin de facturarle a Cerámica Alberdi y que es ahí es donde lo contactó a Lelio Serafini y que era una relación de gestión. Dijo que también le pidió que le diera de baja en algún momento, porque después no facturaba nada, en el año 2017. Dijo que jamás hizo trámites en AFIP ni facturas y que sólo le llevaba las cartas que le llegaban de AFIP a Lelio. Manifestó que le aconsejó a sus sobrinos que trabajaran por su cuenta, para lo cual les aconsejó que se dieran de alta en Afip con Lelio, que fue quien siempre le manejó todo eso. Dijo que no conocía nada de cómo se manejaba todo lo relativo a AFIP, que es un ignorante en ese aspecto y que cuando Lelio le dijo si podía utilizar alguna factura de su sobrino en caso de ser necesario, ya que lo veía mal y que de ese modo, le podía tirar unos mangos. Dijo que



## *Poder Judicial de la Nación*

accedió porque no tenía trabajo. Dijo que jamás agarró un centavo de parte de Lelio. Lelio lo hizo hablar por teléfono con un tal "Chelo" que supuso que era Lipo-raci, que era la persona que le iba a pagar a él, pero que jamás le pagaron nada.

Durante el debate, expresó: "a Lelio Serafini lo conozco hace como 15 años a través de una persona del club donde íbamos me lo presen-tan porque yo tenía un amigo que trabajaba en Cerámica Alberdi como comprador en parte de eso que uno le va buscando la vuelta a la vida mi amigo era gerente de compra le pregunté que le podía vender si había algo para hacer y me sugirió venderle tarimas en esa época pero para venderle tarimas, tenía que estar insp-crito, que no puede venderla así nomás. Ahí lo conozco y me acerco, me da de alta le empiezo a vender. Busco alguien que me fabrique las tarimas y le empiezo a vender a cerámica Alberdi. En realidad fueron pocas operaciones porque cuan-do voy a buscar a alguien que me la fabrique, sabiendo dónde la iba a vender fue y las vendió sacándome a mí del medio. Después me pongo a hacer fletes con un camioncito. La actividad me queda a mí ya que me di de alta y le agregué la cate-goría para hacer flete y eso fue lo que hice muchos años. Yo fui responsable ins-crito no recuerdo cuánto, 10, 12, 15 años, no me acuerdo cuánto. Nada más tuve un solo problema: Lelio Serafini fue el que me dio de alta y de qué manera me da de alta, me dice anda y presenta estos papeles, y así continuó mi carrera como responsable inscripto. Mi relación no era la amistad simplemente tenía que dar con eso aunque si a mí me llegaba algún requerimiento de lo que afip le llevaba para que hagan las presentaciones. Lo veía poco a él. Así fue que estuve como 10, 12, no me acuerdo, sin tener ningún problema con el tema del flete. Imagínese que de cada 20 fletes que hacía uno me pedía una factura y ahí tomé la decisión de darme de baja. Después de lo del flete me dedico más a lo que es la venta de compra y venta de bebida y alimento y de hecho lo acompaño en ese camino a mi sobrino, para abrir una pequeña distribuidora en Roullion y Boulevard Seguí y mi idea fue siempre que se dé de alta para poder comprar mercadería en forma di-recta y conseguir un mejor precio ya que siempre le compramos a distribuidores no empresas directas y no teníamos un buen precio. Ese fue el por qué le doy de alta a mi sobrino, Lelio Serafini me había dado de alta a mí por eso yo acompaño a mi sobrino a darse de alta mi sobrino. No hay 10 15 20 personas, solo a mi so-



brino, que de hecho le causé un perjuicio porque tenía hijo y automáticamente cuando sea de alta para poder trabajar se le caen los planes sociales que él cobraba entonces bueno quilombo familiares.

No alcanzó a presentar todos los papeles en la empresa donde quería comprar y aparece este problema. De hecho yo lo veo en la tele lo primero que le surgió era mi sobrino no haga nada. Después me cae a mí este quilombo, no tengo nada que ver porque cuando le dije a Lelio que lo acompañe a hacer el trámite, me dijo que por un problema de salud él no podía ir, que lo acompañe yo. Jamás había hablado con un contador, con alguien que me pueda hacer esos papeles, recién ahora -hace tres cuatro meses- tengo una. Entonces para mí era sencillo razonable y ya tenía la experiencia que él me iba a dar de alta y sin problema. Él me hace hablar con un muchacho que yo jamás lo había visto, Liporaci. Él estaba con el tema y me iba a dar de alta los chicos de hecho en algunas escucha que hay yo le reclamo para que me dé de alta a los chicos para poder empezar a ganar plata, a trabajar relacionado a lo que es la distribuidora, entiendo eso se interpretó que venía por este tema de la mafia por este tema de la usina, de la asociación ilícita. En realidad pues lejos está de ahí era comprar y vender mercadería de forma directa que sigo dedicándome a lo mismo y ahora me doy de alta. Yo hace varios meses y sí bueno yo todo lo que dijeron los demás el tema de que a mí también me inhabilitaron para salir del país para como garantía de que no me voy a ir a ningún lado

El Presidente invitó a su defensor a formular preguntas, toda vez que en encausado manifestó que respondería las preguntas de las partes que se le formulen. El Dr. Va Ricucci pidió que aclare un los perjuicios que esto le ha traído sobre todo familiares, empresariales. EL Sr. Protti respondió que: "ha tenido últimamente algunos propuestas de trabajo al exterior que no ha podido hacer ... que uno de mis clientes que le vendían mercadería que yo le vendo a distribuidoras, tiene una empresa muy importante, que vende todo lo que es maquina agrícola autoelevadora importa autoelevador y demás, quería que trabaje con él vendiendo sus máquinas y me propone de hecho, me dio la plata para el viaje, me dio \$ 300.000 -que terminé devolviendo- para que viaje a Paraguay, a



## *Poder Judicial de la Nación*

Brasil y al norte del país, a ver si se podía armar algo y vender máquinas allá, pero lo tuve que decir que no podía salir del país.

Nunca le hice daño a nadie y nunca agarré un solo centavo de esa bendita asociación ilícita. Hablé tres días tres veces con un tipo Liporaci, y de las tres veces había discutido dos porque no me daba de alta los pibes.

Agradecí al muchacho que hablé la vez pasada, me ofrecieron un acuerdo me dieron la posibilidad de verlo cara a cara y explicarle lo mismo de hoy no tengo nada que ver y quería venir a decirte... no lo firmé y tengo la posibilidad de explicar y defenderme”.

Luego continuó explicando que por esta situación su sobrino no cobraba los planes, que se peleó con la mujer de su sobrino por este tema. Dijo que se mantenía rebuscando todo el tiempo “para llevar el mango a mi casa y eso no es de una asociación”. Dijo que estaba inhibido, no podía salir del país y que tenía su auto en garantía .

Finalizada su declaración, el señor Fiscal formuló sus preguntas y lo interrogó en relación a Lelio Serafini. Protti respondió que lo dio de alta, le hizo un trámite.

El Fiscal preguntó por sus años como responsable inscripto, a lo que el imputado explicó que para que lo den de alta le presentaron a Serafini como gestor, quien le hizo el trámite. “Por eso yo digo si este tipo me hubiese querido joder a mí tantos años que estuve como responsable inscrito, yo jamás tuve problema. Imagino que no me usó a mí para sus temas que, no digo que él no esté en la asociación ilícita y obviamente que está, pero a mí no me perjudicó”.

Luego fue preguntado por la parte querellante sobre cómo lo conoció a Marcelo Fabián Liporaci. Respondió que fue tras un problema de salud de Lelio Serafini y esta persona le iba a continuar el trámite Por eso habló con él varias veces por teléfono, pero que no sé acordaba de la cara. Dijo que él le insistía mucho para que se apure y le dé de alta a unos muchachos.

La querella también preguntó si ayudó a abrir cuentas bancarias a personas que no conocía. Protti respondió que su sobrino tenía una distribuidora en Garay 5757, y que fue ahí cuando él empezó a insistir para que



se dé de alta así podían comprar mercadería en forma directa, que era mucho más barato.

Durante la oportunidad prevista para los alegatos, el Dr. Va Ricucci comenzó su alocución diciendo que Protti negó su participación en la asociación ilícita en todas las etapas del proceso. Afirmó que Protti es una persona de trabajo, que no realizó ninguna de las conductas que se le endilgaron en el marco de una maquinaria hecha para que un tercero se beneficie. Manifestó que la relación era con Serafini y luego siguió con Liporaci. Siguió refiriéndose a las escuchas que reprodujo el Fiscal, y que la única que considera es cuando dijo “yo hasta ahora no vi un peso de todo esto” y refirió a que en aquel entonces su asistente se había quedado sin trabajo, se había dado de baja con Serafini que le había hecho la papelería y no tenía cómo trabajar de fletero, y las dos personas que tenía para una legalización de sus actividades fue a través de sus dos sobrinos. Estos iban a empezar a comprar de manera directa la mercadería a través de cuit que iban a hacerlo legalmente para empezar a facturar.

La defensa técnica sostuvo que eso nunca se ocurrió y que en el presente caso ni siquiera hubo principio de ejecución, y que cuando el fiscal hablaba de facturas secuestradas, se tratan de recibos de 2016 que Protti le había dejado a Serafini para darse de baja porque como no tenía trabajo, no quería seguir pagando impuestos. Afirmó que Protti quiso tener una nueva posibilidad de trabajo a partir de sus sobrinos, de hecho, en los alegatos del fiscal, redujo su participación a una de tipo secundaria, pidiéndole 3 años de ejecución condicional. Siguió su alocución invocando que hay unas escuchas en la que él intervino con gente que se dedicaba a estas actividades, y que consideró que esas escuchas en lo único en lo que lo pudieron haber manchado -pero no hay nexo de causalidad y ha transcurrido un tiempo más que prudencial-. Pidió la absolución de culpa y cargo de Hernán Gustavo y en su defecto, se le otorgue el beneficio de la duda, porque no hubo participación que lo vincule en estos delitos y no tiene que ser condenado a ninguna condena de ejecución condicional. Hizo reserva de recursos.



## *Poder Judicial de la Nación*

Al finalizar la etapa de los alegatos, se le preguntó al imputado si deseaba realizar alguna declaración en los términos del último párrafo del art. 393 del C.P.P.N., a lo que respondió que no.

### **d. Omar Antonio Pazzi:**

El día 30/11/2020, fue imputado en los términos del art. 294 del C.P.P.N., oportunidad en la que se abstuvo de declarar (fs. 27/30 del expte. 18564/2017/TO4). Idéntico temperamento adoptó durante el debate, donde únicamente negó los hechos atribuidos.

Al momento de formular los alegatos, su defensa inició sus conclusiones diciendo que el fallo de Casación expresamente recorta el límite punitivo a los hechos comprendidos en el período señalado por las otras defensas y que desoír eso puede ser de gravedad institucional, porque se quisieron introducir cuestiones que no fueron objetos de prueba violándose de esta forma el principio de inmediación.

Sostuvo que el Fiscal consideró que todos los elementos del otro proceso eran cosa juzgada y concluyó que si eso fuera así no tendría sentido este proceso. Señaló que se opuso a que se introdujeran todos los elementos probatorios porque en su opinión no estaba probada la asociación ilícita y así lo tradujo la CFCP, para el caso de un supuesto vendedor cuando luego de condenado en primera instancia, lo absolvió por no ajustarse a los presupuestos fácticos 2015/2016. Siguió diciendo que la CFCP analizó esta figura y marcó pautas; y que los elementos probatorios que se acompañaron a este juicio no corresponden a los períodos probatorios 2015/2016, tratándose de escuchas de 2017, lo que a su criterio viola el principio de congruencia y efectuó reservas al respecto.

Luego refirió a que Amante, el “testigo estrella de la Fiscalía y de la querella” no se trata de un testigo, sino que es jefe de un órgano y que incluso se benefició con este proceso, no aportó ninguna cuestión que haya pasado por sus sentidos o su conocimiento. Dijo que atribuyeron voces sin pericia y se atribuyeron teléfonos a personas. Señaló que cuando el Fiscal dijo que la línea correspondía a Pazzi, no indicó cómo. Que se ha tomado el trabajo de buscar a Pazzi en Facebook y encontró catorce “Omar Pazzi” de acceso público y se preguntó por qué le atribuyó esa conducta reprochable a su defendido. Después con-

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



sideró que el teléfono que le atribuyó a su cliente no estaba a su nombre. Enfatizó que tuvieron 7 años para llegar a juicio, que el estado cuenta con todos los recursos para investigar y probar. Argumentó que la figura legal no requiere que los participantes hayan contribuido porque es un delito de peligro y que la CFCP se toma el trabajo de analizar esto y dice que hay que tomar con mucho recaudo y lo aplicó para bajar las penas. En relación al testigo Amante dijo que al final, cuando los defensores lo consultaron, -porque para él no es un testigo, sino parte interesada-, respondió que hoy en día no se utiliza más base la base “Apoc”.

Además, hizo referencia a que cuando el fiscal dijo que él también perseguía a los profesionales y no sólo personas de otras realidades sociales, ello podía merecer varias interpretaciones, y que si había varias interpretaciones había que sobreseer, achacando que tuvieron todas las herramientas para otra alternativa.

Cuestionó que sentaron en este juicio a cuatro personas todas juntas, con indicios inconexos. Marcó que los acuerdos que se celebraron no pueden servir para inculpar, pero si pueden servir para exculpar porque establecen el límite para esta organización piramidal, la que primero fue contra los jefes y luego contra las participaciones secundarias, -lo que disgregó en que era discutible doctrinariamente-. Prosiguió su análisis considerando una confusión en los alegatos de los acusadores con la figura del 210 CP.

Luego dijo que el Fiscal dijo que Pazzi concentraba el 50% de la facturación y que de tomar ese indicio como cierto, la Fiscalía y el Afip tenían los elementos para investigar y que solo acompañaron una factura de bajo monto de Roberto Pereira, no de Omar Pazzi, lo que a su criterio no se explicó de manera razonable. Dijo que el bloque acusador trajo un solo testigo que fue quien tuvo a su cargo todas las escuchas y que con menos de 3 minutos de escucha se le atribuyó habitualidad en una asociación ilícita tributaria con pena privativa de libertad.

Fue enfático al decir que hay que ponerle un límite al Estado y que no se pudo condenar a una persona a 5 años con esos elementos: “Mi cliente fue traído a declarar en el 2019 por hechos de 2016 con escuchas de 2017. Vamos a suponer, hasta julio de 2013 la fiscalía considero que era posible





## *Poder Judicial de la Nación*

traerlo a juicio pero a partir del fallo de Casación tiene que pedirle disculpas y que se vaya a su casa”.

El Dr. Torres e Souza, continuó con la lectura de algunos fragmentos del fallo de casación referido y concretamente señaló lo relativo al caso de Migliorelli. Continuó señalando la importancia de las pautas de condiciones personales y dijo que Casación también se ocupó de esto cuando bajó las penas a los jefes. Citó el fallo “Carrera” en cuanto dice que “La intermediación es soberana para el juez” y que la prueba se tendría que haber producido acá.

Cuestionó finalmente los montos de penas peticionados a su defendido diciendo que Pazzi no tiene antecedentes penales, que andaba en una Fiorino utilitario, que su cliente quería hablar, pero que se pone nervioso, tartamudea, que se separó de la mujer en este tiempo, dando algunas razones sobre la estigmatización que le produjo el proceso penal. Refirió que personalmente conoce a Pazzi desde hacía mucho tiempo, donde agregó que incluso tuvo que ir a la quiebra por salir de garante de su hermana. Refirió a otros elementos como la charla entre dos condenados, de lo que señaló que casación sostuvo que “las simple escucha telefónica no alcanza para tenerlo como un participante importante de la asociación”. Se preguntó si se puede pedir 5 años a una persona por una escucha telefónica con posterioridad a los hechos. Solicitó que hay sobreseerlos a todos porque no hay elementos para demostrar un acuerdo asociativo entre los cuatro que fueron traídos acá. Expresó que el fiscal con sus elecciones de pena ha demostrado un prejuicio para con la gente que trabaja.

Dijo que Pazzi tiene 61 años y nunca salió del país, no hay ostentación y que con lo expresado en el fallo 767/2023 de Casación, no se admitía otra posibilidad más que absolver a las personas traídas a juicio.

Y reiteró que su cliente no fue allanado, no tuvo teléfonos intervenidos, que no correspondía al periodo investigado. Hizo reserva del recurso de casación, subsidiariamente planteó que si surgía alguna intervención que sea secundaria, y en su caso la suspensión de juicio a prueba sin trabajo social por el sufrimiento padecido por el proceso.

En relación a la etapa de palabras finales, el señor Omar Pazzi no efectuó manifestación alguna.



## **5.- Suspensión de juicio a prueba**

Con motivo del planteo subsidiario formulado por los Dres. Stramazzo y Torres e Souza para la concesión de la suspensión del juicio a prueba en favor de sus asistidos, se le corrió traslado al Sr. Fiscal General quien expresó que reiteraba el criterio sostenido en la causa denominada “Los patrones” para que la solicitud pueda ser considerada en tiempo y forma. En tal sentido, consideró que los planteos formulados una vez finalizado el plenario son extemporáneos, por lo que no existía óbice que sea considerado el planteo de la defensa que fue oportunamente formulado y no se le hizo lugar en ese momento por considerarse la necesidad de la adecuación concreta de la pena. Para ese caso de Tosini expresó que si bien ese fue el supuesto, siendo que ya concretó un pedido de pena al respecto que excedía la pena de 3 años, no lo consideraba procedente. Por lo que en tal sentido, entendió que no debe pronunciarse sobre la viabilidad concreta del resto de las cuestiones tales como el ofrecimiento de tareas.

El Sr. Fiscal General siguió diciendo que para el eventual caso en el que el Tribunal resolviese una pauta inferior, podría ser viable. No obstante, señaló que el esquema procesal actual, que no prevé la cesura de juicio en la que se determine el monto de responsabilidad y ver cómo se cumple o suspende la pena, tampoco haría viable la suspensión del juicio a prueba, por lo que sostuvo que no debía expedirse sobre dichas cuestiones. Y agregó que aun en el supuesto en el que sería viable una pena menor a 3 años de prisión lo que correspondería es la ejecución condicional de la pena. Concluyó, en definitiva que no resultaba viable la suspensión del juicio a prueba.

Corrido el traslado a las representantes de la parte querellante, a lo que se adicionó, en función de su acusación el pedido subsidiario formulado por la Dra. Sendra, la Dra. Sánchez Wurst respondió que tenían la obligación de oponerse.

Dijo que el art. 76 bis CP presentaba un escollo legal, al considerar que excluía su aplicación en los delitos penales tributarios. Expresó que si bien, se hacía referencia a la ley 24.769, dicha normativa fue sustituida por otra ley y que ello no implicó la desincriminación de la conducta, sino que se trata-



## *Poder Judicial de la Nación*

ba de una sucesión de leyes en el tiempo. Consideró que se encontraba superado el mínimo de 3 años que también establece como requisito el art. 76 bis CP.

Continuó agregando que consideraba que el Régimen Penal Tributario cuando establecía un sistema para la extinción de la acción penal lo hacía de manera específica para ese régimen, por lo que concluyó que no procede este instituto para esta figura. Dejó formuladas las reservas del caso.

En atención a lo resuelto en el veredicto nro. 70/2023, deviene abstracta la cuestión en relación a Fabián Tosini y Ana Paula Sappa.

Ahora bien, en relación a Omar Antonio Pazzi, en ponderación del pedido de pena presentado por las partes, 4 años de prisión solicitado por el Fiscal General y 5 años de prisión petitionado por la Acusación privada, se ve superado el quantum estipulado por el art. 76 bis CP, y por la pacífica interpretación que recibe el precedente “Acosta” (Fallos: 333:858, de fecha 23 de abril de 2008) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto se autoriza a la suspensión de juicio a prueba aún cuando la pena prevista supere los tres años “si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del Fiscal”. Por ello corresponde rechazar la aplicación del instituto petitionado por su defensor.

### **6. Réplicas y dúPLICAS**

Al correrse traslado al Fiscal General y a los abogados de la parte querellante, a los fines de ejercer su derecho de réplicas, ambas partes acusadoras manifestaron no tener que replicar ninguna de las alocuciones de los alegatos de las defensas.

### **CONSIDERACIONES:**

Expuestas las posiciones de las partes y habiéndose leído el veredicto n° 70/2023 el día 12/10/2023, debo pronunciarme sobre todas aquellas cuestiones que quedaron planteadas en el contradictorio, de conformidad con los artículos 398 y 399 del C.P.P.N.

#### **1.- Materialidad**

Al tratarse la presente causa de una elevación parcial en el marco de la causa “LIPORACI, Marcelo Fabián y otros s/ infracción ley 24.769” expte. 18564/2017/TO1, respecto de la cual este Tribunal, con distinta



composición unipersonal, dictó la sentencia nro. 44/2021 en fecha 01/09/2021 (y sus fundamentos en fecha 29/09/2021), cabe tener a los hechos probados y dados por ciertos en aquellos autos. Cabe destacar que mediante Resolución Registro N° 767/2023, de fecha 12/07/2023, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió "...III.- Por unanimidad, HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de casación interpuestos por las defensas de Marcelo Fabián Liporaci, Ricardo Cayetano Astudillo, Adrián Marcelo Zeballos, María Cristina Ottaviano, Marcelo Miranda Cairo, Eduardo José Cayetano Furini, Atilio José Miotti, Néstor Rubén Terorero y Marcos Matías Rete -éste último por mayoría-, sin costas; ANULAR parcialmente la resolución recurrida sólo en cuanto refiere al monto de las penas de prisión impuestas y REMITIR las actuaciones a un tribunal habilitado a fin de que, previa audiencia de partes y de visu de los encartados, se pronuncie respecto de las penas que corresponde imponer, en los términos aquí señalados (arts. 471, 530 y ccdtes. CPPN)...".

De manera tal, que lo que respecta a la materialidad de los hechos que dan origen a la presente causa no se encuentra controvertida.

Así, las pruebas colectadas no sólo en aquel entonces, sino también en la presente elevación, dan cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada a la creación de lo que -en la jerga tributaria- se denomina "usinas", es decir, "empresas creadas al sólo efecto de simular una operación documentada pero sin correlato en la realidad".

En este sentido, el relato brindado por del testigo investigador Fernando Duncan Amante en ocasión de este juicio ratificó los extremos de la materialidad relativa a los hechos objeto de juicio.

Expresó que al momento de los sucesos, era Jefe de la División Investigación I de la Dirección Regional Rosario y que: "del área de fiscalización ordinaria nos anotan de un hecho que se produce en el marco de una fiscalización donde le solicitan a una empresa constancias de la emisión de factura a favor de un de un supuesto proveedor y esa empresa, que era "Compañía de transporte y distribución", manifiesta desconocer esa facturación como propia alegando que le habían creado ficticiamente dos puntos de venta y habían emitido facturas a terceras personas con total desconocimiento de la empresa. A partir de



## *Poder Judicial de la Nación*

ese hecho puntual la División de Investigación empieza a efectuar un análisis acerca de esa de esa facturación en concreto y empieza a analizar qué personas pueden haber operado esos puntos vía información que aporta la agencia Rosario 1 con relación fundamentalmente a las IP desde las cuales se efectuaron los trámites de alta de esos puntos de venta, movimientos de tramitación interna para la creación de esos puntos de punto de venta. Porque para crear esos puntos de venta se impone la necesidad de disponer de la clave fiscal de la empresa y otras cuestiones técnicas que quedan plasmadas en los sistemas; y paralelamente empezar a analizar de esos puntos de venta qué otras facturas se habían emitido. Nos empezamos a encontrar que más allá de que la empresa fiscalizada era una, de esos puntos de venta se habían hecho muchas más facturas. La empresa hizo una denuncia en la Justicia Federal. Ahí se empieza a hacer todo un análisis de la facturación y se empiezan a encontrar que desde las IP en que se habían emitido esos comprobantes apócrifos de la firma CTD también se habían efectuado emisión de comprobantes de otros contribuyentes que, por una serie de análisis de rutina que hace AFIP, daban la impresión a priori de tratarse también de facturas de empresas apócrifas”.

Relató que “Compañía de transporte y distribución” era una empresa real con funcionamiento a la cual le habían fabricado artificialmente dos punto de venta, en tanto las otras empresas que empezaron a constatar -que también se habían emitido desde esa IP dichas facturas- eran directamente empresas apócrifas.

El CP Amante explicó que paralelamente confluyó otro hecho que consistió en el caso de Albarracín. El declarante explicó que en esa época, la División de Investigación era la encargada de realizar las incorporaciones correspondientes a la base de contribuyentes apócrifos, pero que previo a ello, se notificaba personalmente al implicado. Siguió diciendo que en esa situación, personal a su cargo entrevistó a un contribuyente de nombre Albarracín.

Dijo que al llegar a su domicilio conocieron que se trataba de un hombre que estaba en discapacitado, en silla de ruedas, al cual se le habían emitido comprobantes apócrifos a nombre de él, dado que aquel manifestó que nunca las había hecho esas operaciones, pero que había una persona a la



cual él le solicitó ayuda para rehabilitar su clave fiscal, recordando que su nombre de pila era “Lelio” que, después terminó siendo Lelio Serafini.

El testimonio de Amante continuó explicando que a partir de este dato se empezó a analizar la facturación de Albarracín. Al respecto, aclaró que “cuando un contribuyente emite una factura electrónica se conecta a los sistemas de AFIP para emitir la factura electrónica en los sistemas de AFIP queda el detalle de la IP desde la cual se emitió ese comprobante. La IP es la dirección única de una computadora en el mundo, con lo cual el número de IP lo asignan las compañías prestadoras de internet, en este caso Cablevisión y se asignan a una determinada computadora en un momento determinado con lo cual a partir del dato de la IP se puede indagar acerca de quién es el titular del servicio de internet. Más allá de esto cuando empezamos a analizar la facturación de Albarracín empezamos a ver desde qué IP si habían emitido los comprobantes apócrifos de él y en función de eso también empezamos a mirar al igual que en “CTD” sobre Qué otros contribuyentes se habían emitido facturas.”

De ese modo empezaron a encontrar que había coincidencias, o sea desde las IP en las cuales se han emitido factura de CTD y las IP de las que se habían emitido facturar Albarracín. Dijo que ese fenómeno los alertó “A partir de ahí nos dimos cuenta que estábamos ante no hecho aislado, sino ante una maniobra que involucraba a varios actores y se armó una primera una primera base de contribuyentes apócrifos que son las que están volcadas en este informe que eran aproximadamente unas dieciocho, diecinueve.”

Luego, se elaboró un “Informe Propiciatorio de denuncia penal” presentado el 28/3/2017, el cual se encuentra reservado en Secretaría para la presente causa. Al respecto, el testigo agregó, que fue el que se le entregó a la Sección Penal Tributaria para que evalúe la conveniencia de efectuar la pertinente denuncia y eso fue lo que se hizo. En ocasión de la audiencia de debate, ese informe le fue exhibido al Sr. Amante, a petición de la querella, y con su reconocimiento, aportó: “Se bajó toda la información de todos los comprobantes electrónicos emitidos por estas 18 “usinas de facturación apócrifa” y a partir de ahí se armó una gran tabla con todas las IP.” Al respecto, aclaró que no era una sola IP, sino muchas, desde las cuales se habían emitido esos comprobantes; y que la



## *Poder Judicial de la Nación*

mayor parte de los comprobantes estaban concentrados en un grupo de IP sobre las cuales se tomó la atención.

Ejemplificó: “para entender esto si uno se sienta en un locutorio pide una máquina y emite una factura esa factura que emitió y es una sola factura aparece en la IP del locutorio mientras que si usted tiene un estudio contable o una oficina montada para para una organización en vez de emitir un comprobante por ahí emite ochocientos, mil o dos mil”.

Continuó su explicación indicando que: “se focalizó sobre las IP donde había mayor ocurrencia de estos hechos de facturación. En ese momento, desde Investigación, circulamos a las prestadoras de internet pidiéndoles información acerca de la ubicación física y de la titularidad de los de esas IP, y en este caso la única que nos dio respuesta fue Cablevisión. A partir de ahí pudimos identificar a las primeras personas que surgían en esta organización. Luego, a partir de las tareas ordenadas por la fiscalía se empezó a descubrir que era mucho más amplia que esta primera aproximación que surge de este informe tanto en cantidad de usinas estas 18 se terminan transformando al final de la tarea en 50 y algo; y esta pequeña organización que estábamos viendo al principio, se termina transformando en una organización que involucraba a muchas personas con roles bastante diferenciados y específicos”.

Prosiguió su relato, en relación al “Informe Propiciatorio de denuncia penal”, que allí se concluyó que esos 18 contribuyentes apócrifos -de enero 2015 a 2016- habían operado facturación con un crédito fiscal de IVA de aproximadamente 250 millones de pesos, valorando “Era muchísimo dinero para para ese momento”.

En su declaración dejó en claro que luego de la elevación del Informe Propiciatorio de denuncia penal a la Sección Penal Tributaria, y con su consecuente presentación ante los órganos jurisdiccionales, tomó intervención la Fiscalía 3, que luego impulsó las medidas correspondientes, entre las que se encontraban la intervención de líneas telefónicas.

Ello, culminó con los allanamientos a los domicilios que se fueron detectando de esta organización, los que fueron referidos en el título “Inicio de la investigación”, y con el secuestro de los elementos, entre ellos, la do-



cumental que fue secuestrada en esos procedimientos. Esa documental fue remitida al AFIP, habiendo sido nombrado el CP Fernando Amante depositario judicial, a quien -además- le fue encomendada la tarea de realizar un relevamiento de la información y volcarla en un informe.

El informe referido por el declarante es el denominado “Contesta oficio 1073/2018” presentado el 30/6/2020, que se encuentra reservado en Secretaría. En oportunidad de su declaración testimonial en esta audiencia de debate, y a petición de la querella, dicha pieza fue exhibida al testigo, quien reconoció el documento y su intervención en la confección.

El testigo relató que con ello, lo que se había observado en una etapa inicial, se fue ratificando en todas sus partes: “se fue viendo qué documentación había en cada una de las cajas y a partir de ahí, dependiendo del tipo de documentación, se iba haciendo alguna tarea saltuaria o específica. Mucho de la información que se obtuvo fue copia de comprobantes apócrifos, pedidos.”

En este sentido, y a los fines de un mejor entendimiento de su respuesta, el CP Amante explicó cómo era la organización: “La organización que se detecta se ocupaba de por un lado inscribir contribuyentes en AFIP al solo efecto de emitir comprobantes a nombre de ellos, vender esos comprobantes a terceros -que nosotros entendemos que son los denominamos usuarios- para que esos comprobantes sean computados en sus libros de IVA y poder reducir con eso el crédito fiscal que surgiera esos comprobantes los saldos va a pagar de IVA”.

Enfatizó: “Cuando yo le digo que en esta etapa inicial habíamos detectado 250 millones en créditos fiscal, significaba que eso 250 millones de pesos computados en los libros de los usuarios definitivos iban a implicar que al fisco le dejaban de entrar esos 250 millones de pesos. Porque el contribuyente usuario alegaba que eso era una compra real, el IVA es un impuesto que funciona en cada etapa. Cada contribuyente inscripto tiene que declarar el débito fiscal de sus ventas y a ese débito fiscal le detrae el crédito fiscal de sus compras”.





## *Poder Judicial de la Nación*

Siguió explicando que “había una instancia anterior que era la gente que traía o reclutaba gente para incorporarlos como contribuyentes ficticios. Había grupos de trabajo que se ocupaban de la tarea práctica de emitir estos comprobantes, tickets, después se descubrió no solo el comprobante electrónico, sino que emitían tickets con tickeadora fiscal apócrifos, facturas clonadas, el sistema era bastante más amplio de lo que habíamos visto en una instancia; y por otro lado, tenía que haber necesariamente un nexo entre esta estos organizadores o generadores de facturación apócrifa y el usuario final. Esto era un montón de gente que se ocupaba de vender estas facturas apócrifas. Después lo se descubrió, es que había dos subgrupos, con conocimiento entre ellos y bajo ellos, un montón de vendedores y finalmente, los usuarios finales. Entonces, dependiendo qué documentación había en cada lugar, tiene que ver con los roles que estoy relatando. En los lugares donde se emitían los comprobantes, nos encontrábamos con mails con pedidos de los vendedores para que le emitieran facturas a nombre de tal empresa, por venta de tal cosa, por un valor total de tanto. Con el mail que estaba secuestrado por el allanamiento, buscábamos el usuario, entrábamos a los sistemas de AFIP y constatábamos que ese pedido que habían hecho en ese mail aparecía reflejado en una factura que ese usuario había computado en un libro. Entonces, lográbamos cerrar el círculo del pedido del revendedor: el pedido, la emisión del comprobante y el cómputo de ese comprobante por parte del usuario definitivo. Esa es una de las tareas que se ven reflejadas en este informe (en referencia a aquel denominado “Contesta oficio 1073/2018” presentado el 30/6/2020).

“Otra de las tareas por ejemplo, en el caso del subgrupo que nosotros denominamos de Astudillo- Zeballos, el rol que cumplía Miranda Cairo era el de “fabricar” los contribuyentes apócrifos, es decir, era crear la sociedad o conseguir la persona física que fuera a inscribirse, hacer toda la tarea de confección de contratos, constataciones y todo lo necesario para inscribir ese contribuyente. Entonces por ejemplo, en el allanamiento de Miranda Cairo lo que se encuentra y está volcado también en el informe, es el análisis de todos los elementos respaldatorios de las personas jurídicas, que este muchacho se ocupaba de inscribir en AFIP”.

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



El testigo continuó refiriéndose a los talonarios manuales, sobre los cuales también, versaba el mentado informe. Expresó que si bien el primer análisis efectuado fue a partir de facturación electrónica y seguimiento de IP, el grupo también confeccionaba comprobantes manuales como en como en ticket fiscales apócrifos. Explicó que ello surgió de la tarea de desgrabación de las comunicaciones interceptadas tras la orden de intervención de líneas telefónicas - anteriores a los allanamientos-, de lo que surgió que el grupo también clonaban comprobantes (aclarando que tomaban los datos de un contribuyente real, crear un comprobante y emitirlo como si fuera un comprobante real). “Ese comprobante iba a incorporarse un libro y tenía el mismo efecto tributario de crédito fiscal que se computaba y se detraía del saldo a pagar de impuestos”- enfatizó.

En ese entonces, se concluyeron las estimaciones realizadas por los funcionarios de la Afip- DGI, que determinaron un perjuicio fiscal ocasionado por el accionar de la asociación ilícita, durante el período comprendido entre enero de 2015 a diciembre de 2016 y a través de las usinas Bruson S.A., Zarren S.A., Retamar Carlos Alberto, Albarracin Alberto David, Grandolio José Alberto, Domach S.A., Rodriguez Ricardo José, Moncalieri Lucia Leticia, Nuñez Karina Marisel, Giacinti Italio Jose, Ercole Silvia Nora, Musto Sabrina Luciana, Borda Carlos Dario, Wilichowski Cristian Alberto, Canterino Maria Belén, Antunez José Maria, Rete Marcos Matías, Aguirre Fernando Emilio, y la firma Transporte y Distribución S.A. a través de los puntos de venta ficticios 0002 y 0005, generaron, sólo en relación al Impuesto al Valor Agregado, un crédito fiscal impugnabile de doscientos cuarenta y siete millones trescientos quince mil novecientos cincuenta y un pesos (\$ 247.315.951), mediante la emisión de 28.795 comprobantes electrónicos apócrifos, por un monto neto de \$ 1.204.276.275, el que fue utilizado por un total de 3.419 contribuyentes radicados en diversas localidades (v. Cuerpos 1 a 5 de Usinas acompañados por la AFIP-DGI a fs. 41vta. en los que se indica detalladamente crédito fiscal impugnabile cantidad de comprobantes y usuarios por cada una de las firmas antes mencionadas).

En este punto, y a los fines de evitar reiteraciones, corresponde dar por reproducida la narrativa de los informes reservados y fundantes de la existencia de las usinas detectadas, producto de la asociación ilícita, los que



## *Poder Judicial de la Nación*

se encuentran enumerados detalladamente en los fundamentos de la sentencia nro. 44/2021.

Del mismo modo, se está a las consideraciones arribadas tras la valoración de los resultados arrojados por las tareas de investigación encomendadas a la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Rosario” de Gendarmería Nacional en los domicilios informados como pertenecientes a las firmas cuestionadas.

Todos esos elementos, que se pudieron constatar desde el área de fiscalización de la AFIP, encontraron su respaldo fáctico en el producido de los allanamientos llevados a cabo en los domicilios, que se realizaron en fecha 5/07/2017 en Melián 5754, Mendoza 621 piso 7 dpto 1, San Nicolás 2396, 9 de Julio 982 Piso 5 Dpto. “B”, 9 de julio 982 piso 2 dpto “A”, Paraguay 239 primer piso, Don Bosco 196 Bis, Don Bosco 194 Bis, Iriondo 2228, Oroño 1187, piso 8, depto. G, Av. Libertad n° 158, piso 7, Pellegrini 20, Departamento 1, Gorriti 343, Córdoba 645, piso 7, depto. 7, Juan Pablo II n° 208 bis, San Luis 1950, Depto. 1, Vera Mujica 2348, Depto. 6, Santa Fe 1219, piso 7, depto. “D”, todos de Rosario, y José Hernández 1756 de Granadero Baigorria.

Dichos procedimientos fueron concretados por personal de Gendarmería Nacional Argentina, con la intervención de personal especializado dependiente de la AFIP DGI, y que luego dieron origen al informe referido por el CP Fernando Amante en su declaración testimonial, denominado “Contesta oficio 1073/2018”.

Conforme se viene expresando, éstos extremos han sido objeto del juicio llevado a cabo en los autos “LIPORACI, Marcelo Fabián y otros s/ ley 24.769” expte. Nro. 18564/2017/TO1 -conformado de sucesivas elevaciones parciales-, y en lo que respecta a la materialidad de los hechos, ha sido confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (Resolución Registro N° 767/23).

### **2. Autoría y participación**

Acreditada la existencia de la asociación ilícita tributaria investigada, cuya actividad habitual consistía en la emisión de facturas apócrifas a nombre de sociedades espurias, que comercializaban a contribuyentes con el fin



de evadir sus impuestos, principalmente el IVA, cabe adentrarse en lo concerniente a la estructura de esta organización, concretamente la conformación de sus miembros, los roles que ellos desempeñaban y su participación en los hechos.

En los fundamentos de la sentencia nro. 44/2021 se acreditó la existencia de una asociación ilícita tributaria integrada por dos sub-grupos, que se interrelacionaban entre sí. En esa oportunidad se concluyó que uno de los subgrupos estaba organizado por Marcelo Fabián Liporaci, Lelio Omar Serafini y Miguel Jorge Centeno (éstos dos últimos fueron sobreseídos de los presentes, a causa de su fallecimiento); en tanto el otro grupo fue diagramado por Ricardo Cayetano Astudillo y Adrián Marcelo Zeballos, quienes ostentaban el carácter de organizadores. Estas conclusiones se sustentaron en prueba de cargo, que fue debidamente analizada en la sentencia referida; en cuanto a la cronología de los acontecimientos cuenta ya con el doble conforme ya que dichos aspectos han sido confirmados por la Cámara Federal de Casación Penal.

En lo que concierne a esta causa, y en concreta relación con los imputados cuya intervención se juzga en esta parcialidad, no caben dudas de que en el marco de la asociación, ellos ostentaban roles y funciones propias y necesarias para el funcionamiento de aquella. alguna de las defensas de los aquí condenados, concretamente la relacionada con la intervención de Pazzi, sostuvo que había que desincriminarlos a todos, ante la inexistencia de elementos demostrativos de la existencia de un acuerdo asociativo entre los cuatro que juzgados en juicio.

No obstante y sin perjuicio del desarrollo que tendrá lugar seguidamente, debe recordarse que lo que se encuentra en tela de juicio, es en todo caso el acuerdo asociativo que pudieron tener con los hechos sustanciados dentro de la causa "Liporaci", al que se han sumado otras intervenciones también asociativas dentro del presente expediente que sin embargo optaron por una salida alternativa al juicio oral. Es decir que las intervenciones que el tribunal tuvo aquí por comprobadas, no pueden significar un análisis en función de la prueba que ha sido traída aquí a debate, ni vinculada con intervenciones únicas en relación a los aquí condenados, sino que reconocen como antecedentes una organización del tamaño de intervinientes respecto a sucesos que han sido decididos



## *Poder Judicial de la Nación*

en diversos expedientes y por diversas vías. Baste para ello repasar la cantidad de situaciones que de manera resumida han sido expuestas en la sentencia, con motivo de las resoluciones pretéritas ya analizadas, a la que suman los casos del presente expediente, algunos de los cuales decidieron utilizar mecanismos optativos al debate. Es decir que no se ha tratado de la discusión de cuatro aspectos asociativos sino de una magnitud de casos que tuvieron que ser analizados en diversos procesos.

Con estas aclaraciones pasaré a examinar individualmente las intervenciones o su ausencia, de manera particularizada.

### **a.- Omar Antonio Pazzi**

De la prueba rendida en el debate oral se acreditó que Omar Antonio Pazzi formó parte de una asociación ilícita tributaria, encontrándose directamente vinculado con el subgrupo que lideraba Ricardo Astudillo y Adrián Zeballos. Asimismo, ha quedado acreditado su rol de vendedor e intermediario en la comercialización de facturas apócrifas.

Conforme se ha explicado al tratar la “Materialidad”, esta función resultaba primordial para la existencia de la asociación. Ello, en virtud de que por las características de las transacciones que realizaba, es decir, venta de comprobantes falsos, su adquisición era muy preciada por quienes con ánimo de aumentar su crédito fiscal, los presentaban ante el organismo recaudador.

Por lo tanto, el rol que desempeñaba Omar Pazzi exigía por un lado discreción (toda vez que por la ilicitud de lo comercializado no podía darle publicidad por medios de difusión masiva) y por el otro lado, requería de un contacto directo y fluido entre los usuarios finales y los “productores” de la facturación espuria.

Ello se ve claramente plasmado de las escuchas telefónicas, que son más que gráficas y elocuentes. En este orden de ideas, a los fines de ejemplificar lo dicho, cabe recordar algunas de los diálogos reproducidos durante el debate, que fueron obtenidos como consecuencia de las escuchas telefónicas ordenadas en instrucción. En esos casos intervino el abonado telefónico nro. 341-6394729, que era utilizado por Omar Antonio Pazzi, conforme lo acredi-



taron las investigaciones realizadas (v. informes de fs. 1704 vta., 1707 y consultas de fecha 30/12/2019 en los autos 18564/2017/TO1).

Si bien esta adjudicación fue cuestionada por su abogado defensor, en cuanto a que la búsqueda inicial del usuario del teléfono en cuestión fue a través de la red social “Facebook”, y así se llegó al nombre de Omar Pazzi; del informe de Telecom, agregado a fs. 1707 se informó que la titularidad de la línea 341-6394729 correspondía a Matias Emanuel Pazzi, con domicilio en Las Heras 876 de Serodino, provincia de Santa Fe, que coincide con el domicilio informado como propio por el Sr. Omar Antonio Pazzi en sus declaraciones indagatorias y al cual se practicó las citaciones del referido. Además, si bien la titularidad de la línea estaba a nombre de Matías Emanuel Pazzi, de los diálogos surge de manera reiterada la mención a “Omar”, por lo que entiendo que ninguna duda quedó que se trataba del usuario del abonado en cuestión.

En su momento, durante los alegatos, la defensa de Omar Pazzi, a cargo del doctor Torres e Souza, también se quejó de la inexistencia de una pericia de voces para corroborar la compatibilidad de la voz de su cliente con la de las escuchas recibidas. En su momento las defensas habían interrogado al Contador Amante respecto a cómo podía identificar las voces de los interlocutores y el inspector sostuvo que luego de tanto tiempo de escuchas, no le cabía ninguna duda en cuanto a las identificaciones que realizó en su testimonio.

Este relato en cuanto al modo de identificación de las voces por parte del investigador, entiendo que no solo exhibe un procedimiento lógico y de sentido común, sino que además encuentra respaldo en el trabajo de campo y de contexto realizado, de acuerdo a lo referido en el párrafo anterior, en cuanto a que la línea telefónica se encontraba a nombre de Matías Pazzi, donde además, el interlocutor en las llamadas se refería como “Omar”.

Más allá de esto, no concuerdo con la defensa en cuanto sostiene la imposibilidad de identificar una voz de modo exclusivo a partir de una pericia. Incluso en el caso del otro condenado, Gustavo Protti, con un timbre de voz muy particular, de acuerdo a mi impresión, cuando le tocó prestar declaración, se trató de una voz fácilmente reconocible; es decir, de indudable identidad respecto a las escuchas cuya intervención se le atribuían. Si esto lo pude



## *Poder Judicial de la Nación*

percibir de manera nítida respecto de Protti, con solo escucharlo en un período de tiempo escaso, porque se trataron de algunos minutos, entiendo que ninguna dificultad podía llevar al investigador el mismo cometido, cuando su tarea no solo se ha basado en este elemento de cotejo, sino que además, se apoyaba en otros resultados a partir de la intensa investigación por él desarrollada.

El testigo investigador Fernando Amante explicó que de su trabajo de desintervención y desgrabación de las escuchas, pudo reconocer incluso que Omar Pazzi se trataba de uno de los principales vendedores. Las siguientes conversaciones, que fueron mantenidas entre Omar Pazzi y Ricardo Astudillo y se encuentran transcriptas en el legajo de escuchas pertenecientes a este último (abonado nro. 341-6990010), dan cuenta de ello.

En este punto cabe resaltar que Ricardo Cayetano Astudillo era uno de los organizadores de la asociación ilícita tributaria, habiéndose acreditado que intervino junto con Adrián Zeballos en el diseño y distribución de tareas de los miembros de la asociación, manteniendo fluidas relaciones con el otro subgrupo que también la conformaba, dirigido por Marcelo Liporaci, y entre los cuales existía un intercambio de facturas apócrifas emanadas por las empresas ficticias creadas por cada uno de ellos. Ese comprobado rol de organizador -tratándose del coordinador y administrador de los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la creación de dichas empresas como para la comercialización de las facturas por ellas emitidas- lo colocaron como uno de los principales responsables de los hechos ilícitos juzgados. De ello, se infiere que el fluido vínculo que mantenía con Omar Antonio Pazzi, conforme se acreditó del producido de las escuchas telefónicas, no se trataba de una relación eventual o menor, sino que era un aporte esencial.

Así, por ejemplo en aquella obrante a fs. 29 de ese legajo -de fecha 24/05/2017- da cuenta de las conversaciones de Omar Pazzi con Astudillo por pedidos de facturas que fueron recogidos por el primero.

Astudillo: Omar?

Pazzi: Hola Richard

Astudillo: decime

Pazzi: yo ya estoy eh



Astudillo: ah listo, voy para allá, dale  
Pazzi: yo ya, si fue rápido, yo ya estoy aca en el barcito  
Astudillo: ah bien ahí bajo que está Omar, ehh senti, Adrián esperándome ahí abajo, que le entrego unas cosas y...  
Pazzi: bueno  
Astudillo: y me voy para allá  
Pazzi: dale listo  
Astudillo: hay que...  
Pazzi: cómo?  
Astudillo: hay que decirle algo a Adrián?  
Pazzi: no, después lo tenemos que ver juntos, viste, cuando nos juntemos ahí hay unos cuantos pedidos y tengo que pasarte más eh viste de esos que van por día, no se si el ya los hizo y los tiene guardados él o... hola  
Astudillo: ya ahora le pregunto entonces, ya le digo  
Pazzi: eh  
Astudillo: ya le digo, yo ahora estoy bajando  
Pazzi: cualquier cosa cuando estés con el llamame  
Astudillo: perfecto, dale  
Pazzi: dale, listo, chau, chau"

El diálogo registrado a fs. 9 del legajo de Astudillo, del 24/05/2017, entre Ricardo Astudillo y Omar Pazzi, fue también reproducido en la audiencia de debate; y sobre él, Amante aclaró que Astudillo y Zeballos trabajaban en dos oficinas distintas, y que cuando Omar Pazzi mandaba algún pedido de comprobantes apócrifos que tenía que ver con facturas electrónicas, era para Zeballos y si se trataban de tickets lo gestionaba Astudillo. En este caso hablaban de un pedido que tenía que ver con comprobantes electrónicos y hablaba con "Maicol", que se trataba de una persona que él consultaba cuando aparentemente lo tendría al lado, mientras dialogaba de manera simultánea con Pazzi.

"Pazzi: Richard  
Astudillo: Omar  
Pazzi: si... hola... hola... hola Richard  
Astudillo: hola Omar





## *Poder Judicial de la Nación*

Pazzi: si, si, te escucho

Astudillo: escúchame, vos que querías saber de Adrián?

Pazzi: no, si esas que van por día, si él las iba manejando por día. El caso de Ponce Construcciones... y las tenía él porque a mí no me había llegado. Había una Mel... Melchiori también

Astudillo: Melchiori... pará... que ahí está en alta voz, ahora te... Omar, me escuchas

Pazzi: hola

Astudillo: me escuchas?

Pazzi: hola

Astudillo: habla Maicol, ¿me escuchas?

Pazzi: si Maicol como va?

Astudillo: cuando mandaste ese pedido?

Pazzi: y hace bastante ya de Melchiori, son eh hh \$20.000 pero las facturas no tenían que superar los 5.000 finales algo así, no tengo los papeles acá en mano

Astudillo: pero es día a día esa, así que falta todavía

Pazzi: si, no, no, yo quería saber si te había llegado nada más, eh o sea que si vos ya la tenias algo hecho o viste porque después...

Astudillo: hace una cosa Omar, hace un resumencito, ponele pedido faltante y lo pones en un solo correo

Pazzi: eh bueno, bueno, bueno, ahora acá no tengo máquina, te estoy esperando a vos Richar... hola...

Astudillo: si si

Pazzi: eh no tengo máquina aca para hacerlo me entendes

Astudillo: no, no, ahora lo miramos, yo ahora... ¿Me escuchas Omar? Estoy acá en la puerta

Pazzi: ah bueno yo estoy adentro

Astudillo: Salí un segundito a ver

Pazzi: pará ahí voy"

Del contenido del dialogo surge claro que Omar Pazzi conocía la actividad que estaba desarrollando. Al solicitar la facturación hizo una indicación de cantidades monetarias a las cuales debían ajustarse los comprobantes



tes requeridos “son ehheh \$20.000 pero las facturas no tenían que superar los 5.000 finales algo así”. De este modo se comprueba, conforme lo indicó el Sr. Fiscal en sus alegatos, que Omar Antonio Pazzi tenía conocimiento de cómo operar dentro de los requerimientos de la asociación ilícita, a través de regular las solicitudes con un monto que no resultara llamativo, todo ello, con la finalidad de evitar que se “explotaran” las empresas ficticias, a raíz de una posible facturación voluminosa, que no condijese con la informada capacidad económica del grupo, que pudiese despertar la sospecha del organismo recaudador.

Del mismo modo se destacó el requerimiento de facturación por parte de Omar Pazzi en el diálogo transcrito a fs. 41/42 del legajo referido, del 22.05.2017. En esta conversación se evidenció el conocimiento que tenía Pazzi en relación a la modalidad de trabajo del subgrupo liderado por Ricardo Astudillo, toda vez, conforme lo explicó el investigador Fernando Amante en su testimonio, el grupo de Astudillo era muy “pulcro” en las presentaciones de declaraciones juradas. En tanto todo contribuyente que hace facturas electrónicas obligatoriamente debe disponer de facturas de imprenta, para caso de urgencias y debidamente acreditados, esa situación permitía a esta banda emitir facturas retrotraídas en el tiempo para satisfacer las necesidades de sus clientes. A continuación el diálogo en cuestión:

“Astudillo: Omar querido

Pazzi: Richar, cómo andas? Buen día

Astudillo: buen día, todo bien Omar, todo bien. Vos?

Pazzi: Bueno mejor así. Escucha Richar, vos a que hora vas a andar por la ofi?

Astudillo: tipo 1 y media más o menos

Pazzi: ah bueno bueno, así nos juntamos para ver que hacemos con esa manualles viste que tenemos pendientes

Astudillo: si, ya están, ya creo que hoy me llevan los originales. Si no es hoy, mañana a la mañana

Pazzi: ah bueno bueno. Y ver lo otro que se hizo manual, tratar de rastrearlo viste, para ver si realmente lo informaron, porque sino viste vamos a tener un quilombo con los clientes terrible.



## *Poder Judicial de la Nación*

Astudillo: eso ahora esta semana lo vamos a hacer tranquilos todo eso, vamos a rastrear y vamos a ver, eh.

Pazzi: eh porque viste si lo detecta, lo detecta el sistema, cosa que lo va a detectar, eh nos van a tirar para atrás las operaciones y vamos a quedar para el diablo y vamos a perder lo otro también.

Astudillo: es que lo que me decía el gordo, Hernán, que lo habíamos hecho con Intermedios, pero bueno quiero estar tranquilo de que se hizo con Intermedios.

Pazzi: si pero hay otros clientes anteriores, me entendes? Que se le hizo y se le hizo bastante, eh, que no se a donde fue a parar viste la información

Astudillo: vamos a hacer así, esta semana vamos a buscar toda la info y abrimos el paraguas para hacer declaraciones donde hay que hacerlas y toda esa cuestión

Pazzi: me parece, viste

Astudillo: si si totalmente de acuerdo

Pazzi: porque por ejemplo a Compañía Argentina le hicimos un fangote y y en manual viste

Astudillo: no no, totalmente de acuerdo, vamos a abrir el paraguas antes de que llueva

Pazzi: bueno listo

Astudillo: dale..."

A fs. 185/186 del legajo de intervenciones telefónicas de Astudillo obra la conversación del 01/06/2017, donde se aprecia un fragmento del diálogo entre aquel y Adrián Zeballos, en la que ambas cabezas de la organización expresaban preocupación respecto de si estaban siendo escuchados por la Afip. Fernando Amante al dar su relato dijo que Zeballos tenía un contacto que le decía que su línea estaba limpia, y Astudillo le preguntaba si podía averiguar si las líneas de Pazzi estaban pinchadas. Amante expresó que la segunda parte de la conversación hablaban de la preocupación del grupo y que por ello cambiaron las oficinas. Una se fue a Brown y Astudillo se fue a calle Córdoba, sostuvo el inspector. Además los interlocutores conversaban sobre algunas contingencias -Zeballos decía que estaba sin internet y estaban con problemas para emitir- y hablaban de los pedidos de Omar Pazzi y de Atilio Miotti, uno de los vendedores de facturación que formaba parte de la asociación ilícita y que resultó condenado en el



juicio referido de "LIPORACI", donde tuvo lugar el primer juzgamiento relativo a esta organización.

Ellos referían a la gran cantidad de pedidos que les traía Omar Pazzi, reconociendo incluso que no daban abasto con dicha magnitud, donde también creían que podía tener su teléfono intervenido. Si bien tales expresiones son dichos de terceras personas, adquieren valor probatorio al poder ser corroborados por las propias conversaciones de Pazzi, que a lo largo de las escuchas reseñadas, como otras conversaciones más, pasaba gran cantidad de pedidos que iba recolectando de los contribuyentes interesados.

"Zeballos: aló

Astudillo: Adri... consultation, el amigote nuestro, que nos pasa el santo

Zeballos: si

Astudillo: eh para averiguar de las liniusis

Zeballos: de qué?

Astudillo: de las liniuchas... te habló así medio... porque no estamos...

Zeballos: ah si entonces?

Astudillo: para averiguar, de Omar y la mía... o será medio al pedo decís vos?

Zeballos: mm yo no levantaría la perdiz

Astudillo: él no levantaría la perdiz

Zeballos: Omar, Omar está, está hasta las bolas, desde ya

Astudillo: si... sentí, Omar debe estar hasta las bolas desde ya dice jajaja

Zeballos: jajaja no lo quiero asustar pero jajaja

Astudillo: no lo quiero asustar dice jajaja

Zeballos: yo no levantaría la perdiz

Astudillo: dice que a Suster... dice que a Suster lo recomendaste vos, ese el miedo jajaja, pero el es el más vivo de todos en eso, viste que él no te habla nunca por... eh... de cosas así medias raras

Zeballos: Edgardo

Astudillo: si

Zeballos: noo, ni anda con papeles encima, nada

Astudillo: se lleva los papeles, vise que él ni pide, no manda correos, no hace nada jeje



## *Poder Judicial de la Nación*

Zeballos: jaja

Astudillo: nonono, yo... yo... mira sin que vos digas esto yo era de no levantar el avispero tampoco, porque siempre me dice, si mira hay una orden de esto, yo lo voy a liquidar...

Zeballos: es más, te voy a decir lo de ayer... lo de ayer yo no me quería juntar

Astudillo: quieres que te llame por face?

(...)

Zeballos: porque papi ya le dijeron... está, va un paso más, no, si está que hay un quilombo en Rosario, hay un quilombo y que hay gente laburando e investigando está viste

Astudillo: si

Zeballos: pero... eh yo le reste impor... con esta movida que estamos armando estamos bien, salvo que me caigan mañana, estamos tranquilos viste

Astudillo: no no,

Zeballos: no pero aparte yo hasta la semana que viene no puedo hacer ningún movimiento porque creeme que estamos hasta las bolas Richar

Astudillo: sii, olvidate, si ya estaba viendo, Atilio viste ayer también mando un montón

Zeballos: pero estoy al día de nuevo, si a mí la única persona que me descajeta es Omar

Astudillo: entró trabajo a patadas

Zeballos: cuando yo termino de hacer todo, Omar te manda 30 trabajos jajaja

Astudillo: dice el único que me descajeta es Omar jajaja

Zeballos: cuando yo termino de ponerme al día me mandó 30 de golpe, no podés vivir así boludo jajajaja, como no quieres que le tengan el teléfono pinchado jajaja-ja, está re pinchado ese teléfono jajaja, me descajeta el laburo".

Del mismo modo, en otra charla entre Astudillo y Zeballos se da cuenta de la cantidad de pedidos que les hacía llegar Omar Pazzi, que ellos mismos identifican como uno de sus vendedores más relevantes. Se trata de un fragmento correspondiente a la charla transcrita a fs. 197-198-203 del legajo de Astudillo, identificada como B-11002-2017-06-02-093422-6, de fecha 02.06.2017:



“Zeballos: recién me manda uno y me dice se podrá anular esta y hacer en dos?

Astudillo: no no, se lo sacaste cagando

Zeballos: le dije que si se puede pero me rompe soberanamente las pelotas tener que estar trabajando dos veces cuando son ustedes los que tienen que controlar y fijarse y hacerlo!

Astudillo: muy bien!

Zeballos: no somos tus secretarias! Le puse, me la agarre con todo

Astudillo: muy bien

Zeballos: sean más responsables gánense la plata con dignidad, miren lo que mierda y dejen de andar pajereando! jajajaja

Astudillo: jajaja, me encanto! Me encantó! jajaja

Zeballos: jajaja

Astudillo: pero está bien! Pero aparte con tan suelto de cuerpo te lo dicen!

Zeballos: pero además sabes la bronca que da que en esta época fecha vos lo podes hacer que se yo con Omar que si bien te rompe exactamente igual los huevos está sosteniendo prácticamente el 50 % del negocio, me explico

Astudillo: exactamente tal cual

Zeballos: pero con este puto de mierda, encima yo peleado con la hermana porque no hace las cosas jaja

Astudillo: te soy honesto Adri, hoy a nosotros el que nos sostiene es Omar y sabes quien ahora está con una gran parte de nuestra sustentabilidad Atilio...”

Otras conversaciones de Omar Pazzi fueron captadas en las que pasaba los pedidos, tal como la que mantuvo con Adrián Zeballos - obrante a fs. 209/210 del legajo, y en la que se referían a facturas manuales (llamada identificada como B-11002-2017-06-02-103150-6 de fecha 02/06/2017):

“Pazzi: Hola Richar

Astudillo: Omar querido! Cómo andas?

(...)

Astudillo: ahí te mandaron algo los chicos?

Pazzi: no, vos sabes que nada

Astudillo: cómo nada?



## *Poder Judicial de la Nación*

Pazzi: ehh ayer me mandó uno o dos clientes, Dragado y.... y por lo menos a mi no me llegó me entendés?

Astudillo: ah porque me dijo que estaban haciendo, que lo único que había quedado medianamente pendiente lo que habías mandado ayer

Pazzi: mmm

Astudillo: y que los otros como son con fechas dice lo estuvimos haciendo y después le mandamos todo junto

Pazzi: bueno y ahí yo te pasé anoche que era por eso que te llamé hoy eh unas viandas viste por esa chica si se va

Astudillo: si no pero ya está quédate tranquilo que la

Pazzi: bueno yyy no sé cómo, como venís vos con lo manual que, si lo tenes vos, como tenemos que hacer

Astudillo: no, no, después paso, paso a buscarlo ahí de, de Melisa

...

Pazzi: si me das un segundito ya te digo... porque hay varios pendientes... A ver que hay aca... no ayer me llegó Zamora y Enropal terminado, Cardarelli que le falta una parte y una parte de Dragado Santa Fe, nada más

Astudillo: bien bien, hoy hoy están de nuevo porque están arrancando tarde porque, ahhh, pará que ayer estaban con el tema de la, de AFIP que estaban haciendo retoques a las páginas y era una tortuga así que hoy se van a quedar de nuevo hasta tarde como el otro día.

Pazzi: bueno

Astudillo: Pero hoy, hoy te sacan todo quédate tranquilo

Pazzi: bueno de los chiquitos vos sabes algo? Ya acomodaste?

Astudillo: si ya está todo acomodado, hoy se imprimieron todo y hoy entre Nair y Hernán están ahí a full dándole con todo.

Pazzi: bueno, bueno dale.

Astudillo: después mandale un mensajito a Nair a ver que tiene porque ayer sacaron también creo antes de todo este quilombete habían sacado algo.

Pazzi: bueno dale ..."

Los diálogos en los que interviene Omar Pazzi resultan elocuentes. A fs. 230/232 del legajo de referencia, conversación B-11002-2017-



06-02-171047-11 del día 02/06/2017, los interlocutores conversan sobre una persona que le dijo a Astudillo que lo conocía a Pazzi. Además refiere a vendedores en la localidad de Totoras, a lo que Omar Pazzi responde “no lo conozco, pero hay vendedores míos”. Explicaba el testigo Amante al oír ese audio, que se daba también el caso de vendedores de vendedores, lo que sirve para graficar la posición jerarquía que tenía Pazzi dentro de la organización, que no solo surge de la percepción de Amante sino que también ha quedado de manifiesto con motivo de las llamadas a él adjudicadas. Se transcribe una de ellas, donde también se percibe de fondo la voz de un tal “Maicol”, que aparentemente trabajaba codo a codo, con Astudillo

“Pazzi: Richar

Astudillo: Omar querido! Podes hablar?

Pazzi: si decime

Astudillo: vos conoces a Lescano, un abogado?

Pazzi: mm no

Astudillo: -como se llama?- Marcos Lescano

Pazzi: No, no de donde es?

Astudillo: De Rosario, pero anda. Él a vos de nombre te conoce

Pazzi: A mi me conoce?

Astudillo: si de nombre

Pazzi: No sé por donde puede venir la mano, me entendés, pero yo te digo más creo que no lo sentí nombrar en mi vida

Astudillo: Porque hay un loco que se llama Bruno de Totoras -se escucha de fondo: que sabe, que estuvo en la compra y venta de IVA- estoy con Maicol acá al lado mío

Pazzi: Con quién?

Astudillo: Con Maicol

Pazzi: aja

Astudillo: Eh estuvo con una gente que, con este de, este es abogado de Atilrra también, viste, por fuera

Pazzi: Si, si

Astudillo: Yyyy conoce tu nombre a través de un tal Bruno, de dónde? De Totoras





## *Poder Judicial de la Nación*

Pazzi: Bruno de apellido o Bruno de nombre?

Astudillo: De nombre, no se acuerda al apellido Maicol, si vos se lo decís

Pazzi: ah no no, Bruno de Totoras tampoco conozco che. Yo en Totoras no tengo nada, viste, si alguien vende, eh son vendedores míos pero de Toto, en Totoras no eh

Astudillo: No, no, entonces no, entonces justo Maicol estuvo con este muchacho, digo pará, vamos a ver referencias, le vamos a preguntar a Omar si lo conoce, como te nombró Omar.

Pazzi: No, te digo te digo sinceramente para nada

Astudillo: Bien, bien, bien, bueno Omarcito

Pazzi: eh hh bueno como viene todo uuum viene manejado o no?

(Se esucha de fondo que Astudillo habla con Maicol: Cómo viene lo de Omar? Todo tranquilo? - Maicol: todo tranquilo, por lo menos. Astudillo a Maicol: Queee, que le mandaste hoy? Maicol: todavía nada porque estoy con los pendientes. le puedo terminar Rafa.)

Astudillo: te va a terminar Rafa.

Pazzi: si.

Astudillo: ¿qué apuro tenes? ¿Cuál es la más apurada de todas?

Pazzi: no viste lo que vayan sacando para mi está bárbaro para poder eh, viste, no correr los últimos días me entendes? Salvo las que vayan, porque de asi eh de clientes que tenemos para sacarlos hay unos cuantos viste sin sacar.

Astudillo: Maicol de fondo: si hoy nos quedamos hasta tarde. Astudillo: hoy se quedan hasta tarde. Maicol: hay un inconveniente con Ponce? Astudillo: que tiene Ponce? Maicol: 200.000 de IVA -Astudillo: y? Maicol: y quiere facturas menos de 50 000 de IVA -Astudillo: ahh Ponce

Pazzi: no, bueno no, pero ya a esta altura no le des bolilla, o sea, usemos todos, usemos todos los días del mes pero, hola?

Astudillo: Si, si, la escuchamos Omar eh

Pazzi: Usemos todos los días del mes, pero ya viste, porque lo encargó tarde, me entendes?

Astudillo: Ya está entonces, entonces ahora le digo que lo apuren un poquito

Pazzi: Bueno, y acordate lo de esta pibaaaa, de las viandas y las manuales



Astudillo: la verdú?

Pazzi: sí, y las vie, y las manuales te acordás?”

Además de las conversaciones, que evidencian la indudable intervención de Omar Pazzi dentro de la asociación ilícita destinada a la evasión impositiva, su participación también se apoya en otros elementos. Por ejemplo, su nombre surge del informe realizado por la AFIP como respuesta al oficio 1073/18 identificado como AC/sigea Nota N° 47/20. Tras el allanamiento efectuado en calle Mendoza 621 piso 7 departamento 1 de Rosario -donde funcionaba una de las oficinas que manejaba Zeballos- se encontró un mail solicitando notas de crédito por anulación de facturas de diferentes usuarios; de Nueva Logística -perteneciente a Roberto Pereyra-, titulada con “asunto Omar”; y nota de crédito (fs. 13 y sgtes del informe).

En ese documento se detallaba el secuestro concreto en el domicilio de la contadora María Cristina Ottaviano, que había sido condenada con un papel preponderante, en el veredicto 44/2021 correspondiente al primer juzgamiento. Se encontró allí un e-mail dirigido al estudiocentral13@gmail.com desde la cuenta nuevalogística2015@hotmail.com de Roberto Pereyra, que llevaba como título “Omar – Marzo-MOLYAGRO SA”.

En el cuerpo puede observarse la leyenda “este trabajo es para facturar con FINAFER SA 33-71494243-9” (folio 70 de la pieza citada), de lo que se advierte, en el contexto de las llamadas reseñadas que se trata de un pedido de Omar Pazzi. Allí solicitaba la facturación de una empresa para un interesado. La misma modalidad se detectó en el mail de fecha 22/03/2017, dirigido a la misma cuenta estudiocentral13@gmail.com y enviado desde nuevalogística2015@hotmail.com, de Roberto Pereyra con título “Omar-Marzo-Verdu SA”. En el cuerpo de dicho correo surgía “Facturar únicamente con Marín María Magdalena y en letra manuscrita figura pedido a Melisa”; la que posteriormente fue caracterizada como apócrifa por la AFIP.

A estos mails se suman otros elementos, también relacionados con secuestros de documental de los múltiples allanamientos oportunamente ordenados, todos en relación al primer desprendimiento de la asociación, ya referido en varios pasajes de la sentencia.



## *Poder Judicial de la Nación*

Uno de los allanamientos, consistió en el registro domiciliario concretado en Avenida Libertad 645 piso 7 de Rosario, domicilio perteneciente a Ricardo Astudillo, que también consta en el mentado informe de AFIP. Se incautó allí una agenda del año 2017 donde surge una anotación con la leyenda “Omar 40.000”. Dicha anotación figuraba como fechada el 30 de enero, donde había anotaciones con un importe de \$270.000. Esa información, fue constatada con los tickets de depósito en la cuenta “asociación mutual de boxeadores” del Banco Francés de la misma fecha. Otra de contexto similar surge de fs. 24 dorso, del día 24/1/2017, con una anotación que expresa: “Omar, \$68.000”.

Además en ese allanamiento se encontró un cuaderno color gris con anotaciones, y una de ellas consistía en un cuadro de doble entrada, que tenía en una de sus columnas, nombres de vendedores de comprobantes apócrifos que trabajaban para la organización (muchos de los cuales ya fueron identificados en el fallo anterior, por ejemplo, “Atilio”), entre los que figuraba “Omar”, nombre que se correspondía con tres columnas tituladas “%F”, “%TK” y “%M” y la intercepción de dichas entradas confluía en la determinación de los números 10, 3 y 10, respectivamente.

En relación a este cuadro, en el Informe que se viene analizando, la AFIP determinó: “Con respecto a la primera columna se entiende que se trata de “REVENDEDORES” de los comprobantes apócrifos, y de otros sujetos generadores de usinas con los cuales intercambiaban datos de usinas y/o comprobantes apócrifos de acuerdo a los pedidos recibidos. Dicha información se corrobora con la documentación secuestrada y constan las desgrabaciones de las escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la presente causa. Del análisis surge información de un listado de revendedores del grupo y los porcentajes acordados para el pago por las ventas de los comprobantes apócrifos solicitados, en todas sus variables: facturas electrónicas, facturas manuales y/o tickets facturas)” (v. folios. 109/111 del informe AC/sigea Nota N° 47/20).

También en ese procedimiento se hallaron otros mails enviados a la casilla [elpolacoticket13@gmail.com](mailto:elpolacoticket13@gmail.com). Los mails fueron enviados desde [nuevalogística2015@hotmail.com](mailto:nuevalogística2015@hotmail.com) El asunto, nuevamente, está titulado como “Omar” -dirigido a Nahir, de lo que se interpreta que se refiere a Nair García,



quien se determinó en la causa anterior que era empleada de Astudillo-. Allí se le solicitaba que se le indique a Hernán -se entiende que se refiere a Hernán Racca, otro de los empleados de Astudillo- que confeccione remito por la mercadería facturada y que también prepare recibo de pago en blanco y sello para endosar los valores.

También desde esa misma cuenta de mail “nuevalogistica2015@hotmail.com” surgió otro pedido de Roberto Pereyra del 10/5/17 titulado “RV: Omar - pedido de ticket” solicitando para Dellepiane Jorge Miguel lo siguiente “mes de abril de 2017, \$5000 de IVA, en factura Gasoil Rosario y Zona PG menores a \$1000 finales, si o si menores a \$1000 final.”

Otro pedido generado por Roberto Pereyra del mail “nuevalogística2015” también llevaba como “asunto Omar, manuales buenas Forconi Carlos” y su contenido decía “son facturas manuales buenas y describir el detalle de los conceptos/bienes que deberían figurar en la factura emitida. Mes Abril, año 2017, \$4566 de IVA, cuatro cubiertas para camión de \$5435,71 + IVA cada una.” (fs. 181 de la respuesta del AFIP en análisis).

Este elocuente contenido, donde el nombre de Omar se encuentra desperdigado en varias intervenciones de documental secuestrada, se corrobora de la consulta efectuada en los sistemas de la AFIP, respecto del contribuyente Forconi Carlos Alberto, de lo que se pudo verificar que en el mes de abril del 2017 se computó una factura tipo A figurando como emitida por el proveedor, Alcedo Silva Adriana, que coincide con lo solicitado, lo que arroja un importe total de \$26.308,83, lo que indicó plenamente que dicha facturación fue utilizada por el adquirente, es decir que además causó perjuicio al fisco.

En orden a lo expuesto, se advierte que la intervención de Omar Pazzi no solo ha surgido de las escuchas telefónicas que lo ubican como indudable interlocutor de ellas, sino que además, su participación se refuerza con las anotaciones de su nombre en la diversa documental intervenida por Afip luego de los registros domiciliarios concretados en los domicilios de sus interlocutores. Todo ello lo exhibe con un desempeño en la organización que no es menor, y que resulta conteste con su rol de vendedor de facturas apócrifas, tal como ha sido señalado durante la investigación y reforzado durante el debate.



## *Poder Judicial de la Nación*

Para finalizar este punto, debe señalarse que durante los alegatos, las defensas habían esgrimido una inconsistencia temporal de las intervenciones telefónicas, que fueron producidas tiempo después de los períodos de evasión tributaria que consignaron las acusaciones. No obstante, entiendo que con este señalamiento, las defensas presentan desde mi punto de vista, una confusión con el delito objeto de juzgamiento, porque no se ha tratado de una acusación por una evasión impositiva relacionada con un período tributario. En todo caso, del juzgamiento de una organización, una asociación ilícita que tenía por finalidad la evasión impositiva, que pudo tener un efectivo perjuicio en algún período específico, pero que su existencia no se circunscribe ni puede ser relacionada con la concreción de un perjuicio fiscal determinado; lo entiendo así, porque la tipificación de las conductas que encierra el hecho objeto de juzgamiento, se trata de la punición de un acto preparatorio, lo que por definición, no se encuentra necesariamente relacionado con la representación de un perjuicio fiscal específico en relación a un período determinado.

Se recuerda en cuanto al ámbito temporal en el que se desarrollaron los hechos y se captaron las escuchas, que ellas han sido consecuencia del proceso iniciado por la AFIP tras detectar inconsistencias tributarias en los contribuyentes referidos al inicio de la sentencia. Ese fue el motivo por el que las escuchas se originaron durante los meses de mayo y junio del año 2017, es decir en un momento posterior al período en el que se pudo determinar la existencia de un perjuicio fiscal llamativo, que había alcanzado \$247.315.951 entre los años 2015 y 2016.

Esta última determinación temporal en modo alguno ciñó el funcionamiento de la asociación ilícita a ese lapso, porque se tratan de sucesos diversos, que no pueden ser observados con una concomitancia geométrica entre intervenciones telefónicas y/o documentales y perjuicio fiscal. De haberse adjudicado la evasión a los organizadores, hubiese correspondido el análisis de una eventual concurrencia de delitos entre conductas ontológicamente diversas; en cuanto a las conversaciones telefónicas captadas, ellas prueban que este grupo de personas siguió operando, lo que advierte que la voluntad de formar parte de la asociación se mantuvo, pudiendo incluso señalarse, de acuerdo a lo que

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



surge de la primera sentencia, donde fueron valorados los dichos de Amante, la existencia de diálogos, que hacían referencia a determinadas acciones que databan de un año atrás.

El punto será ampliado durante el tratamiento de la calificación legal. No obstante, se advierte igualmente de la lectura de las indagatorias y de los requerimientos de elevación a juicio, que no se delimitaron temporalmente los hechos a los años en los que se detectó el perjuicio fiscal por el ente recaudador, el que se erigió como un dato indicativo del daño causado por la actuación de la organización ilícita. Por lo tanto y más allá de la lectura que efectuó su defensa, entiendo que la participación de Omar Pazzi como uno de los eslabones de la organización, resulta indudable.

#### **b.- Hernán Gustavo Protti.**

Fue condenado como partícipe secundario de la asociación ilícita tributaria, y se determinó que su función consistía en gestionar la inscripción de personas físicas, las que, de acuerdo a la acreditada mecánica de la organización, luego serían utilizadas por el subgrupo liderado por Lelio Serafini, Marcelo Liporaci y Jorge Centeno, como usinas de facturación apócrifa. Se recuerda que de acuerdo a lo corroborado en la primera sentencia dictada en relación a estos sucesos, que Marcelo Liporaci había sido condenado como organizador de la asociación ilícita tributaria, determinándose que era uno de los líderes del subgrupo, impartiendo directivas a sus colaboradores y ejecutores, y operando las empresas ficticias que eran constituidas e inscriptas ante la AFIP, administrando la emisión de facturación apócrifa y el porcentaje con el que la vendía a los usuarios, junto con Lelio Serafini y Jorge Centeno (ambos sobreseídos con motivo de sus fallecimientos).

Tomando este aspecto como referencia situacional del caso de Hernán Gustavo Protti, su intervención fue acreditada principalmente a raíz de las escuchas obtenidas de las intervenciones telefónicas ordenadas en la causa, señalándose concretamente las conversaciones mantenidas con Lelio Serafini y luego, con Marcelo Liporaci. En ocasión de su declaración indagatoria en la audiencia de debate, Hernán Protti admitió conocer a ambas personas, lo que, en concordancia al producido de las conversaciones telefónicas conduce a soste-



## *Poder Judicial de la Nación*

ner que Protti se encontraba directamente vinculado con dos de las figuras más relevantes del grupo criminal.

De las investigaciones se pudo conocer que la línea 3415414184 pertenecía a Gustavo Protti, acorde lo informado por la empresa Claro. Dicha prestataria informó que Gustavo Hernán Protti era su titular, con indicación de su nombre, apellido y número de documento, lo que sirve para determinar la coincidencia con los datos del imputado en trato (v. informe agragado a fs. 2194 del expediente).

Las interceptaciones telefónicas han vinculado este teléfono con el abonado Nro. 341- 3984193 utilizado por Lelio Serafini, uno de los miembros del subgrupo liderado por Marcelo Liporaci. Justamente la intervención de Lelio Serafini de acuerdo a los roles que le fueron adjudicados en su momento, fue la de encargado de la realización de trámites bancarios y ante el organismo fiscalizador, tendientes a la inscripción de las personas humanas y jurídicas que, ulteriormente, serían utilizadas como usinas de facturación apócrifa.

El propio Protti reconoció en la audiencia de debate su vinculación con Lelio Serafini. Si bien en su relato, Hernán Protti explicó que aquel lo ayudaba a realizar trámites por ante la AFIP, contextualizando dicha colaboración con la necesidad de inscribir en ese organismo a dos sobrinos suyos para poder realizar un trabajo, ya que él se había dado de baja, las explicaciones brindadas por el causante no logran desvirtuar el contenido de las conversaciones captadas y se presentan como un intento por mejorar la situación procesal del imputado.

Para reforzar esta intelección podemos referir la existencia de algunos diálogos de los que se desprende que el vínculo entre Lelio Serafini y Gustavo Protti no se limitaba a ese trámite puntual que había descripto Protti en su indagatoria. Del diálogo de fs. 36 del legajo de Lelio Serafini, (cuyo Abonado de origen es el número 3415414184, y el de Destino es el 3413984193) de la conversación del 02.05.2017 se desprende:

“Protti: esuchame, qué querés hacer? Yo ahora estoy yendo a buscar a alguno de los dos pibes para llevarlos hasta la AFIP



Serafini: pero yo tengo que hacer un par de cosas... este... no los lleves a los dos, lleva uno solo Hernán

Protti: está bien, llevo uno

Serafini: lleva uno solo. Hace una cosa, tienen que ir a la calle Alvear, tiene que sacar la fotocopia del documento de identidad, la fotocopia de los dos servicios y cuando entras te dan un número para mesa de entradas, nada más, para mesa de entradas y le decis que vas a sacar el CUIT, nada más

Protti: está bien, que va a sacar el CUIT

Serafini: nada más, si si, vas a sacar el CUIT.

Protti: el otro pibe tiene que ir al Banco a sacar la clave?

Serafini: tiene que ir al Banco para sacar, como se llama, el CBU

Protti: El CBU

Serafini: Si, a cualquier Banco puede ir, si hay uno cerca de la casa mejor así le queda más cómodo”

Esa conversación fue reproducida en ocasión de la audiencia de debate oral y le fue exhibida al testigo Fernando Amante, que expresó: “Serafini cumplía el rol de creador de los contribuyentes apócrifos. Hablaba con Hernán que terminó siendo Protti, que tenía 4 pibes que iban a inscribir y hubo varias conversaciones con el tema de la inscripción”.

Esa explicación brindada por el testigo se vinculaba con el contenido de otras conversaciones captadas a los interlocutores de referencia. De hecho, de la charla transcrita a fs. 38 del mismo legajo, del 03.05.2017 - un día después de la anterior- se aprecia que Hernán Protti le comentaba a Lelio Serafini cómo le había ido en el trámite que había realizado en el AFIP. Incluso le practicó una broma relativa a que no había salido bien la gestión, lo que causó el susto de Serafini. Ello resulta indicativo que Hernán Protti sabía que estaba llevando a cabo una actividad con la finalidad de burlar al fisco, que se originan con el intento de inscripción de diversas personas al organismo recaudador.

“Protti: sos un desastre vos!

Serafini: eh? Por qué?

Protti: eh saltó la bronca

Serafini: qué pasó?





## *Poder Judicial de la Nación*

Protti: directamente no se lo agarraron

Serafini: no?

Protti: no

Serafini: Quién lo atendió?

Protti: una mujer, no, no importa ya está, vos que estás en tu casa?

Serafini: si justo me iba, pero...

Protti: aguanta 5 minutos que te dejo los papeles, salió todo bien, al toque

Serafini: ahh la concha de tu hermana! Boludo!

Protti: jaja, entró y salió, no le preguntaron nada, no había gente...".

Otras conversaciones siguen dando cuenta de que Hernán Protti llevaba a cabo gestiones tendientes a dar similitud a los inscriptos de las empresas. A tales fines contaba con el asesoramiento de Lelio Serafini, quien le aconsejaba en cuál banco abrir las cajas de ahorro, cómo obtener constancias de CBU membretadas por las entidades bancarias, es decir, todas maniobras indudablemente relacionadas con la creación de usuarios de las facturas apócrifas que la organización generaba. En ese sentido se desarrolla la charla que se encuentra transcripta a fs. 49/50 del legajo del abonado señalado, de fecha 03.05.2017:

Protti: bueno ahí el pibe ya fue al Banco y ya tiene el CBU

Serafini: espectacular!

Protti: lo que hay que abrir en el banco es una caja de ahorro

Serafini: si pero algunos te ofrecen algunas cosas más viste?

Protti: está bien pero no hay, porque tuve una charla justo la lleve al banco donde opero yo

Serafini: si

Protti: no tengo cuenta pero a través de mi mujer donde laburamos y la mina me explicaba, me dice, Hernán dice, si no abre una caja de ahorro no puede tener CBU dice, y para abrir una caja de ahorro me tiene que presentar papeles. Pero los papeles son esos y pero no me demuestran ninguna ganancia me dice, me entendés?

Serafini: si, si recién empezó



Protti: cómo va a hacer para demostrar ganancias si recién empieza, mira yo voy a hacer una excepción, pero esto no se puede hacer me dijo.

Serafini: bueno

Protti: ¿claro cómo haces para abrir una caja de ahorro si te estas iniciando en la actividad?

Serafini: pero si acá en el Banco Patagonia te la abren volando

Protti: qué se yo a lo mejor la mina se pensó que queríamos algún beneficio o algo, me entendes?

Serafini: bueno está bien ahí, bueno a qué Banco fuiste? Macro, a dónde fuiste?

Protti: Santander

Serafini: bueno ahí abrí esa. No, lo que pasa que Santander debido a ese desfalco que hicieron de no se cuántos millones de dólares esta gente, están, se han puesto rígidos para abrir las cuentas, porque antes te abrían las cuentas corrientes, todo, con nada.

Protti: ah mira vos, bueno estos pibes ya tienen los papeles, ya los hizo

Serafini: bueno después me tenes que pasar el CBU sin error porque es un número largo

Protti: está bien pero para eso nos juntamos

Serafini: bueno dale y el banco le tiene que dar un certificado con membrete con el número de CBU, está?

Protti: ahhh, no sé, me imagino que se lo habrá dado

Serafini: y se lo tienen que haber dado y sino hay que pedírselo

Protti: porque inclusive el...

Serafini: porque es la única manera, yo lo pongo en el formulario al CBU, pero es la única manera de demostrar que el CBU que yo pongo es de él, el banco le tiene que dar una hojita con el sello del banco, el membrete del banco donde dice

Protti: ah bueno yo le explique a la mina para qué era, me imagino que se la dio porque justo se le cayó el sistema y él volvió más tarde y le dije vení solo, el viene solo le digo, no hace falta que venga? No, no, que venga, me vea a mi que yo se lo hago, así que no se por qué me avisó por teléfono,

Serafini: y mañana encara el otro sobrino tuyo

Protti: si



## *Poder Judicial de la Nación*

La misma mecánica se repite en la conversación de fs. 89 del citado legajo, que le fue explicada por el testigo Amante en cuanto a que del audio surgía que los interlocutores seguían con la inscripción de dos personas, y en la que Protti exclamaba: “ya hice todo lo que teníamos que hacer y no arrancamos”. Efectivamente, del contenido de la charla se aprecia que aquel se quejaba en cuanto a “hay que mandarle curso a eso...” “estoy esperando la carroza...”, y en otra conversación también manifestó “arrancamos boludo sino hace dos meses que estoy con esto, yendo y viniendo pa todos lados boludo” y “todavía no vi un peso, vo... nos vemos”. Todo ello indica un conocimiento acabado por parte de Hernán Protti de la actividad que estaba desarrollando, con la expectativa de obtener un beneficio económico. También desautoriza su defensa en cuanto a que se trataron de intentos comerciales legítimos que no llegaron a prosperar; no obstante, sus dichos no encuentran justificación en el hecho relacionado con la intervención de Serafini, encargado de conseguir vendedores inscriptos cuyo reclutamiento fue relacionado en varios casos con la intervención de Protti.

En este punto cabe recordar lo explicado por el testigo investigador Fernando Amante, en cuanto a la importancia de la función de inscripción de nuevos contribuyentes. En su alocución, el testigo indicó: “Afip detectaba a los apócrifos cada vez más rápido, entonces permanentemente esta organización necesitaba recurrir a nuevos contribuyentes, por eso el rol de Protti era relevante”, “una especie de Hidra de mil cabezas”, graficó Amante en otro momento de su testimonio, refiriéndose sin embargo a la enorme estructura de la organización.

A continuación se transcriben algunas conversaciones que respaldan la intervención valorada. Así, obran dos diálogos del 08/05/2017 del legajo perteneciente a Lelio Serafini. El primero de ellos, da cuenta que:

“Protti: así que listo, ya fue. Escuchame, lo otro como quieres que hagamos? Hay que mandarle curso a eso ey.

Serafini: Hay que mandarlo al otro pibe

Protti: si ya fue boludo, vos me tenes que dar los papeles del otro

Serafini: de, como es que se llama?

Protti: de Matías, de Matías



Serafini: Ah pelotudo este no me trajo eso que faltaba. Ahora lo voy a llamar

Protti: está bien, Rubén ya lo metí.

Serafini: bien

Protti: entiendes?

Serafini: están caminando entonces todo

Protti: ya está todo adentro, ahora depende de que vos te fijes, le des de alta, hagas lo otro y ya está.

Serafini: bueno dale

Protti: pero lo mío ya está todo hecho, hay que ver este pibe, nos tenemos que juntar con este pibe

Serafini: bueno

Protti: Pase ya está para facturar boludo y yo estoy esperando la carroza

Serafini: ese ya está, faltan los otros, bueno listo listo.. hola?

Protti: te escucho, te escucho. Como vas a hacer?

Serafini: y si hay que ir a llevárselo a Pase, sabes por qué? Porque se le cayó una el otro día.

Protti: cómo?

Serafini: el tenía uno se le... está necesitando urgente todo pero por lo menos uno porque se le cayó uno

Protti: y?

Serafini: y me dice qué pasó? Y le digo ya están todos y me dice bueno tráeme por lo menos uno urgente

Protti: ahí te llamo, ahí te llamo.

Serafini: bueno dale”

Del segundo de los diálogos del mismo día, obra a fs. 93/94, y se desarrolla de la siguiente manera:

“Serafini: porque ese CBU lo tiene que llevar a la DGI porque sino como van a salir las boletas? Ese CBU lo tiene que llevar a la AFIP él

Protti: está bien

Serafini: le tiene que informar a AFIP el número de CBU para que le autoricen la boleto pero eso lo hace rápido, eso lo hacen al toque

...



*Poder Judicial de la Nación*

Protti: dale porque él me tiene que decir cuando va a poner la moneda, es fácil esto

Serafini: si, si, si

Protti: eh trata de arreglarlo para hoy asi cerramos todo de una vez boludo, que-  
res?

Serafini: bueno, bueno, dale

Protti: y acordate, acordate Lelio del otro muchacho también

Serafini: ahora lo voy ahora lo voy a llamar al boludo este del colorado que me  
que me traiga lo que faltaba

Protti: bueno y el otro viejo te acordas?

Serafini: eh?

Protti: el otro viejo te acordas?!

Serafini: cuál el otro viejo?

Protti: tu amigo, para presentarle un par de pibes más

Serafini: ah si, si, pero me tengo que reunir con él porque ese es más difícil que la  
mierda para encontrarlo viste

Protti: y bueno vamos a ver como, vamos a ver...

Serafini: primero vamos a darle a full a esto porque sino no hago una cosa ni la  
otra

Protti: bueno pero ya está todo hecho boludo, aparte falta que agilices los pape-  
les, nada más, una vez que nos juntemos con coso, vos te juntas conmigo, te da-  
mos los papeles y listo

Serafini: dale

Protti: y arrancamos boludo sino hace dos meses que estoy con esto, yendo y vi-  
niendo pa todos lados boludo

Serafini: bueno dale

Protti: todavía no vi un peso, vo... nos vemos".

También se destaca la conversación obrante a fs.  
102/103 del citado legajo, cuando al día siguiente, el 09.05.2017, Lelio Serafini  
hizo referencia a que se reunirían con Marcelo Liporaci "Chelo". En esa oportuni-  
dad, nuevamente, Hernán Protti se quejaba que al momento no habría recibido  
una contraprestación por su labor, cuando expresó: "el problema es que yo hace



dos meses que estoy dando vueltas y haciendo mandados para todos lados para esta gilada y y no se hace nada". A continuación, la charla en cuestión:

"Serafini: y a la tarde nos juntamos con el Chelo que yo ya hablé con él, me dijo que a la tarde, que lo llamemos, que así nos juntamos eh?

Protti: si esta bien, cuando vos terminas de hacer eso avísame que yo me acerco

Serafini: bueno dale dale

Protti: así charlamos nosotros un segundo, yo quiero hablar con vos

Serafini: bueno dale, dale, y cuando vos venis yo ya tengo preparado el ingreso bruto de los otros dos

Protti: bueno yo voy a tener los papeles arriba del auto así que espero que vos me avises

Serafini: no me hacen falta los papeles, yo tengo todos los datos aca

Protti: está bien pero tengo el CBU del muchacho este también

Serafini: ah si, si bueno

Protti: me entiendes? Pero no me esquives, no me esquives

Serafini: por qué te voy a esquivar boludo?! De verdad esto que te estoy diciendo, tenía que estar 9 y media del cardiólogo

Protti: está bien, está bien, si yo te creo

Serafini: tengo que salir de vuelo ahora, me agarraste justo que sal... y no te atendí porque primero llevé a la nena, después vine, me acosté un rato, después agarré me di un baño, me afeite y cuando va eh... y puse el teléfono a cargar, cuando agarro el teléfono tenía una llamada tuya

Protti: boludo, no me des explicaciones boludo

Serafini: no, te explico para que veas que no te estoy esquivando, si yo estoy más interesado en cobrar que vos

Protti: el problema no es ese, el problema es que yo hace dos meses que estoy dando vueltas y haciendo mandados para todos lados para esta gilada y y no se hace nada

Serafini: pero cuando arranque, que ya arrancamos, vas a ver. A mí también me interesa si yo también estoy pasando una mala situación con la plata boludo, tengo una deuda, me cortan de un, me cortan el teléfono de un lado, si no me cortan el teléfono me cortan el cable, la otra vez cortaron el agua, un quilombo tengo



## *Poder Judicial de la Nación*

Protti: amigo, yo no quiero hablar más por teléfono

Serafini: bueno

Protti: estamos (no se entiende) por teléfono, eh? Avísame cuando termines el trámite así me acerco, yo voy a estar por barrio belgrano

...

Luego, Hernán Protti continuó sus diálogos con Marcelo Liporaci, otro de los condenados como organizadores de la asociación ilícita tributaria, jefe de uno de los subgrupos. El testigo investigador Fernando Amante explicó que esas charlas se sucedieron luego que Lelio Serafini enfermara, de lo que se aprecia la continuidad del rol que desempeñaba Hernán Protti en el marco de la asociación. En tal sentido, del legajo de intervenciones telefónicas del abonado 341-5055433, perteneciente a Marcelo Liporaci, surgen conversaciones elocuentes. De la charla manenida el 21/05/2017, también reproducida en ocasión de la declaración del CP Fernando Amante, el testigo se refirió a ella. Expresó que se entiende cómo se cierra la inscripción de la gente y discuten si mandó o no las claves fiscales y que luego, con la clave del nuevo inscripto, le cargaba las actividades económicas, cosa que cuando venía el pedido tenían una gama de oferta disponible: "Lo hacía Lelio y Liporaci le tenía que decir, y se producía un teléfono descompuesto. Sabía que se estaba inscribiendo por plata, Protti sabía que iban a cobrar plata por esto". Para un mejor entendimiento de lo dicho, se transcribe el diálogo que se encuentra a fs. 413/415 del Legajo de Marcelo Liporaci:

"Protti: Hola

Liporaci: que haces Hernan?

Protti: Qué pasa Chelo?

Liporaci: Qué pasó?

Protti: no, no se, no tengo idea que pasó boludo, me llamó Lelio para decirme que vos le dijiste que no podía cumplir, no se

Liporaci: no, no, no, todavía no le cargamos ni las actividades Hernán a la empresa, yo te dije a vos, yo te dije a vos el otro día que me pases las claves, él me llamó, el me llamó los otros días y me dijo eh que actividades le ponemos, está?

Protti: te mandé, te mandé el mensaje con las claves y diciéndote

Liporaci: no tengo ningún mensaje yo



Protti: eh?

Liporaci: no tengo ningún mensaje yo

Protti: como no? Te mandé el mensaje a vos y le mandé el mismo mensaje a Lelio, y en el otro mensaje que te puse a vos te dije Lelio te va a llamar para pedirte las actividades y le pone las actividades. Esos son los mensajes, salieron los mensajes de mi teléfono al tuyo boludo, los tengo aca. Te los pase el mismo día a las 3 horas de que estuvimos juntas

Liporaci: bueno, yo no tengo ningún mensaje eh Hernán

Protti: si, es más, te puse confirmame, te puse Marcelo te puse confirmame si te llegó y a Lelio le puse lo mismo y Lelio me puso Ok

Liporaci: ¿y yo te lo confirme?

Protti: y no, que se yo, digo este no me lo, si sos despistado, me dijiste que eras despistado boludo no no me volví loco

Liporaci: no tengo, no no no, no tengo

Protti: le estoy diciendo a Lelio que también te llame... te los paso los mensajes si quieres. Me dijiste pasamelos rápido así empiezo a facturar y te los pasé

Liporaci: bueno los otros días me dice o al otro día, bueno no me acuerdo.

Protti: eso fue ayer

Liporaci: ah no me acuerdo cuando me llamó y me dice pásame las actividades, yo a SOL la armé, a SOL la armé. Vino acá a mi casa a buscar la hoja con todas las actividades armadas está? Y le digo la plata que le tenía que dar. Pero lo que pasa es que es día 21 ya, yo no puedo facturar, yo facture una banda ya, me entendes? Yo no la recupero a la plata. Igualmente no son muchos días los que hay que esperar pero yo te digo la verdad yo no tengo ningún mensaje Hernán eh, ningún ningún mensaje

Protti: boludo lo vemos, lo vemos, te lo mandé a la misma hora que Lelio el mismo día que nos juntamos. A las 2 de la tarde te lo habré pasado boludo.

Liporaci: está bien hay que cargarle las actividades, no se qué le cargo, no se si se las cargó.

Protti: sabes lo que me dijo recién?

Liporaci: qué?





## *Poder Judicial de la Nación*

Protti: pero loco esta es la que no me va boludo, me dice hable con aquel, me llamé recién que no va a poder cumplir, que no puede facturar, el chabón todavía no me pasó las actividades, me entendes? Un teléfono descompuesto al pedo boludo, si no tiene nada que ver, fui y le dije a los pibes bueno loco ya está, entre el, es más no le dije entre el 15 y el 20, les dije entre el 20 y el 25 cobran. Eh le fui a tirar la noticia a los pibes para que se queden tranquilos que me preguntaban a cada rato, me entendes? Entonces digo, si hable con Marcelo antes de ayer, me pidió que le pase lo que le tenía que pasar se lo pasé, ahora no entiendo nada porque me dice Lelio que vos no vas a poder cumplir, le digo pero me parece raro loco si el chabón me puede llamar a mí, cómo te llama a vos que no quiere cumplir, yo no entiendo

Liporaci: no, no, no lo que

Protti: es lo que hable con vos ayer o antes de ayer

Liporaci: lo que me dice, lo que me dice él es que las actividades que tengo que cargarle, recién anoche vino aca que me le di una plata y le di un papel con todas las actividades que tiene que cargar. Lo que le dije yo es que ahora se me acortan todos los plazos, imagínate del 1° de mayo a ahora cuantos días me quedan para facturar? Nada boludo! Como junto 100 lucas sin facturar nada Hernán, me entendés lo que te digo? Y fijate vos, eh si entras con la clave no hay nada facturado, no te hagas drama ey porque vos vas a tener la clave, me explico?

Protti: si pero yo no hablo de eso, hablo de que hice las cosas como me las pediste, hablamos una cosa, yo hablo en base a lo que hable con vos y quedo como un mogólico yo con la gente, yo quedo como un mogolico

Liporaci: bueno no, pero bueno no, yo te dije a vos que vos te pongas del lado mío Hernan. Vos explicale a la gente que no puede agarrar

Protti: estoy del lado tuyo boludo

Liporaci: bueno pero yo no facture nada Hernán, no facturé absolutamente nada, cómo hago en 9 días para hacer, yo te digo lo que te doy a vos es así. Son 500 lucas por cada tipo de IVA, cómo hago para facturar 2 millones en un coso, aparte que los destruyo a los pibes, en dos meses no existen más, me entendés. Los voy a reventar todos. En 9 días les voy a facturar 2 millones a 4 empresas? Ni en pedo boludo! 2 millones de pesos de IVA, tengo que facturar 10 millones, es mu-



cho Hernán, son pocos días. Armamos bien las cosas, no te calentes, habla bien con los pibes, después les tiraremos unos mangos que se yo, lo vemos, lo arreglamos, no te hagas drama (...)"

Se trata ésta de una conversación elocuente, que bien podría situarlo a Protti en un rol de mayor importancia al adjudicado por la Fiscalía General, porque incluso se lo puede observar a Protti con roles de instigación. Entiendo que pudo haberse tratado de una intervención de mayor significación, donde anticipo que no seguiré el razonamiento de la querella, ya que precisamente, su intervención se limitó a considerarlo como coautor, sin brindar ninguna precisión del motivo que hacía descansar su pedido.

Continuando con la participación de Protti, otro elemento de prueba a considerar resulta del ya reseñado informe de la AFIP, que analizó los elementos secuestrados tras los procedimientos llevados a cabo en la presente investigación. Concretamente, el del domicilio de calle Don Bosco 194 bis de Rosario, donde se incautó un talonario de factura de servicios Exprés de Hernán Gustavo Protti y dos duplicados de color verde. Consultado el sistema de la AFIP se verificó que el contribuyente Hernán Gustavo Protti no presenta dicha información. Del mismo modo, se realizó consulta en la base del fisco, régimen informativo de compras y ventas informado por un acreedor año 2016 y 2017 y sólo fue informada una factura A del año N°... de fecha 17/4/15 por un importe total de \$20.000. También el hallazgo de un talonario de facturas, constancia del contribuyente Protti, diario de IVA ventas, también un talonario de factura tipo A de servicios Exprés, un cuerpo de 34 fs., block de notas, donde autoriza a Serafini a actuar ante la AFIP en todo lo referido al impuesto al valor agregado.

Asimismo, dicho informe dio cuenta del hallazgo en calle Gorriti 342 de Rosario, oficio 3483 domicilio de Jorge Centeno, de cuatro talonarios de comprobante, factura tipo A, recibos "X", y notas de envío "X", todas en blanco sin utilizar que corresponden a distintos emisores. Uno de ellos, se trata de Hernán Gustavo Protti, con N° de CUIT y consultado en ese caso que observa que distintos compradores le informan facturas por compras al contribuyente de numeración coincidente con las facturas en blanco contenidas en dicho lugar.



## *Poder Judicial de la Nación*

En conclusión y dadas las pruebas señaladas entiendo que Hernán Gustavo Protti formaba parte de la asociación ilícita tributaria, por lo menos en carácter de partícipe secundario, en los términos propuestos por la Fiscalía General. Concretamente, su vínculo estaba relacionado con Lelio Serafini (fallecido) y con Marcelo Liporaci, que fue condenado como organizador de la asociación ilícita en cuestión, es decir que tenía directa relación con los eslabones de jerarquía. Su rol consistió en la inscripción de personas ante el organismo recaudador a los fines de la obtención de las claves fiscales, e inclusive, tuvo a su cargo la gestión respecto de la apertura de las cuentas bancarias de dichos sujetos. Con ello proveía a Marcelo Liporaci de nuevas usinas para la emisión de la facturación, para de este modo poder comercializar el crédito fiscal apócrifo que naturalmente surgía de compras espurias en base a documentación contable falsa.

### **c.- Fabián Edgardo Tosini:**

Fabian E. Tosini fue traído a debate oral como coautor del delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c de la ley 24.769) mediante la aplicación del art. 15 inc. a de dicha normativa, en razón de su profesión de escribano público, acusación que fue sostenida tanto por el Sr. Fiscal General como por la querella en el debate.

Ahora bien, de lo probado en el juicio, se ha demostrado que los servicios profesionales del Escribano Tosini fueron concertados exclusivamente a través de Marcerlo Miranda Cairo, que también había resultado condenado en la sentencia nro. 44/2021 como coautor del delito de asociación ilícita tributaria.

Este punto no ha ofrecido controversias dentro del debate. El propio Fabián Tosini en su declaración explicó cómo se habían conocido, porque fueron presentados por Rubén Meli, un ex compañero del colegio secundario, de donde también surgió cómo fue la prestación de los servicios profesionales por los que fue contratado. Del mismo modo, el testigo ofrecido por la defensa, Rubén Meli declaró en fecha 14/09/2023, donde ratificó que él fue quien le presentó Marcelo Miranda Cairo a Fabián Tosini. El testigo expresó que a Tosini lo conocía del secundario y que por cuestiones de la vida se separaron y que lo vol-

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



vió a encontrar por razones laborales. En tanto, respecto de cómo lo conocía a Marcelo Miranda Cairo, respondió que fue por circunstancias laborales, ya que “en una época trabajaba de comisionista. En su momento me ofrecieron un campo en Pergamino y un amigo me dijo que tenía un conocido que le podía interesar... se presentó como contador, era Miranda Cairo y nos encontramos en un bar... y después una vez tomando un café, me preguntó si tenía un escribano de confianza”.

Este testigo fue preguntado respecto a si conocía en qué lugar atendía Marcelo Miranda Cairo y su respuesta fue que en su casa, que quedaba en calle Paraguay entre Salta y Catamarca, primer piso, “en la parte del comedor tenía su estudio y tenía el título colgado en la pared”.

De modo coincidente Marcelo Miranda Cairo, que incluso compareció al debate a propuesta de una de las defensas, declaró con las limitaciones del art. 18 CN (por su particular situación procesal toda vez que resultó condenado en el fallo 44/2021 de este Tribunal, y que a la fecha se encuentran recursos pendientes de resolución). Manifestó que al escribano Tosini lo conoció a través de un conocido, el sr. Meli, que se lo recomendó como un escribano de su conocimiento. Durante su declaración fue preguntado respecto de la función que tenía Tosini y respondió que era la de certificar las firmas de las personas y nada más. Frente a esa respuesta, el Dr. Stramazzo con autorización del Tribunal dio lectura de un fragmento de su declaración indagatoria -prestada en instrucción-, que refería a las funciones de Tosini “para la constatación del domicilio y ahí terminaba su función”. Miranda Cairo ratificó esos dichos.

En su declaración Miranda Cairo también reconoció que Fabián Tosini le cobró por sus servicios y le extendió los recibos del caso; y frente a la pregunta relativa a si Tosini sabía del destino que se le daba a esa documentación, respondió “No. Nunca preguntó nada”.

En lo que respecta al análisis de las conductas desplegadas por Tosini, a los fines de fundar el decisorio volcado en el veredicto 70/2023, entiendo pertinente establecer en primer lugar que el imputado fue acusado a tenor de lo dispuesto en el art. 15 inc. a de la ley 24769. La ley establece en lo referido a la imputación: “el que a sabiendas: a) Dictaminare, informare, die-



## *Poder Judicial de la Nación*

re fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley...”.

Tal como lo explica la doctrina se ha establecido que en cuanto a los actos de intervención del profesional, “no se trata de cualquier caso de dictamen, información, acto fedatario, autorización certificación de actos jurídicos, balances, estados contables o documentación, sino sólo de aquellos en los que tal actividad se encuentra dolosamente desplegada con el objetivo “de facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley”, que vendría a ser un elemento ultraintencional contenido en el tipo subjetivo de la figura (congruencia asimétrica en consecuencia entre tipo objetivo y tipo subjetivo). El tipo no decide entonces la punición de las llamadas “conductas neutrales” es decir, de quien se limita a realizar su actividad profesional conforme a la *lex artis* y, sorpresivamente se encuentra con un desvío de su cliente, que utiliza aquel acto para perpetrar la evasión tributaria” (Riquert, Marcelo “Régimen Penal Tributario y Previsional” 2° edición actualizada Ed. Hammurabi, 2019, pág 248).

También se ha sostenido que “en sentido estricto, no se trata de un tipo penal autónomo sino de una previsión que actúa accesorariamente a un tipo principal” (Riquert cfr. “Cuestiones de Derecho penal (...)”, 2ª edición, Ed. Ediar, Bs. As., 2004, p. 61). En este sentido se explicitó que adicionalmente se trata de una figura eventual y de peligro concreto, que sólo cobra operatividad en la medida en que la conducta principal que se facilita ingrese en el marco de punición. En caso contrario deberá considerarsela un acto preparatorio impune” (Riquert, Marcelo “Régimen Penal Tributario y Previsional” 2° edición actualizada Ed. Hammurabi, 2019, pág. 249).

Volviendo al caso, se recuerda que en ocasión de sostener su acusación, el Sr. Fiscal General expresó en cuanto al dolo en lo que respecta a la intervención del escribano nacía de la convergencia de elementos indiciarios distintos. Entiendo que en el caso, ese análisis no alcanza para satisfacer las exigencias subjetivas y objetivas del tipo penal en análisis. Tal como se encuentra asentado en la doctrina y jurisprudencia, la primer fuente de interpretación de la ley es su propio texto, y en el caso de las normas contenidas en el art. 15 de la ley 24769, el legislador, le ha dado especial preponderancia al elemento subje-



tivo, iniciando el artículo en análisis la exigencia “el que a sabiendas” y luego de la enumeración de los verbos típicos, concluye “para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley...”.

En este sentido, se ha dicho: “La expresión a sabiendas nos brinda una pauta de un dolo directo, donde el autor debe conocer que está facilitando la perpetración de alguno de los delitos establecidos en los títulos I, II y III de la ley” (Manonellas, Graciela “Manual de Derecho Tributario” La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 251, citado por Etman, Gustavo “La Responsabilidad de los profesionales en el Régimen Penal Tributario, con especial análisis de la situación de los contadores” “Derecho Penal Tributario” Directores Echagüe y Sferco, Ed. Ad. Hoc, 2019, pág. 664).

Por lo tanto, “la exclusión del dolo eventual viene ratificada, además, por la exigencia de que la acción prohibida sea realizada para facilitar la comisión de los delitos previstos en la ley, tal como requiere el propio texto de la norma en estudio” (Etman, Gustavo, ob. cit.). Hemos visto cómo a diferencia de las personas tratadas por su participación en los considerandos previos, donde se ha detallado con suficiencia la realización de actos típicos, captados por la ley penal en orden a su punición, que aquí en cambio se presenta un contexto diverso, no solo desde lo cualitativo, en orden a la calidad de los actos cuya intervención fuese adjudicada al escribano, sino también en cuanto a su cantidad, que resultan desde mi punto de vista insuficientes para pensar que se encuentra reunido el tipo penal adjudicado, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos.

Partiendo del estudio de la prueba ofrecida en torno al elemento subjetivo exigido por el tipo penal, entiendo que Fabián Tosini no podía conocer ni se demostró que tuviese conocimiento de que con sus servicios profesionales estuviese contribuyendo a las actividades de la asociación ilícita tributaria. En efecto, el dolo -en el caso conocimiento por parte del escribano relativo a que dichas piezas serían utilizadas ulteriormente con un fin delictivo- no pudo ser probado.

No existen conversaciones telefónicas en las que Tosi- ni haya participado, como tampoco existen menciones vehementes en las intervenciones telefónicas llevadas a cabo sobre los distintos abonados investigados.



## *Poder Judicial de la Nación*

Tampoco se han secuestrado elementos de cargo en el registro domiciliario sobre sus oficinas (v. acta de fs. 1204/1205). En cuanto a los diálogos telefónicos, la única mención señalada por los acusadores como incriminantes en orden a su situación, fue la entablada entre Marcelo Miranda Cairo y Matías Rete. En ella expresaban que tendrían que terminar de preparar el papelerío para “ir con Molina de Fabián...que pone los ganchos”, o el hecho de que tendrían que ir “de Fabián a certificar más cosas” (v. llamadas transcritas a fs. 10/11 del legajo del abonado 341-3491451 atribuido a Marcelo Miranda Cairo, de fecha 3/05/2017 y a fs. 15/17 del mismo legajo, de fecha 5/05/2017).

Si bien Amante afirmó que “Fabián” se trataba del escribano Tosini, también el inspector fue interrogado por el Dr. Walter Stramazzo. En concreto, si de todas las voces que escuchó en el marco de las intervenciones telefónicas, escuchó la voz de Tosini, respondió que no. Cuando esa defensa le preguntó si conocía el listado de abonados interceptados, su respuesta fue “de los principales”, y al serle requerido que indique si alguno de ellos era Tosini, volvió a responder de manera negativa. Es decir que el propio investigador, cuya tarea de pesquisa sirvió para consolidar la imputación de gran parte de los aquí acusados, fue el que no pudo decidir algún elemento puntual de orden incriminante con relación a su intervención. En su momento, la defensa del escribano durante los alegatos, había sostenido para graficar la escena, que mientras el testigo Amante se desenvolvía como pez en el agua cuando era preguntado por los acusadores, cuando lo hizo la representación de Tosini se volvió monosilábico y olvidadizo. Por lo tanto, una primera conclusión en ese orden, viene dada desde la propia investigación, ante la fractura del relato que venía dando el inspector cuando le tocó referirse a Tosini.

Continuando con el análisis de las escuchas, de la correspondiente a fs. 12/14 del 17/05/2017, se pudo observar cuando Miranda Cairo le expresaba a Rete: “me voy a tirar el lance con dos servicios porque así no le pago a este que me cobra \$ 1.200 cada constatación”. Se trata ésta de otra advertencia en orden a ponder el contexto de la intervención del escribano, porque evidentemente se trataba de una persona que cobraba honorarios altos, lo que no se compadece con una estructura organizativa del orden por el que han sido con-



denados sus consortes procesales. Es decir que al menos desde mi punto de vista, lo elevado de sus honorarios debe ser visto de manera inversamente proporcional a la de su intervención delictiva.

Los acusadores también hicieron referencia en su momento que las expresiones de Miranda Cairo en la conversación transcrita a fs. 15/17 del legajo correspondiente a ese abonado telefónico, individualizada como B-11016-2017-05-05-155423-6 de fecha 5/05/2017, resultaban al menos sospechosas. Allí refería que iba a hacer guardar unos folios, en referencia al escribano, pero lo cierto es que se trata de meros dichos de terceros que no fueron comprobados a través de otras exteriorizaciones fácticas.

Dentro de la actuación de los diferentes partícipes, pudo observarse cómo a tenor de las características de esta asociación ilícita investigada, se presentaron elementos que han dado cuenta que los dos subgrupos que la conformaban tenían cierta estabilidad en el tiempo y una clara limitación en sus funciones. De allí que se haya permitido el juzgamiento del grupo, por la presentación de elementos característicos al tipo penal. En cambio, la actuación de Tosini no puede observarse con una voluntad asociativa, precisamente porque se trataba de un desconocido dentro de la estructura asociativa, solo relacionado con Miranda Cairo y respecto de constataciones de domicilio de tres sociedades. Pero además, la reconocida circunstancia de que Fabián Tosini haya cobrado por sus funciones y de una manera que llevó a la queja de otro de los intervinientes, coadyuva a interpretar como se dijo, que no podía formar parte de dicha asociación.

En cuanto a las convergencias que deben presentarse en orden a la voluntad asociativa, se ha sostenido que la asociación “reclama la voluntad de saberse realmente perteneciente al grupo y ser aceptado por todos los restantes”. De este modo, se ha señalado que “la actuación del profesional debe estar necesariamente encaminada a la realización de los planes criminales, donde el dolo de su obrar no puede quedar acreditado con el conocimiento probable de que los actos ejecutados al amparo de las normas profesionales vigentes sean luego utilizados para “completar” actos ilícitos” (Ruetti, Germán J. “La asociación ilícita del Código Penal, los delitos tributarios y la nueva tipificación especial de la ley Penal tributaria” LL, ejemplar del 15/03/2004, página 6, citado por





## *Poder Judicial de la Nación*

Marcelo Riquert en “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Dirección David Baigún – Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 518”).

Si ingresamos al análisis de la tipicidad objetiva, también podremos observar algunas fisuras para su reunión típica. En primer término, cabe recordar lo expresado por el testigo Jorge Arévalo al distinguir el acta notarial de las escrituras públicas. Señaló que en lo que respecta a las actas notariales, ellas tienen por objeto la comprobación de hechos, con la sujeción, en sus formalidades a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación y a las leyes orgánicas y agregó “es la gran diferencia con escrituras públicas es que no tiene por objeto la comprobación de actos jurídicos”.

Adicionalmente, corresponde establecer que se ha entendido como acto jurídico “toda conducta voluntaria lícita de las que emergen consecuencias jurídicas entre las partes, capaz de crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos” (Manonellas, Graciela N. “Manual de derecho penal tributario, pág. 251” citado por Bertazza, Humberto J., director “Régimen Penal Tributario Comentado” ed. La Ley, 2020, pág. 143).

En el caso de autos, la intervención del escribano Tosi- ni no tuvo en cambio por objeto la comprobación de actos jurídicos, porque su intervención se redujo a la constatación de domicilio de algunas empresas y otras meras certificaciones de firmas. En orden a esto, el testigo Jorge Arévalo, también escribano, a instancias de las preguntas de las defensas, se explayó en relación al valor de las actas notariales, que gozan de carácter de instrumento público, ello, tras una evolución normativa y hoy en día, sostuvo se encuentra zanjado los arts. 310, 311, 312 del CCCN. Sostuvo así que el acta notarial tiene por objeto la comprobación de hechos, que es la gran diferencia con las escrituras públicas, es decir que no tienen por objeto actos jurídicos, sino que son hechos o situaciones. Tiene que existir un requirente, como en todo acto notarial, es indispensable el requerimiento, nunca el escribano puede actuar de oficio, es la gran diferencia con otros funcionarios públicos.

En relación a las actas exhibidas, relacionadas con la intervención de Tosini, el testigo Arévalo dijo: “Más que comprobar el domicilio, presenta la manifestación de que una sociedad tiene un domicilio en determinado



lugar y, como ahí narran las actas, ahí se exhibe el detalle del mobiliario y la existencia de documentación relativa a la existencia de esa sociedad.” El testigo expresaba que entendía que eso “se hacía a los fines fiscales” y concluyó, “escribano tomó las manifestaciones y se atuvo a la documentación que se le exhibió”. Es cierto que puede pensarse que se ha tratado en definitiva de un testigo propuesto por la defensa del propio escribano, pero sin embargo, más allá que su versión podía pensarse como inclinada al favorecimiento de su posición, su testimonio se observó en general como objetivo, donde incluso ofreció una bibliografía de su obra que responde según manifestó al pensamiento expresado en audiencia.

Si se piensa en términos adversariales, cabe recordar que también fue preguntado por los abogados de la parte querellante en relación a los espacios en blanco existentes en las piezas notariales, a lo que el escribano Arévalo respondió explayándose sobre del grado de confianza que hay en los requirentes, pero que su existencia no puede invalidar el acto.

El escribano también fue interrogado por el Sr. Fiscal General en relación a su conocimiento de la resolución de la UFI 21/2011, frente a lo que el testigo respondió que si mal no recordaba tenía que ver con el deber de denunciar en determinados casos toda operación que se considere sospechosa y proveniente de sujetos políticamente expuestos y siguió diciendo que el escribano es una de las personas que debe verificar los orígenes de la licitud del dinero que se usa en la adquisición de bienes, incluso pudiendo requerir respaldo contable.

El Sr. Fiscal le preguntó si ese deber de información es sólo respecto de las escrituras o si también involucra a las actas notariales. El testigo respondió que las actas receptan hechos, no actos jurídicos, aunque entendía que si habría hechos de los que se puede desprender una irregularidad, por ejemplo en cuanto al origen del dinero utilizado, el escribano estaría obligado a formular las denuncias ante la UIF. A la pregunta formulada por el Acusador Público en cuanto a si recordaba si en esa resolución, en el art. 19, se obligaba a informar la constitución múltiple de una sociedad con mínimo de socios, mínimo de capital o mismo domicilio, respondió que no lo recordaba dado que hacía tiempo que no ejercía y no estaba actualizado en la normativa.



## *Poder Judicial de la Nación*

Se podía advertir entonces que la estrategia del fiscal también pretendió relacionar con sentido incriminante la actuación de Fabián Tosini, con su alegada obligación incumplida en cuanto al deber de los escribanos de ajustar su conducta a las disposiciones de la resolución de la UIF 21/2011. Es decir en cuanto a su deber de poner en conocimiento actividades sospechosas que conozcan en el ámbito de su actividad profesional. Es que dentro de ese esquema relativo a que las certificaciones de domicilios de las empresas “Intermedios y Publicidad SRL”, “Quirotex Instrumental SRL y “Transport & Carriage SRL”, tres constataciones relativas a diferentes empresas en el mismo inmueble, sito en calle Paraguay 239 1° piso de Rosario, el actor público creía ver razones que evidenciaban motivos suficientes para pensar que además el escribano tendría que haber denunciado ese aspecto como una actividad sospecha, que debía ser puesta en conocimiento de la UIF.

Para ponderar esta valoración, resulta pertinente memorar cuáles son los antecedentes que rodearon dichas intervenciones, aspecto que se erigió como un esquema decisivo para la fiscalía para tener por probada la vinculación del escribano a la asociación ilícita. Se recuerda que durante los alegatos la fiscalía había sostenido en cuanto a la existencia de las constataciones de domicilio un aspecto medular, donde incluso lo comparó como un sistema de valoración de prueba basado en un esquema de prueba legal o tasada. Sostuvo entonces en relación a ellas que una constatación de ese orden podía ser atendible, que dos se trataba ya de una negligencia, pero que tres, eran compatibles con dolo.

En su momento el escribano Arévalo había sostenido cuando fue preguntado por ello que más que comprobar el domicilio, lo que se comprueba es la manifestación de que una sociedad tiene un domicilio en determinado lugar, conforme lo narran las actas, además del detalle del mobiliario y de documentarion relativa la sociedad en cuestión. El testigo entendía que eso podía hacerse así a los fines fiscales porque los domicilios societarios pueden encontrarse en otro lado, es decir que otro profesional observaba que de acuerdo a los usos y costumbres, puede resultar una asimetría entre domicilios legales y luga-

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



res de funcionamiento efectivo, especialmente dado el lugar donde se hizo esa constatación.

En su momento la defensa había propuesto una prueba instrumental, cuya introducción por lectura no fue cuestionada por las partes y no consideraron necesaria producir prueba testimonial en orden a los hechos allí invocados. Se trataba de la respuesta remitida por el Registro Público de Comercio, agregada a fs. 293 de los autos principales. En esa pieza, la Sra. Secretaria del Registro de Procesos Universales, Dra. Di Paolo, informó que "...según lo establecido por la ley 26.994 -Código Civil y Comercial de la Nación- art. 152 y normativa relacionada, no existen impedimentos para inscribir sociedades en el mismo domicilio o sede social. Este Registro inscribe y notifica a la UIF esta situación en cumplimiento de la Resolución UIF 29/11 art. 10 y Resolución UIF 70/11 art. 11".

Podría tratarse entonces de una práctica usual, o al menos, no prohibida por la ley, por lo que entiendo que esto diluye las sospechas señaladas por la Acusación en este sentido. Para ello tengo en cuenta otros antecedentes que necesariamente deben reflexionarse en orden al caso. En primer término, la constatación de domicilio en tres oportunidades, en calle Paraguay 239 1° piso de Rosario, se emplaza en una zona céntrica y comercial de la ciudad de Rosario. Se trata de un lugar que incluso se encuentra a pocas cuadras de la Bolsa de Comercio de la ciudad y de numerosas entidades bancarias, como así también estudios contables y jurídicos, es decir situado en el microcentro comercial de la ciudad.

Todo ello impone aceptar que el escribano Tosini se encontró con cuadros situacionales que no debieron necesariamente despertar una mayor atención o sospecha, en el marco de los servicios profesionales que estaba brindando, sobre todo porque era contactado por otra persona que alegaba ser un profesional de la ciencias contables. También debe observarse que el número de constataciones en el mismo domicilio, que no fueron exageradas, lleven a pensar que el profesional debía conocer la finalidad ilegítima que en ese momento tenía pensada Miranda Cairo.

En orden a ello, cabe traer a colación lo que se conoce como el principio de confianza que puede referenciar la actuación del escribano. Él



## *Poder Judicial de la Nación*

puede definirse como aquel por el que “se autoriza a confiar en el comportamiento correcto de otras personas, por lo que no corresponde imputar los resultados generados a quien obró, confiando en que otros se mantendrían dentro de los confines del riesgo permitido” (Righi, Esteban “Derecho Penal. Parte General”, 2 da. Edición, Ed. Abeledo Perrot, 2019, pág. 230). Y si bien es cierto que la función notarial exige mayores recaudos a la hora de realizar las prestaciones profesionales, en orden a la fe de la que el Estado inviste su actuación, entiendo que ese deber de cuidado no se vio conculcado en virtud de la naturaleza de los actos que llevó a cabo el escribano Tosini. Entiendo que los aspectos deben ser analizados de manera conglobada porque también encuentran dudas en cuanto a la tipicidad objetiva de su actuación, ya que la disposición exige la certificación de actos jurídicos, cuya naturaleza debe ser interpretada de manera restrictiva, donde además, se advierte que ha sido puesta en duda luego de la prueba reunida.

No se trata entonces de cualquier acto, dictamen, información, acto fedatario, autorización o certificación de actos jurídicos, balances, estados contables o documentación, sino solo de aquellos en que tal actividad ha sido dolosamente desplegada con el objetivo de “facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley”, que vendría a operar como un elemento ultraintencional contenido en el tipo subjetivo de la figura.

En este sentido se ha expresado la doctrina especializada en el sentido de que la adecuación típica “...no consiste en la punición de las llamadas ‘conductas neutrales’, es decir, de quien se limita a realizar su actividad profesional conforme la *lex artis* y, sorpresivamente, se encuentra con un desvío de su cliente, que utiliza aquel acto para perpetrar la evasión tributaria”. En el sentido indicado también se explayó la Sala II de la Cámara Federal de Casación, referida por Riquert en la misma cita, el caso “Krochnik”: “sólo se puede hablar de conductas neutrales, profesionalmente adecuadas o meramente estereotipadas, en supuestos donde aquéllas no están inicialmente integradas a converger mediante acuerdo previo en una finalidad ilícita” (v. Riquert, Marcelo A., “Régimen penal tributario y previsional”, 1ª edición, Ed. Hammurabi, 2012, p.230/231).



Es decir que la adecuación típica propuesta por las acusaciones parte de una debilidad en cuanto a los aspectos objetivos, lo que incluso llevó a la fiscalía a considerar como prueba de este suceso, supuestas transgresiones a la ley de lavado de dinero por no haberse puesto en conocimiento de la UIF constataciones múltiples que debieron comunicarse a dicho organismo. Sin embargo, esta intelección también puede observarse desde otra óptica, donde reflexionemos que si el Estado a través de sus organismos de recaudación como pueden pensarse tanto a la Afip como a la UIF, tampoco decidió el inicio de actuaciones para investigar esa conducta, una vez que se inició la investigación fiscal, no puede pretenderse luego colocar dicha inacción estatal en cabeza del escribano. Para ponerlo en otros términos, si cuando el Estado tomó conocimiento de la posible omisión, aún así no inicio una investigación ante posibles responsabilidades de lavado, no podemos pensar que la intervención del escribano se trató de un descuido que debía despertar sospechas en orden a ella.

Por ello he estimado al principio del título que las debilidades de la acusación en este orden, no solo presentaban fragilidades en cuanto a la calidad de las constataciones del escribano, sino que tampoco correspondía reflexionarse sobre la existencia de una ilicitud desde un esquema cuantitativo. Entiendo en cambio que estas insuficiencias en cuanto a la tipicidad objetiva contemplada en el art. 15 inc a de la ley 24.769, deben ser complementados con lo ya dicho en torno a la ausencia de conocimiento respecto de ilicitud de la finalidad corroborada con posterioridad, porque se encuentra amparada al menos aquí, bajo los parámetros del principio de confianza antes examinado.

En otros términos no pudo demostrarse que Tosini estuviese en condiciones de conocer que las piezas actuariales que confeccionaba podrían tener la finalidad de ser utilizadas para la constitución de sociedades apócrifas con el objeto de emitir facturas de la misma índole. Por ello es que entiendo que el entramado de indicios presentado por el señor Fiscal en sus alegatos, característico de otras intervenciones que recibieron pena, no prueban aquí la existencia de ese conocimiento por parte del profesional.

Lo hasta aquí dicho en relación a la figura del art. 15 inc. a de la ley 24.769, especialmente lo sostenido en relación al dolo, resulta tras-



## *Poder Judicial de la Nación*

ladable a la exigencia subjetiva del art. 15 inc c de ese cuerpo normativo, en cuanto requiere “formare parte de una organización”. Lo afirmado no establece una relación de causalidad entre ambas figuras, entre las que media una relación concursal que tampoco ha sido explicada en el caso, pudiendo observarse un concurso formal de las figuras, ya que la intervención en los términos del inciso “c” puede ser considerada en función de la actuación profesional del inciso a). Más allá de ello, no se ha exteriorizado ni el dolo requerido por el primer inciso del artículo en trato, como tampoco el exigido por el último.

Concretamente, y en lo que respecta a la asociación ilícita “el dolo no consiste solamente en la conciencia y voluntad de aprobar aquella contribución requerida por la norma incriminadora, sino en la conciencia de participar y contribuir activamente a la vida de una asociación, donde los socios, con igual conciencia y voluntad, convergen a tal contribución, como parte de un todo, a la realización del programa común (Buompadre, Jorge E.: “Derecho Penal. Parte Especial” - Ed. Mave - Buenos Aires - 2000 - T. 2 - págs. 367/374).

Para terminar el punto, cabe finalmente destacar que conforme lo evidenciara la defensa, existió otra falencia investigativa tras la resolución de la Cámara Federal del 29/12/2017, que había revocado la falta de mérito dispuesta en su momento en relación al escribano. No obstante, en esa resolución se había ordenado profundizar la investigación respecto del escribano Tosini, no obstante que ello no se cumplimentó. Incluso, desde ese momento no se incorporaron nuevos elementos de cargo, lo que no fue obstáculo para que igualmente se elevara la causa a juicio a su respecto, incluso ante esa circunstancia.

Por todo lo expuesto, considero que las conductas desarrolladas por Fabián Edgardo Tosini y que fueron objeto de su indagatoria y acusación, resultan atípicas, motivo por el cual se ha determinado su absolución, tal como fue oportunamente dispuesto.

### **d.- Ana Paula Sappa:**

En ocasión de los alegatos, el Sr. Fiscal General desistió de su pretensión punitiva a su respecto, por el beneficio de la duda (art. 3 CPPN). En tanto la querella, mantuvo la acción en su contra, acusándola como coautora del delito de formar parte de la asociación ilícita tributaria por haber de-



sempeñado la función de impresión de las facturas apócrifas para el subgrupo formado por Liporacci, Centeno y Serafini.

El veredicto absolutorio se ha fundado en el disenso con la pretensión punitiva del querellante, la que anticipo, estimo de un valor relativo dado el modo en el que fue presentada, mayormente a través de su lectura textual, que no ha servido para ponderar no obstante el razonamiento para considerar a Sappa como coautora que debía responder por una penalidad tan excesiva. Al respecto, sostengo sin embargo que dicho acto constituyó igualmente una acusación válida, porque permitió que los imputados pudieran ejercer plenamente su derecho de defensa frente a tales conclusiones. En su momento las defensas se opusieron a que continuara la lectura integral de los esquemas de las querellas, petición que el tribunal aceptó por cuanto el código ordena una forma oral de expresión.

Esto no invalida el acto acusatorio como se anticipó, pero relativiza la fuerza de convicción del alegato. No me considero obligado a seguir aquí la petición de condena de la Afip porque no comparto las razones que decidieron a pronunciarse de ese modo, ya que su razonamiento no ha sido conteste con el desenvolvimiento de Sappa dentro de la sociedad, que se la utilizaba para tareas menores y sin ningún poder de decisión.

En su momento la Dra. Jimena Sendra, solicitó la remisión de actuaciones porque la querella no se había manejado con la perspectiva de género que ameritaba el caso. Entiendo como ha sido puesto de relieve en una infinidad de ocasiones, que no corresponde al tribunal acompañar las peticiones de las partes, al menos las que se encuentran autorizadas a realizar motu proprio sin la necesaria intervención de esta instancia. No concuerdo con que la orfandad de argumentaciones lleve necesariamente a ponderar las cosas del modo que lo ha petitionado la defensa, sino que la falta de razonamiento desobliga en todo caso al tribunal a evaluar los motivos expuestos por la querella y por ello seguiré en el caso el temperamento adoptado por la Fiscalía General en cuanto a que Ana Paula Sappa debía ser absuelta, como finalmente fue decidido.

Discrepo sin embargo con el desarrollo del fiscal en orden a que ha petitionado la absolución por la duda, donde en cambio entiendo





## *Poder Judicial de la Nación*

que su absolución corresponde de modo directo. En efecto, de las conversaciones telefónicas referidas por la querellante, ha demostrado una persona con la falta de experticia como la evidenciada por Ana Paula Sappa no reunía los elementos típicos exigidos por el delito de asociación ilícita tributaria.

En la conversación identificada B-11010- 2017-05-19-184425-31 obrante a fs. 153/157 del legajo de Jorge Centeno referido mencionó concretamente su función que: "...los chicos me ayudan... después la tengo a Paula que imprime todo lo que hizo...Paula imprime...". Y de las demás conversaciones telefónicas surgen razones suficientes para su desvinculación con el accionar ilícito de la asociación. Así, de la transcripta a fs. 139 del legajo del Abonado 3416295663, perteneciente a Jorge Centeno, de fecha 19/05/2017 se aprecia lo dicho, cuando ante un ofrecimiento de Paula Sappa, este le responde: "no podes, ya está visto lo que vos hacés...", reconociendo el mismo en otro diálogo que la única función de Paula es imprimir (fs. 156 del referido legajo, conversación de fecha 19/05/2017).

Sappa: dale y sino fijate si puedo ir a armar yo los mails lo saco yo al trabajo que haya, si ya aprendí

Centeno: no, no, no podes Pauli, no podes... ya está visto lo que vos haces, no, no podes armar los mails, no los podes armar

Sappa: bueno

Centeno: y después para armar los mails tenes que estar con Matías, me entendés? Y Matías ya no va a estar me entendés? Matías ahora le está enseñando a Lucas para armar el... el... como se llama? Para manejar la ticketera y para algunas cosas de ahí de la máquina porque ahora al no estar Matías lo voy a necesitar a Lucas. Lucas la tiene re clara con la computación, pero está también muy limitado con los horarios viste, todo quilombo es... pero después hablamos bien Paula, quedate tranquila, yo te llamo a la tarde

Sappa: dale

Y la de fs. 156 del referido legajo, conversación de fecha 19/05/2017 entre Centeno y el llamado "Leito":

"Centeno: no, no, no, los chicos me ayudan... Matías me ayuda, Matías estuvo todo el día hoy, no, no... hoy si no hubiese sido por Matías tenía un quilombo bár-



baro, me dio una mano Matías, Rodrigo apareció a las 4 de la tarde, después la tengo a Paula que imprime todo lo que hizo Rodrigo

Leíto: Rodrigo quién es? Es tu hijo?

Centeno: no, Rodrigo es el que arma todos los diseños y todos los archivos, Paula imprime y Matias cuando Rodrigo no está me da una mano en los papelitos que vos tenes y en el armado de los diseños...”

También las conversaciones identificadas como B-11008-2017-05- 24-182525-1 Y B-11008-2017-05-24-210654-1 obrantes a fs. 451/453 y 455 del legajo de intervenciones telefónicas correspondiente al abonado utilizado por Marcelo Liporaci dan cuenta que Paula Sappa tenía funciones administrativas básicas, sin conocimientos específicos para la realización de otras actividades propias de tareas que sí eran llevadas a cabo por otras personas que también emplearía la organización.

A continuación se transcribe el diálogo indicado a Fs. 451/452 de fecha 24.05.2017 entre Liporaci y Centeno.

“Centeno: chelito

Liporaci: ey gordo

Centeno: si

Liporaci: escucha

Centeno: a ver decime

Liporaci: terminaste?

Centeno: qué cosa?

Liporaci: la factura C

Centeno: no, no... estoy laburando con lo de... Fabian boludo, \$270.000 de IVA boludo, tengo 1,2,3,4,5,6,7,8, 10 empresas, 10 empresas 6 facturas cada uno, eh?

...

Liporaci: es una sola factura C

Centeno: si lo que pasa que yo estoy con Paula, no estoy con Lucas ni con Matías ni con Rodrigo, nadie (abrí el correo Pau)

Liporaci: bueno escúchame



## *Poder Judicial de la Nación*

Centeno: (abrió el correo) esperá, déjame verlo, como me lo pediste? Como esta, como está pedido el laburo?

Liporaci: está detallado ey

Centeno: para, eh...

Liporaci: Dame con Paula, dame con Pauli ya

Centeno: no, no, no pará, pará boludo, pará ehh, hace de cuenta que una pared ehh...

Centeno: (naa estaba debajo de todo Paula, la re puta...) Paula está de novio me parece...

Liporaci: no, no me digas

Centeno: si, si, si porque ehhh (se escucha voz femenina de fondo)

Liporaci: me deprimó la concha de mi hermana

Centeno: (habla con Paula: pará, pará, soli eehhhh, pedido veinti, fijate si hay un pedido número veinticinco ahí, fijate ahí que figura como un número, fijate para abajo a ver un poquito, eh ponete las pilas ahí está listo, ahí está, realizar alambrado perimetral, colocación de postes y varillas, 8 hilos, alambrados, \$23.000)..."

En algún momento su defensa sostuvo que su situación debía ser vista con perspectiva de género dada la existencia de alguna conversación donde se evidenciaba algún maltrato, circunstancia que debió ser ponderada por el acusador privado. Sin embargo y más allá de que su razonamiento puede llevar razón, esto para el supuesto de que el tribunal entienda la situación en función de una condena, que sin embargo, como se vio, su situación dista de encontrarse en ese contexto. El tribunal advierte que Ana Paula Sappa no realizó conducta típica alguna. En este sentido, no se ve presente elemento volitivo alguno que se haya exteriorizado a través de la mera actividad de imprimir facturas, sin perjuicio que la causante supiera que se trataban de facturas, por lo que ese escueto conocimiento no complementa la exigencia de dolo requerido por el tipo.

En efecto, las complejas maniobras descriptas en el presente juicio, como aquel llevado a cabo en el marco de la primera elevación parcial, han requerido necesariamente de una experticia muy superior a la que Ana Paula Sappa, hubiese podido tener, en especial en función de su edad al momento de los hechos. Todo ello también debe ser examinado en función de la ex-



perencia de vida reunida en aquel entonces -conforme ella misma lo ha relatado- y sobre todo la función asignada por el propio Centeno, que se reducía a realizar impresiones simples, con una periodicidad de un par de días por semana y durante un espacio de pocos meses.

Por ello, considero que los actos desarrollados por Ana Paula Sappa no reunieron los elementos típicos necesarios a los fines de quedar comprendidos en la normativa penal tributaria, lo que decidió su absolución.

### **3. Calificación legal**

Acreditadas las intervenciones del caso en función del objeto de acusación ventilado durante la audiencia de debate, como así también la intervención responsable de Omar Pazzi y Gustavo Protti, corresponde verificar el encuadramiento legal de sus conductas.

En función de los hechos descriptos precedentemente, corresponde calificar la conducta atribuida del condenado Omar Antonio Pazzi en la figura de asociación ilícita tributaria prevista y penada en el art. 15 inc. c de la ley 24.769 –texto legal conf. Ley 25.874-, en el carácter de autor organizador de dicha asociación y Hernán Gustavo Protti en el carácter de partícipe secundario de tal delito.

#### **a- La asociación ilícita tributaria**

Esta figura ha sido incorporada al Régimen Penal Tributario por la ley 25.874 (BO. 22/1/2004). Concretamente, el inciso c del artículo 15 del texto legal que se analiza dispone que: *“El que a sabiendas: (...) c) Formar parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley, será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a diez (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevara a cinco (5) años de prisión”*.

Frente al abanico de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales tanto en orden al bien jurídico tutelado por la norma como en cuanto a su carácter autónomo, así como respecto de los requisitos del tipo penal objetivo y subjetivo –tópicos que fueron desarrollados en el presente debate de



## *Poder Judicial de la Nación*

modo diverso por los acusadores penales-, considero que el reproche penal en trato responde a los conceptos jurídicos que a continuación se exponen.

### **b.- Bien Jurídico protegido**

Coincido con lo sostenido en la descripción normativa efectuada en el fallo 44/2021 de este Tribunal Oral en cuanto a que la figura en análisis responde a la tutela del bien jurídico tutelado hacienda pública. Dicha tutela se concreta por medio del adelantamiento de la punibilidad de algunos aspectos con el objeto de evitar la producción del resultado, la afectación de la hacienda pública. También considero apropiada la visión de pluriofensividad sostenida por algunos autores, que mencionan como bien jurídico protegido inmediato el del régimen especial y como mediato el orden público (Fabris, Pampliega y Marceillac entre los primeros; Robiglio y Cesano entre los últimos, todos citados por RIQUERT; Marcelo en “Régimen Penal Tributario y Previsional - 2ª Edición Actualizada, p. 268/270).

Asimismo la jurisprudencia ha sostenido que “este tipo penal es pluriofensivo, protege la perturbación del orden público que cualquier asociación ilícita acarrea y también el perjuicio final de recaudación de rentas que afecta a la sociedad en su conjunto”. (Fallos CNPE, Sala B reg. 503/06; C. Fed. Cord. Sala B, exte. 273/08 “Averiguación evasión impositiva”, CNCP, sala I “Palacios Alberto s/ Rec. Casación” 19/2/07; CN Penal Económico, sala B, ir re “Real de Azua, Enrique s/ Rec. Casación- del 21/12/2006, así también el mismo tribunal, sala IV reg. 5138 “Bernasconi; CNCP, Sala I, 19/02/2007 “Palacios”; Idem CNCP Económico, sala A, reg. 554/06 “Viazzo R.G. del 21/07/06, entre otros).

Entiendo que este entendimiento resulta una consecuencia de la decisión del legislador que previno sobre la emergencia de la ley, cuyo destino era una protección completa sobre el control fiscal y en ese sentido su sanción buscaba conectar y sancionar a todos aquellos que se organizan para burlar el sistema tributario.

Además, estamos frente a un delito de peligro abstracto, en donde el legislador ha considerado “...que la acción en sí ya constituye un peligro para el bien jurídico, aunque no se acredite que lo haya corrido efectivamente...” (Creus, Carlos; “Derecho Penal Parte General”, 5ta. Ed. actualizada y



ampliada, Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 161/162). Es decir que, el tipo describe una conducta que por su sola comisión representa un peligro al bien jurídico protegido (conf. Righi, Esteban, “Derecho Penal. Parte General”, 1era. Edición. LexisNexis, Buenos Aires, 2007, pag. 163).

En efecto, la doctrina especializada ha señalado que la razón de ser de la figura en análisis se enfoca en que *“la conformación de una asociación ilícita genera una mayor peligrosidad por tratarse de crimen organizado, cometido en grupo, con ánimo de reiteración, que son calidades que en principio dificultan la persecución y la debida represión –en sentido técnico-, además de tener un mayor potencial lesivo, y generar alarma no solo por los delitos cometidos, sino por la indefinición de los que eventualmente puedan cometerse en el futuro”* (ROBIGLIO, Carolina “Algunas reflexiones acerca de la asociación ilícita en relación a los delitos tributarios y el dolo”, en el sitio web de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales [www.aaef.org.ar](http://www.aaef.org.ar)).

Y, en el mismo orden se expresaron los tribunales del país, al sostener que *“...la alegada irrazonabilidad del tipo penal por adelantamiento de la punición, con fundamento en la falta de afectación o lesión a un bien jurídico, y por su indeterminación, no puede ser atendida. Los delitos que la organización hubiera cometido y la forma concursal no impiden la penalidad por el peligro concreto a la tranquilidad y la paz social... es decir que... no se trata de un injusto de preparación sino de injusto parcial de una perturbación de la paz social. En este sentido, para considerar que el medio empleado resulta constitucionalmente admisible, en tanto no lesione el principio de reserva previsto en una concepción liberal del Estado, se debe probar en el legajo no sólo el acuerdo social, sino los planes, la estabilidad y permanencia, y que pueda causar un peligro a la sociedad...”* (CCCF, Sala V, 74181/15/5 “PÉREZ ÁLVAREZ, John Essex y otros s/ procesamiento” del 31/08/16).

En efecto, considerar la figura bajo análisis como un delito de peligro abstracto implica que su comisión no requiere una efectiva lesión al o a los bienes jurídicos tutelados, cualquiera sea la postura que se adopte al respecto. Por el contrario, la sola existencia y actuación de la asociación ilícita, demostradas en el presente caso, implican la puesta en peligro que requiere la fi-



## *Poder Judicial de la Nación*

gura. De allí que hayamos observado en otra parte de la sentencia, la improcedencia del argumento de las defensas en cuanto a que debía existir una coincidencia de las intervenciones documentales y de los esquemas de intervención de los imputados con los períodos fiscales evadidos.

En este sentido, en orden a la necesidad de incorporación legal de esta figura, el entonces titular de la AFIP señaló que “la finalidad asociativa...no era la de perpetrar una determinada evasión fiscal sino brindar sustento a cualquier contribuyente que precise tal mecanismo y logística para evadir... Con esta figura la penalización estará dirigida a quienes faciliten o brinden el sostén material o ideológico a un universo no determinado de contribuyentes (tantos como quieran adquirir el producto ilícito), en la medida que se verifique la actuación de tres o más personas integrando una organización dedicada a estos fines...” (Lucuy, Carlos F. “El combate del crimen fiscal organizado”, en Periódico Económico Tributario, N° 279, ejemplar del 30/06/2003, p.2).

Debe subrayarse que *“no es requisito del tipo 15, inc. c de la ley penal tributaria que los miembros de la asociación ilícita fiscal sean contribuyentes (obligados al pago de los tributos evadidos). Los verdaderos obligados frente al fisco, que se valen de la actividad de la asociación ilícita para evadir sus propios tributos, serán autores del delito de evasión fiscal que la misma ley prevé. La figura pretende captar la actividad de quienes facilitan la evasión de otro, proveyéndole crédito fiscal apócrifo al verdadero obligado frente al fisco”* (cfr. Cámara Federal de Bahía Blanca, Sala 1, Expte. N° 66.729: “Shmidt, Martiniano Alberto A. y Steria, Carlos José s/auto de procesamiento”, del 30/12/2011).

Tal carácter puede ser perfectamente sostenido con la sola mención de la última conducta antes referida, en tanto las acciones de “formar parte de la asociación” y la de “cometer delitos penales tributarios” perseguida por aquélla, resultan absolutamente independientes, pudiendo ser diversos los sujetos activos de cada una como así también sus momentos consumativos, y no resulta necesario para la configuración del primer ilícito (la asociación) la efectiva comisión del delito perseguido por ésta (v.gr. la evasión), por tratarse aquél, además y como ya se expuso, de un delito de peligro abstracto.



Así, el crédito fiscal apócrifo provisto por la asociación habitualmente proviene –y así ha ocurrido en el caso que nos ocupa- de lo que se denomina “usinas”, donde se producen facturas comerciales de contribuyentes ficticios (personas físicas o jurídicas existentes sólo en papel pero sin actividad real), de otros que realmente existirían pero que no habrían vendido los bienes o prestado el servicio documentado por la factura comercial en cuestión (emisión consentida de facturas por parte de empresas reales), o de contribuyentes a los cuales se les habría duplicado aquella documentación.

Su posterior utilización por parte de los contribuyentes, generalmente ajenos a la agrupación, con el objetivo de aumentar su crédito fiscal en el IVA y/o aumentar sus gastos en el impuesto a las ganancias constituye el valor del producto que “comercializa” la empresa criminal, lo que finalmente redundaría en la disminución de las bases imponibles de aquellos gravámenes y, eventualmente, en la evasión total o parcial del pago de las correspondientes obligaciones tributarias.

En tal orden, la doctrina ha señalado que “...*el legislador tuvo en miras a quienes colaboran con el contribuyente, a quienes le aportan a éste el soporte técnico, logístico o intelectual para consumir la evasión*” (D’Alessio, Andrés José, “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, 2011, T. N°3, La Ley, pág. 1478, cita N° 348). Y que “... (se) *ha incorporado como delito independiente la denominada ‘asociación ilícita tributaria’*. Y en efecto de eso se trata, porque, a diferencia de los incisos anteriores, la conminación de una escala penal particular para quien forme parte de la asociación u organización indica claramente que no se trata de punir a una participación calificada (inc. a) o una circunstancia agravante (inc. b) sino a una conducta por completo autónoma” (SPINKA, Roberto E., “Derecho Penal Tributario y Previsional”, Ed. Astrea, Bs. As., 2007, p. 359).

Y también que “el ilícito en cuestión -asociación ilícita fiscal-, según la disposición normativa y acorde fue en definitiva sancionada, conforma un tipo penal autónomo en relación a la consumación de las conductas ilícitas evasivas; es decir, un tipo delictual de peligro abstracto que se consuma cuando se materializa el pacto delictuoso para sus integrantes originario” (Orce, Gui-





## *Poder Judicial de la Nación*

llermo y Trovato, Gustavo F., 'Delitos tributarios. Estudio analítico, del régimen penal de la ley 24769', Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2008, pág. 262).

El propósito de la asociación ilícita tributaria es la eventual comisión de delitos tributarios –que generalmente son perpetrados por terceros- pero de ningún modo la criminalización de la asociación ilícita podría depender de la cantidad de delitos que se cometan cuando, justamente, se parte de adelantar su punición al momento anterior a la lesión misma del bien tutelado por la ley penal tributaria. Y la pena puede ser aplicada aun cuando la asociación no haya logrado que se cometa todavía ni un solo ilícito. En términos semejantes se ha pronunciado reciente jurisprudencia sobre la materia (Camara Federal de Salta - Sala I, en causa nro. 7782/2017/CA3 caratulada: "Palópoli, Héctor Luis; Camacho, Alfredo Eduardo; Roldán Arnaldo Nelson y Jardín, Christian Marcelo s/infracción ley 24.769", de octubre de 2020).

En efecto, la doctrina ha destacado este aspecto al expresar que *"la esencia de este delito es la de no requerir ni siquiera el comienzo de ejecución de alguno de aquellos delitos"* (cfr. Catania, Alejandro, "Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769", Editores del Puerto, 2005, Buenos Aires, p. 225). Bajo esa misma cita doctrinaria se ha fundado la decisión de sostener que incluso en aquellos casos donde las conductas evasión del impuesto no constituyan delitos por encontrarse debajo del límite punible, "...sin embargo, resultan abarcados por el propio objeto de esta asociación..." (Juzgado Federal De Mar Del Plata, en causa "N.N. Imputado Gallinal, Jose Luis y otros s/ Inf. Ley 24.769", FMP 270/2014, del 14 de junio de 2018).

Vale recordar que los delitos de asociación ilícita fiscal y evasión tributaria reciben un tratamiento legal distintivo, debiendo entenderse a *"...la asociación ilícita tributaria como un delito formal que solamente requiere, como requisito del tipo, el 'formar parte' de una organización de tres o más personas que 'habitualmente' este destinada a cometer delitos tributarios y que tenga cierta permanencia. No es necesario que los delitos indeterminados a cometer por la asociación sean efectivamente cometidos. A mayor abundamiento, cabe sostener que los delitos tributarios que concretamente sean ejecutados por la asociación ilícita, pueden concurrir con ella. En síntesis, a diferencia del delito de*



*evasión que es de resultado, la asociación ilícita es una figura de peligro que permite castigar un hecho preparatorio, sin necesidad de que se consumen delitos tributarios concretos...* (CNPE, Sala “A”, Reg. 587/2015. Autos: “A. - D.”, 836/2015/1/CA1, del 10/12/15, del voto del Dr. Bonzón).

En igual sentido se ha expuesto en otros precedentes dictados bajo la vigencia de este texto legal, en cuanto a que para la configuración del delito de asociación ilícita fiscal: *“...lo que resulta relevante es la finalidad de la organización de cometer delitos tributarios, por lo que los concretos delitos de ese carácter en cuya comisión efectivamente intervengan los integrantes de esa asociación ilícita, resultan hechos delictivos distintos que no se superponen, sino que concurren en forma real con aquel delito de asociación ilícita. En efecto, el delito de asociación ilícita requiere la existencia de un acuerdo de voluntades, estable y con caracteres de cohesión y organización, entre tres o más personas imputables con la finalidad de cometer delitos en forma general e indeterminada, aun cuando se refieran a una misma modalidad delictiva, en el caso, la comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria. Ciertamente es entonces que esta pluralidad de planes delictivos para la comisión de delitos indeterminados, es lo que en este aspecto integra el tipo penal, por lo que los concretos delitos cometidos por la asociación ilícita no pertenecen al tipo”* (CFCP – Sala IV, en causa “SANTIAGO, Oscar Lucas y otros s/ recurso de casación” nro. FCB 12000035/2012/5/CFC2, junio de 2017).

También en este orden se expresaron otros tribunales incluso bajo la versión legal aquí aplicable, donde se sostuvo que *“...lo que en realidad persigue la norma es a una organización o asociación que habitualmente cometa (autoría y coautoría) o ayude a cometer (participación) delitos comprendidos en la Ley Penal Tributaria y Previsional. Es importante aclarar que no es necesaria la consumación del delito sino que lo que se reprime es la calidad de miembro de la asociación por el mero hecho de su creación, independientemente que se consuma el objetivo criminal perseguido por la organización -los delitos fiscales- no exigiéndose siquiera su comienzo de ejecución”* (Cámara Federal De Mendoza - Sala B en FMZ 18369/2015/42/CA5 caratulados “Legajo de Apelación en autos Prete, Pablo, Salinas Rodríguez, Federico Javier, Delfino, Carlos Nico-



## *Poder Judicial de la Nación*

lás; Canzonieri, José Luis y Otros P/ Infracción Ley 24.769, Asociación Ilícita Fiscal”, del 03 de Octubre de 2017).

Por su parte, la jurisprudencia especializada en la materia ha expresado que: “...Lo denunciado son las acciones atribuidas a los imputados de formar parte de una organización destinada a cometer ese tipo de infracciones. Al igual que las asociaciones ilícitas a las que se refiere en general el artículo 210 del Código Penal, las mencionadas en el artículo 15 inciso c de la Ley Penal Tributaria, constituyen hechos preparatorios o de adelantamiento de la punición cuya configuración no depende de que se materialicen los propósitos de la asociación...En síntesis, cabe resaltar que, a diferencia del delito de evasión que es de resultado, la asociación ilícita es una figura de peligro que permite castigar un hecho preparatorio, sin necesidad de que se consumen delitos tributarios concretos. ...El delito de ‘asociación ilícita fiscal’, incorporado por la ley 25.874 al artículo 15 inciso c) de la Ley Penal Tributaria, resulta ser un tipo penal autónomo, de carácter permanente y de peligro abstracto, cuyo bien jurídico protegido es la incolumidad de la hacienda pública...” (CNPE, Sala "A", 10 de diciembre de 2015 en Legajo de Apelación en Autos "Denunciante: AFIP-DGI sobre infracción Ley 24.769" N° CPE 836/2015/1/CA1 - N° de orden 29.804 - Juzgado Penal Económico N° 11, Secretaría N° 21).

Tal ha sido también el criterio adoptado por los doctores Gemignani y Riggi, en causa N° FGR 17562/2013/CFC2 “Petracca, Mariela Eva y otros s/recurso de casación”, del 14 de julio de 2021, Sala III CFCP, en cuanto el primero de ellos expresó que: “según emana de los fundamentos del proyecto de ley que incorporó el tipo penal en cuestión ‘...la intención es penalizar fuertemente la actuación de quienes toman parte de organizaciones tendientes a aportar el soporte técnico, logístico o intelectual para la comisión de delitos de evasión, teniendo en mente en particular, a las organizaciones dedicadas a la creación u comercialización de comprobantes o facturas apócrifas, utilizables para incrementar ilícitamente el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, y/o incorporarlos como gastos deducibles en el Impuesto a las Ganancias...’ (cfr. sobre el particular, Rodríguez, Rubén E., “Responsabilidad Profesional” en “Trata-



do del Régimen Penal Tributario”, Bertazza, Humberto J. y Marconi, Norberto J. Directores, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 335, Buenos Aires, 2010).

“...Para que se tipifique el delito de asociación ilícita tributaria, se requiere la existencia de un acuerdo de voluntades, estable (en el sentido de permanencia en el tiempo) y con caracteres de cohesión y organización, entre tres o más personas imputables con la finalidad de cometer delitos en forma habitual e indeterminada, aun cuando se refieran a una misma modalidad delictiva, en el caso, la comisión de los delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria (esta es la postura que adopté como Vocal de la Sala IV de la CFCP “in re” “SANTIAGO, Oscar Lucas y otros s/ recurso de casación”, causa Nro. FCB 12000035/2012/5/CFC2, reg. N° 641 / 17.4, rta. el 5 de junio de 2017).

En este mismo orden de ideas, cuadra adunar que la figura penal analizada constituye un delito autónomo y de carácter especial con características similares a las previstas en el art. 210 del Código Penal pero referida al mundo de los ilícitos tributarios, la cual dada su naturaleza de delito de peligro abstracto se consuma con la sola participación en la asociación de algún sujeto imputable con la finalidad requerida por la norma, con independencia de la efectiva comisión de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria que constituyen su objeto. De otra parte, es dable destacar que el bien jurídico tutelado en la figura en examen es la hacienda pública nacional, al igual que como acontece en todos los demás delitos previstos en la Ley 24.769... no constituye un requisito del tipo penal del art. 15 inc. “c” de la ley 24.769 que quienes integren o conformen una asociación ilícita tributaria deben tener la condición de contribuyentes (obligados al pago de los tributos que se pretende evadir). Ello es así, toda vez que la única interpretación posible y razonable que a mi entender puede otorgársele a la norma en cuestión es que al incorporar el delito de asociación ilícita tributaria a la ley 24.769, lo que nuestros legisladores quisieron tipificar fue la conducta disvaliosa de quienes facilitan la evasión fiscal de otro (contribuyente), proporcionándole a ese otro los medios necesarios para la consecución del fin propuesto...” (del Voto del doctor Juan Carlos Gemignani).

Por su parte, el vocal que compartió sus fundamentos, agregó que “...hemos advertido en anteriores pronunciamientos que ‘...no es ne-



## *Poder Judicial de la Nación*

cesario probar fehacientemente que los miembros de una asociación ilícita hayan cometido delitos concretos. No es necesario probar ningún delito puntual, sino que basta con probar, que un número mínimo de partícipes forman o toman parte de una asociación –por el solo hecho de ser miembro-, que como es lógico debe formarse mediante acuerdo o pacto de sus componentes, con el propósito colectivo de cometer delitos en forma indeterminada -es decir no específicos- (Cfr. nuestro voto en “Real de Azúa, Enrique Carlos s/rec. de casación”, Causa 5023, de esta Sala del 21/12/2006). Se infiere de lo expuesto, que se trata de un delito autónomo, escindible de la ulterior comisión de los delitos para la cual ha sido formada. En tal dirección se ha afirmado que ‘...el concurso entre el delito de asociación ilícita y alguno de los previstos por la ley 24769 es material (art. 55 del CP)’ (cfr. “Palacios, Alberto M. y otro s/recurso de casación”, Causa 7876 CFCP, sala 1, del 19/2/2007)...’ (del Voto del doctor Eduardo Rafael Riggi).

### c)- Configuración típica en el caso en análisis

Como ya ha sido establecido, la figura delictiva prevista en el art. 15 inc. c de la ley 24769 consiste en formar parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la ley 24.769.

La ley utiliza dos giros lingüísticos: organización y asociación. Desde una perspectiva de análisis semántico, ambas expresiones ofrecen un matiz diferencial, en tanto lo que caracteriza a la organización es la existencia de medios adecuados que funcionan para alcanzar un fin determinado; más allá del puro interés asociativo y la pluralidad de personas a la que alude el otro concepto. Dichos medios confluyen en la formación de una especial estructura objetiva, con una fuerte organización interna; aspecto que no está presente en la simple asociación, en donde basta la cohesión requerida por el grupo, en orden a la consecución de los fines delictivos comunes. Pese a esta diferencia, existe consenso respecto a que ambas formas típicas tienen en común “su lejanía de lo puramente esporádico”. En otras palabras, el acuerdo asociativo –sea ya que se constituya en derredor de una organización o una mera asociación– debe ser duradero y no meramente transitorio.



Otra de las notas distintivas de la nueva figura se refiere a la habitualidad –que no debe ser confundida con la nota de permanencia antes aludida-, la que se refiere a la repetición de actos perpetrados con el fin de cometer hechos ilícitos tributarios. Así, una asociación ilícita tributaria es, en principio, un sistema o una organización en la que cada miembro aporta algo; pero esta organización se distingue claramente de los hechos particulares “determinados” que puedan concretarse. El requisito de que la organización se encuentre destinada a cometer delitos “indeterminados” implica, más que nada, que en la constitución de esa asociación figure el fin delictivo, que trascienda al planeamiento ocasional y concreto de los hechos particulares a los que propende (cfr. Orce, Guillermo y Trovato, Gustavo, “Delitos tributarios. Estudio analítico del régimen penal de la ley 24.769”, Abeledo Perrot, 2008, Buenos Aires, p. 260).

La doctrina explica que “se trata de una asociación ilícita de similares características a la prevista por el art. 210 del Código Penal, con el agregado de que la organización delictiva tipificada en el artículo 15, inciso c, se refiere específicamente al universo de la ilicitud tributaria. Es decir, estamos en presencia de un delito autónomo de asociación ilícita fiscal, con las mismas características de la asociación ilícita prevista por el artículo 210 del Código Penal: formar parte de una asociación u organización que esté compuesta por un mínimo de tres personas, que tenga por finalidad delinquir en forma indeterminada con relación a delitos tributarios, y con permanencia en el tiempo” (cfr. Borinsky, Mariano; Galván Greenway, Juan Pedro y otros “Régimen Penal Tributario y Previsional”, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, Abril 2012, pág. 195).

A la vez, la asociación ilícita fiscal, desde el punto de vista del tiempo de comisión del hecho es un delito permanente. Su comisión se inicia con la conducta asociativa y se extiende hasta que el grupo se desintegra.

En función de los conceptos antes vertidos, se concluye que en cuanto al elemento objetivo del tipo penal que nos ocupa, deben concurrir las siguientes circunstancias: 1) la existencia de una organización o asociación con un mínimo de tres integrantes, lo que conlleva a un acuerdo de voluntades (expreso o tácito) con intención de perdurar en el tiempo; 2) el fin propio y habitual de la asociación debe estar dirigido a cometer cualquiera de los delitos tipificados



## *Poder Judicial de la Nación*

en la ley penal tributaria, ya sea por alguno/s de sus propios miembros (en cuyo caso se presentará eventualmente a su respecto un concurso real de ambos ilícitos) o bien por terceros, obligados tributarios ajenos a la organización.

Y en lo atinente al elemento subjetivo, el dolo solicitado por el art. 15 inc. c requiere: 1) el conocimiento de integrar una asociación de tres o más personas, de que esa organización tiene el fin de cometer delitos tributarios, de que habitualmente hace conductas que persiguen ese fin; y 2) la voluntad de realizar algún aporte a esa asociación con tal objeto. Así, se perfecciona con el grado de conocimiento que se le exige al autor del delito en lo que respecta a la conducta que está ejecutando, como a su vez, el aspecto volitivo, representado por el querer, es decir, la intención de formar parte de la asociación ilícita y colaborar con ella.

Se destaca que no resulta necesario el conocimiento entre sus integrantes, alcanza con que cada uno conozca que es parte integrante de la asociación. En este orden, la doctrina ha sostenido que: "...Tal como se encuentra redactada -asociación ilícita fiscal (art. 15, inc. c, Ley 24.769)-, el dolo exigido -"a sabiendas"- se configura con la voluntad de pertenecer y de saberse realmente perteneciente al grupo y ser aceptado por los restantes miembros, aun cuando el acuerdo pueda ser tácito o expreso (García Vizcaíno, Catalina, "Delitos contra el orden público. Asociación Ilícita", Lexis 5605/6143). No se precisa una especial estructura de la misma, sino de la mínima cohesión requerida por el grupo, en orden a la consecución de los fines delictivos comunes. En ese sentido se explica que sólo se requiere "que exista una cohesión entre los integrantes, aun cuando no se conozcan entre sí. Concebida así la estructura organizacional base, es evidente que cada uno de sus miembros debe tener un rol, una función dentro de ella" (cfr. Folco, Abraldes, López Biscayart, "Ilícitos fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria", Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2004, pág. 162).

En otras palabras, el delito requiere voluntades comunes hacia una empresa común de cierta duración, de cierta continuidad en el quehacer delictivo, indispensable para cumplir con los objetivos que sus integrantes se impusieron. "... Para la existencia de la asociación, si bien se requiere un cierto grado de organización, no es necesario un funcionamiento grupal de acuerdo a



*un régimen estatutario o codificado específico, aun cuando tal posibilidad no resulte excluyente. Ni siquiera que los miembros de la asociación se conozcan entre sí, ni que se organicen en conjunto o habiten el mismo lugar, etc. Lo que importa es que exista un pacto de voluntades comunes en relación con una organización cuya actividad principal sea la de perpetrar hechos ilícitos en forma indeterminada. El requisito de la organización se cumple con una mínima existencia grupal que revele una acción común en procura de objetivos criminales comunes...”* (conf. Buompadre, Jorge E.: “Derecho Penal. Parte Especial” - Ed. Mave - Buenos Aires - 2000 - T. 2).

En tal orden de razonamiento, al efectuar el análisis de la participación criminal y la responsabilidad de Omar Antonio Pazzi y Hernán Gustavo Protti se ha señalado con detalle cuáles fueron sus aportes concretos a la existencia y funcionamiento de la asociación, con indicación expresa, en todos los casos, de las pruebas que lo demuestran, fundamentalmente las gestiones por ellos realizadas en orden a introducir al sistema tributario personas físicas a efectos de crear usinas falsas para la producción de comprobantes de venta simulados.

En efecto, en base a la prueba allí analizada, y a lo determinado en la sentencia nro. 44/2021, y su confirmación en lo relativo a los hechos, mediante la Resolución Registro Nro. 767/2023 de la CFCP, se corroboró la ocurrencia histórica de los hechos y se determinó la existencia de una asociación ilícita tributaria conformada por dos sub-grupos con relación entre sí que comercializaba con habitualidad crédito fiscal espurio a contribuyentes con el fin de evadir sus impuestos frente al fisco.

Se demostró también que en dicha organización criminal actuaron personas que dirigían la maniobra desde la cúspide (Astudillo, Zeballos y Liporaci), y que impartían directivas a sus colaboradores y ejecutores, operaban las empresas ficticias que eran constituidas e inscriptas ante la AFIP, administraban la emisión de facturación apócrifa y establecían el porcentaje con el que se la vendía a los usuarios. Que los sucedía un segundo eslabón con capacidad decisoria, aunque menor a los organizadores pero cuya actividad era esencial en la conducta, quienes gestionaban la creación de usinas falsas, asesoraban y certi-





## *Poder Judicial de la Nación*

ficaban documentación con tal objeto, conseguían a las personas que aportarían sus datos para hacerlos figurar como titulares, o bien actuaban como mediadores o intermediarios entre la fabricación de comprobantes apócrifos y su comercialización, todas actividades indispensables para la concreción de la maniobra. En este escalón de la organización se encontraba Omar Pazzi.

Finalmente, en el grupo de la estructura asociativa se constató que intervenían algunos vendedores de menor trascendencia en la configuración de la conducta delictiva y colaboradores, como es el caso de Hernán Gustavo Protti, que siempre en cumplimiento de directivas contribuyó a la asociación a través de la inscripción de personas para hacerlos figurar como contribuyentes. En este último caso, y conforme ya se ha desarrollado al tratar su intervención en concreto, se pudo conocer que esa cooperación no resultó esencial, al menos desde el punto de vista de la acusación pública, en relación a los grandes volúmenes con los que operaban los subgrupos, por ello se entendió que su participación era de orden secundaria.

Ha quedado acreditado así el acuerdo criminal tanto como la división de tareas y la clasificación de funciones operativas de los integrantes de la asociación, como también el conocimiento de los integrantes de la asociación sobre la falsedad de las facturas y de las usinas y, por ende, de que el objeto de las últimas era vender crédito fiscal apócrifo, efectuando no obstante los aportes que por cada uno de ellos se analizó, con la trascendencia que tuvieron respectivamente en la configuración del ilícito.

En efecto, el *modus operandi* referido en los apartados anteriores demuestra que los acusados –que se tratan de más de tres personas– conformaron una organización, con permanencia en el tiempo, en la que en base a un acuerdo de voluntades realizaron con habitualidad la emisión de facturas apócrifas utilizables para la comisión de delitos tributarios, lo que cumple acabadamente con las exigencias objetivas del tipo penal en análisis.

En relación al aspecto subjetivo de la figura endilgada, conforme la posición que cada uno de los imputados ocupaba en la organización y lo analizado al tratar la situación de cada condenado en particular, surge –como ya se dijo– el conocimiento que ellos tenían de estar integrando una organización



destinada habitualmente a cometer alguno de los delitos tipificados en la ley 24769, es decir que tenían intención de formar parte de la organización y colaborar en la misma efectuando los aportes se plasmaron pormenorizadamente respecto de cada uno en el apartado anterior. Se destacan a este respecto las comunicaciones telefónicas intervenidas y transcritas precedentemente, de las que se desprende clara e inequívocamente que los interlocutores conocían el tenor de la maniobra desplegada y en la que intervenían.

Con todo ello, se encuentra acreditada la potencialidad del perjuicio fiscal que exige la figura legal por la que fueron condenados los acusados.

#### **4. Pena**

Establecida la responsabilidad penal de los condenados, corresponde ponderar la medida de la sanción penal.

Dichas pautas se formularán de acuerdo a los criterios legales, indicadas fundamentalmente dentro de los artículos 40 y 41 del CP, como también en los criterios jurisprudenciales provenientes de los tribunales de mayor importancia de nuestro país.

##### **a. Pautas Generales:**

El tribunal entendió que se hacen presentes comunes a ambos vinculados circunstancias vinculadas a la magnitud del injusto, resultan comunes a las personas condenadas porque en definitiva pertenecían a la misma organización ilícita tributaria.

Una de las particularidades se refiere a la pluralidad de intervinientes, porque se trató del juzgamiento de dieciocho personas, dieciséis de ellas resultaron condenadas; además, como fuese expuesto en otros pasajes de la sentencia, la presente causa responde a una elevación parcial toda vez que aún queda un remanente de la investigación original en etapa de instrucción.

Como fuese detallado en otros casos similares, sentenciados por este tribunal -v. por ejemplo, sentencia 36/2018, de expte. FRO 23772/2014, caratulada “Cantero”, 20002/2013, y sentencia nro. 43.2020, dictada en “Insaurralde”, FRO nro. 31269/2016/TO1, entre otros- la circunstancia referida a la pluralidad de intervinientes, también debe ser ponderada para la intensidad



## *Poder Judicial de la Nación*

de la pena, en la medida que exceda, como en el caso, el mínimo de personas contempladas en la disposición. Si bien los antecedentes citados refieren a la agravante prevista en el inc. c del art. 5 de la ley 23.737, en el caso, el requisito de intervinientes constituye un elemento típico de la norma del art. 15 inc. c) de la ley 24.769, pero no obstante ello, debe valorarse para graduar la intensidad de la respuesta punitiva, de lo contrario, cabría suponer que una actividad organizada por tres intervinientes debiera concluir en la misma intensidad penal que si tuviese, más de tres integrantes.

Por lo tanto, la pluralidad de intervinientes ya utilizada para establecer el injusto, no significa que no puedan volver a ser ponderadas en cuanto a su intensidad en términos de culpabilidad, sin que ello signifique que pueda alegarse una doble valoración para ponderar la pena, porque también han sido circunstancias ponderadas como cuestiones para establecer el injusto.

Así lo entiende Righi, que considera que, si bien los conceptos de injusto y culpabilidad vienen dados por la teoría del delito, existe una diferencia de perspectiva. Agrega que si bien a los fines de la imputación, lo que interesa es si concurren sus presupuestos, lo que se considera en el ámbito de medición de la pena es su intensidad (v. Righi, Esteban, Teoría de la pena (Buenos Aires, 2001). Hammurabi, págs. 222 y 223).

En el mismo sentido lo ha expuesto Patricia Ziffer, al sostener que ilícito y culpabilidad son conceptos graduables y el paso decisivo de la determinación de la pena es definir su gravedad (Ziffer, Patricia, "Lineamientos de la determinación de la pena" (Buenos Aires, 2005) 2° ed. 1° reimpr, pág. 107).

Otra pauta común que se hace presente para agravar el grado del injusto tiene que ver con la magnitud alcanzada por esta asociación ilícita tributaria en la emisión de facturación apócrifa, pudiéndose determinar la generación de un crédito fiscal aproximado de \$247.315.951, mediante la emisión de 28.795 comprobantes electrónicos apócrifos, por un monto neto aproximado de \$1.204.276.275 -durante enero de 2015 a diciembre de 2016-, habiéndose constatado que al menos el 50% de ese crédito fiscal había sido ya computado por los usuarios en sus libros. También se valora la cantidad de "usinas" creadas por esta agrupación, la que se computó en 19 en el período descripto, de lo que no se des-



carta que sea un número mayor, toda vez que en la conversación mantenida el 14/06/2017 entre Astudillo y Furini, aquel mencionó que tenía a su disposición 45 empresas, sobre lo cual el testigo Amante explicó que se refería al “famoso listado de las empresas que administraban ellos más las que ellos ofrecían de los grupos de Bs As con los cuales hacían ese clearing. Esos listados han aparecido en los allanamientos”. Por otra parte se constató que hubo más de 3000 usuarios a lo largo de todo el país.

Los datos indicados resultan más que suficientes para sostener la lesión al bien jurídico, toda vez que, tal como se ha sostenido al momento de analizar la calificación legal, la figura en análisis responde a la protección de la hacienda pública, aun por medio de la generación de peligro en su afectación o del adelantamiento de la punibilidad a su respecto.

Además, como pauta de agravación de la pena, se presenta el ánimo de lucro demostrado por cada uno de los condenados.

En este sentido, cabe recordar las palabras de Fontán Balestra cuando sostuvo que por ánimo de lucro se entiende el propósito de obtener un beneficio económico -es decir, cualquier ventaja de orden patrimonial-, sin que sea necesario que aquél se logre. Esta predisposición a la obtención de una ventaja económica implicó, en varios casos que se han documentado en la causa, llevar al engaño a personas inocentes, ajenas a estas maniobras, ocasionándoles un perjuicio frente a la Afip (véase el caso de Ezequiel Vélez, Cristian Wilichosky, Alberto Albarracín y Antonio Di Rico). En este sentido se adelanta que esta agravante fue tomada en cuenta con mayor intensidad en los casos de Tesorero, Miranda Cairo y Rete.

Finalmente, entiendo también la presencia de circunstancias de atenuación de la pena comunes a todos ellos, tales como el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos delictivos, hasta su juzgamiento efectivo, producto de las elevaciones parciales decididas durante la investigación.

Establecidas las consideraciones generales, se especificará cada caso en particular.

## **b. Casos particulares.**

### **1. Omar Antonio Pazzi:**



## *Poder Judicial de la Nación*

La Fiscalía General solicitó que fuese condenado como coautor del ilícito de asociación ilícita tributaria previsto en el art. 15 inc. c) de la ley 24.769, a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas.

La querellante, por su parte, peticionó una pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas.

La defensa entendió que las conductas en las que incurrieron sus asistidos fueron atípicas, en un claro cuestionamiento a la norma que encuadró sus conductas y al bien jurídico tutelado por aquella. Además cuestionó el pedido de pena formulado por los acusadores respecto de sus asistidos, considerando que no se han ponderado las circunstancias previstas en los arts. 40 y 41 del CP, siendo que no se han presentado ninguno de los supuestos agravantes pero en cambio sí muchos de los atenuantes; no obstante lo cual se han apartado deliberadamente del mínimo legal previsto.

El tribunal finalmente condenó a Omar Antonio Pazzi como coautor del delito de asociación ilícita tributaria, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena (arts. 12 y 45 del C.P. y art. 15 inc. c) de la ley 24.769 –conf. Ley N° 25.874–), imponiéndose una pena que coincide con el mínimo de la calificación legal adoptada.

En cuanto a circunstancias atenuantes, además de valorarse lo dicho de manera genérica, se ponderó que mantuvo un buen comportamiento durante el proceso y la inexistencia de antecedentes de condena. Además se tuvo en consideración los padecimientos que vivenció como consecuencia del presente proceso penal, y sus problemas de salud, lo que fue relatado a través de su defensa técnica, circunstancia que podrán ser renovadas por la defensa al momento de que adquiera firmeza el pronunciamiento, en orden a observar posibles concurrencias de circunstancias morigeradoras del cumplimiento de la pena impuesta.

### **2. Hernán Gustavo Protti:**

Fue acusado por la Fiscalía General como partícipe secundario del delito de asociación ilícita tributaria, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de las reglas de conducta que estime el



Tribunal (arts. 46 del C.P. y arts. 15 inc. c) de la ley 24.769 –conf. Ley N° 25.874-).

La querella petitionó, la aplicación la pena de 5 años de prisión por considerarlo coautor del delito de asociación ilícita tributaria (arts. 45 del C.P. y arts. 15 inc. c) de la ley 24.769 –conf. Ley N° 25.874-).

La defensa solicitó la absolución de su cliente por cuanto sostuvo que no se había acreditado su intervención en el hecho o que de manera subsidiaria debía contemplarse a la duda como principio beneficiante.

El tribunal lo condenó como partícipe secundario del delito de asociación ilícita tributaria, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de determinadas tareas (arts. 26 y 46 del C.P. y art. 15 inc. c) de la ley 24.769 –conf. Ley N° 25.874-).

Para decidir la pena, se observaron las mismas circunstancias agravantes ya consideradas. También se ponderaron su edad, y grado de madurez como para comprender el alcance de sus actos.

En cuanto a circunstancias atenuantes, además de valorarse lo dicho de manera genérica, se ponderó que mantuvo un buen comportamiento durante el proceso y la inexistencia de antecedentes de condena. También se tuvo en consideración que éste encartado se explayó en relación a las consecuencias negativas en lo económico sufridas por esta causa.

### **c. Inhabilitación absoluta**

La inhabilitación absoluta puede establecerse como pena accesoria cuando la pena privativa de libertad impuesta supera los tres años de prisión. Se encuentra prevista en el art. 12 del Código Penal, donde se establece que el plazo mínimo será por igual tiempo al de la condena. Por lo tanto, y atento que la pena privativa de libertad impuesta al condenado supera los tres años de prisión, corresponde establecer esta pena accesoria, con el alcance previsto en el art. 19 del Código Penal, y por el término menor previsto en el art. 12 del mismo ordenamiento, atento que dada la naturaleza de la conducta penal atribuida, no se aprecia razonable ni necesario, establecer su prolongación más allá del tiempo de la pena privativa de la libertad seleccionada previamente. Dicha sanción accesoria se aplica para el caso de Omar Antonio Pazzi.



**d. Reglas de conducta art. 27 bis CP**

Por otro parte, el Art. 27 bis del C.P. permite que nuestro derecho de fondo esté de acuerdo con las modernas doctrinas que consideran a la pena en su función social y no ya en su faz meramente retributiva, procurando de esta manera que los delincuentes primarios u ocasionales, cuyas condenas sean dejadas en suspenso, logren una verdadera resocialización mediante el cumplimiento de reglas de conducta que hacen a su inserción dentro del marco social, siempre que las mismas sean o se proyecten como útiles para evitar la comisión de nuevos delitos.

Por lo tanto, y con miras a ese objetivo, correspondió imponerle al condenado Hernán Gustavo Protti el cumplimiento, por igual término al de su condena, de las siguientes reglas de conducta (art. 27 bis del C.P.): a) mantener su domicilio real e informar, de forma inmediata, cualquier cambio que se realice; b) someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP).

**e. Bienes sujetos a la presente causa**

En el punto 9 del veredicto 70/2023, se dispuso estar a lo ordenado en la sentencia nro. 44/2021 en lo que respecta a los elementos incautados. En su fundamentación, el Tribunal precisó que el decomiso versaba en relación a los bienes que resultaron secuestrados en los allanamientos, esto es sumas de dinero que ascendían a U\$S 39.235, \$806.787 y €1405 y la totalidad de los elementos informáticos y de almacenamiento digital secuestrados en los domicilios de calle Juan Pablo II 208 bis, Iriondo 2228, Córdoba 645 piso 7 dpto. 7, Av. Libertad 158 piso 7, Mendoza 621 piso 7 departamento 1, 9 de julio 982 piso 5 dpto b, Paraguay 239 1° piso, San Nicolás 2396, Pellegrini 20, Gorriti 343, todos de Rosario y Giacchino 780 de la localidad de Luis Palacios.

En tanto, en el punto 24 de aquel veredicto se ordenó diferir la decisión respecto del decomiso solicitado sobre los restantes bienes secuestrados, a las resultas de las parcialidades pendientes de juzgamiento en el marco de la causa, que al momento se encontraban en la etapa instructoria.

Conforme se ha indicado al detallar el petitorio de los acusadores, nada requirieron en relación a dichos bienes, por ello, y toda vez

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L



que a la fecha, la sentencia 44/2021 no se encuentra firme ni ejecutoriable, y previendo la posibilidad que la presente pueda ser objeto de eventual recursos, se estará a la adquisición de firmeza y ejecutoriedad de ambos pronunciamientos.

### **5. Costas**

Atento la forma como se resolvió la presente causa, las costas del proceso deben ser impuestas a los condenados, conforme lo dispuesto en los arts. 530 y 531 del C.P.P.N.

Con todo lo expuesto, quedó formulado el Acuerdo que motivó el presente y fundada la sentencia cuya parte resolutive se registró en el Protocolo de este Tribunal bajo el N° 70/2023.-

---

*Fecha de firma: 23/10/2023*

*Firmado por: EUGENIO MARTINEZ FERRERO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: FLORENCIA ELISA RODRIGUEZ, SECRETARIA*



#37008296#388566300#20231023135125667